



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN DERECHO



MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA, HECHOS E INAPLICACIÓN DE
LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN, QUE AFECTAN EL DEBIDO
PROCESO EN SENTENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE PUNO, 2013 - 2014

TESIS

PRESENTADA POR
OLGA MADELAINE CHURA PEREZ

PARA OPTAR GRADO ACADÉMICO DE
DOCTOR EN DERECHO

JULIACA – PERÚ
2016



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN DERECHO

MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA, HECHOS E INAPLICACIÓN DE
LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN, QUE AFECTAN EL DEBIDO
PROCESO EN SENTENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE PUNO, 2013 - 2014

TESIS

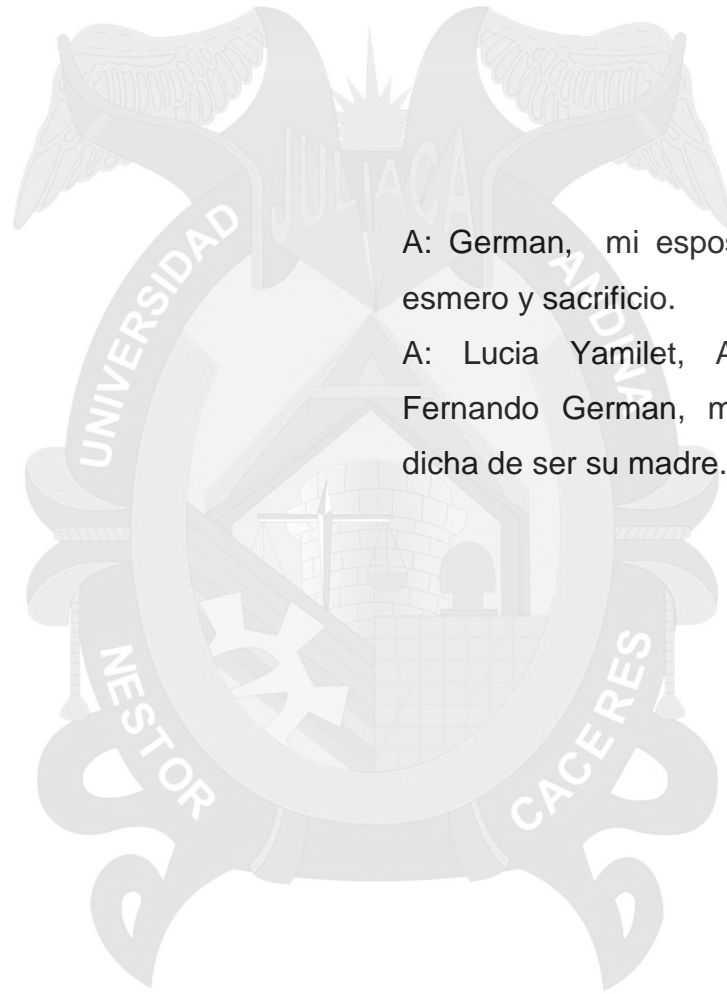
PRESENTADA POR
OLGA MADELAINE CHURA PEREZ
PARA OPTAR GRADO ACADÉMICO DE
DOCTOR EN DERECHO

PRESIDENTE DEL JURADO : _____
Dr. Efraín Wilfredo Condori Cruz

1er. MIEMBRO DEL JURADO : _____
Dr. Percy Rogelio Carrasco Reyes

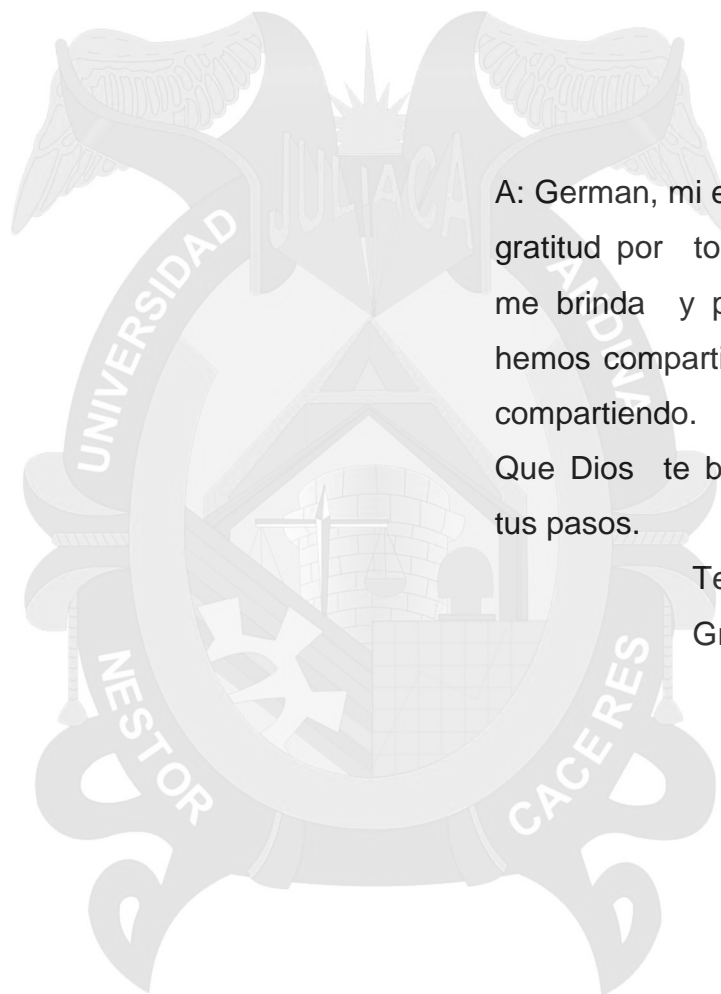
2do. MIEMBRO DEL JURADO : _____
Dr. Freddy Octavio Checa Condori

ASESOR DE TESIS : _____
Dr. German Apaza Paricahua



A: German, mi esposo: por su amor esmero y sacrificio.

A: Lucia Yamilet, André Rafael y Fernando German, mis hijos, por la dicha de ser su madre.



A: German, mi esposo: mi infinita gratitud por todo el apoyo que me brinda y por todo lo que hemos compartido y seguiremos compartiendo.

Que Dios te bendiga e ilumine tus pasos.

Te amo.

Gracias.



ÍNDICE

DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE	v
INTRODUCCIÓN.....	xiii
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	17
1. EL PROBLEMA	17
1.1. Análisis de la situación problemática	17
2. OBJETIVOS	21
2.1. Objetivo general.....	21
2.2. Objetivos específicos.....	21
3. HIPÓTESIS	22
3.1. Hipótesis general.....	22
3.2. Hipótesis específicos.....	23
5. VARIABLES E INDICADORES.....	24
6. LIMITACIONES	24
CAPÍTULO II	26
MARCO TEÓRICO.....	26
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DISEÑADA.....	26



2. BASES TEÓRICAS O DOCTRINARIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN.....	33
1. LA MOTIVACIÓN	33
2. LA PRUEBA	78
3. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA	85
4. LA MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS	88
5. MÉTODOS DE VALORACIÓN.....	92
6. EL DEBIDO PROCESO	98
3. MARCO CONCEPTUAL	111
CAPÍTULO III	116
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	116
1. METODOLOGÍA.....	116
1.1. Diseño de la investigación	116
1.2. Tipo de investigación	116
1.3. Método de la investigación	117
1.4. Población y muestra	117
1.5. Procedimientos de investigación y contrastación de hipótesis	117
1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	118
1.7. Fuentes de investigación.....	120
CAPÍTULO IV	122
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	122
1. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS	122



NÚMERO DE CUADRO N° 01.....	122
EN LA SENTENCIA SE ENUNCIA LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN.....	122
GRÁFICO DEL CUADRO N° 01	123
NÚMERO DE CUADRO N° 02.....	126
EN LA SENTENCIA CONTIENE LA ENUNCIACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ALTERNATIVAS A LA HIPÓTESIS ACUSATORIA.....	126
GRÁFICO DEL CUADRO N° 02	127
NÚMERO DE CUADRO N° 03.....	130
MOTIVACIÓN DEL JUICIO HISTÓRICO ES CLARA	130
GRÁFICO DEL CUADRO N°03	131
NÚMERO DE CUADRO N° 04.....	133
LA MOTIVACIÓN FÁCTICA ES LÓGICA.....	133
GRÁFICO DEL CUADRO N° 04	134
NÚMERO DE CUADRO N° 05.....	136
LA MOTIVACIÓN SOBRE LOS HECHOS ES COMPLETA.....	136
GRÁFICO DEL CUADRO N° 05	137
NÚMERO DE CUADRO N° 06.....	140
LAS FUENTES DE PRUEBAS VALORADAS	140
GRÁFICO DEL CUADRO N° 06	141
NÚMERO DE CUADRO N° 07.....	143



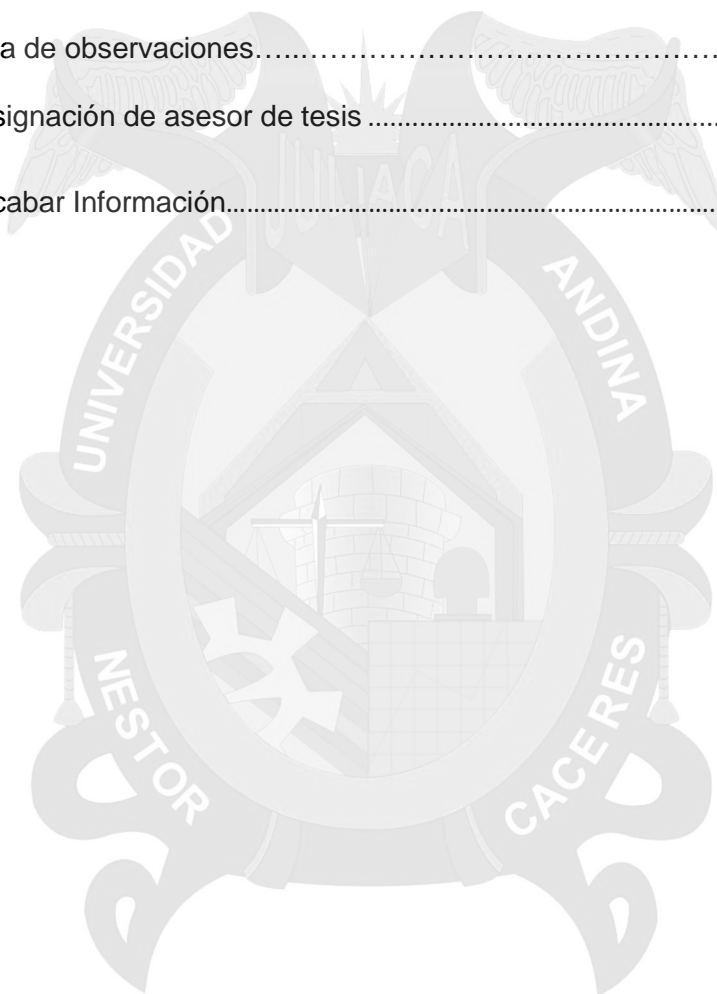
LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA CONSIDERA TODAS LAS PRUEBAS	
PRACTICADAS	143
GRÁFICO DEL CUADRO N° 07	144
NÚMERO DE CUADRO: 08	146
EL JUEZ JUSTIFICA LA MOTIVACIÓN FÁCTICA EN LAS PRUEBAS	
LEGÍTIMAMENTE INCORPORADAS EN EL JUICIO	146
GRÁFICO DEL CUADRO N° 08	147
NÚMERO DEL CUADRO 09	151
LA MOTIVACIÓN SOBRE EL JUICIO FÁCTICO CONTIENE LOS RESULTADOS DEL	
EXAMEN INDIVIDUAL DE LAS PRUEBAS	151
GRÁFICO DEL CUADRO N° 09	152
NÚMERO DEL CUADRO: 10	155
MOTIVACIÓN ACERCA DEL RAZONAMIENTO PROBATORIO	155
GRÁFICO DEL CUADRO N° 10	156
NÚMERO DEL CUADRO: 11	158
ANALIZA EL VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO	158
GRÁFICO DEL CUADRO N° 11	159
NÚMERO DEL CUADRO 12	161
ANALIZA EL VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIAL	161
GRÁFICO DEL CUADRO N° 12	162
NÚMERO DEL CUADRO 13	165
ANALIZA LA PRUEBA TESTIMONIAL COMO LA CREDIBILIDAD DEL TESTIGO ...	165



GRÁFICO DEL CUADRO N° 13	166
NÚMERO DEL CUADRO 14	169
ANALIZA EL MECANISMO PARA EVALUAR LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO ...	169
GRÁFICO DEL CUADRO N° 14	170
NÚMERO DEL CUADRO 15	173
GRÁFICO DEL CUADRO N° 15	174
NÚMERO DEL CUADRO 16	177
ESTABLECE LA VINCULACIÓN DEL PERITO CON EL CASO.....	177
GRÁFICO DEL CUADRO N° 16	178
NÚMERO DEL CUADRO 17	180
ESTABLECE LA CONFIABILIDAD DE LA CIENCIA Y DE LA EVALUACIÓN	180
GRÁFICO DEL CUADRO N° 17	181
NÚMERO DEL CUADRO 18	185
ANALIZA LA CORROBORACIÓN O RATIFICACIÓN DE LA OPINIÓN PARICIAL POR OTROS EXPERTOS QUE DECLARAN TAMBIÉN EN EL MISMO PROCESO ..	185
GRÁFICO DEL CUADRO N° 18	186
NÚMERO DEL CUADRO 19	188
MÉTODO DE VALORACIÓN SOBRE LOS HECHOS	188
GRÁFICO DEL CUADRO N° 19	189
NÚMERO DE CUADRO: 20	192
MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA	192
GRÁFICO DEL CUADRO N° 20	193



CONCLUSIONES.....	196
RECOMENDACIONES	199
BIBLIOGRAFÍA.....	201
ANEXOS.....	208
Anexo 1: matriz de consistencia.....	209
Anexo 2: ficha de observaciones.....	210
Anexo 3: Designación de asesor de tesis	218
Anexo 4: Recabar Información.....	221



RESUMEN

La presente investigación tuvo como: objetivo general, verificar que la carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de la valoración de la prueba como causas que afectan el derecho al debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno 2013 – 2014. Como objetivos específicos: a) Determinar que la carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso, b) Establecer la carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el derecho al debido proceso, c) Demostrar la inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso. Se ha planteado como: hipótesis general: la carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de la valoración de la prueba son causas que afectan el derecho al debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno 2013 – 2014; como hipótesis específicos: a) La carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso, b) La carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el derecho al debido proceso, c) La inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso. Se ha utilizado como diseño de la investigación, es de tipo causal o explicativo por consiguiente, se utilizó el siguiente diseño de investigación. Como tipo de investigación; es cuantitativo, debido a que se ha trabajado con técnicas matemáticas y diseños estadísticos; y, el conocimiento obtenido es objetivo, es más se ha utilizado la vía hipotético-deductiva y como metodología que es válido para todas las ciencias. Como teorías que sustentan la investigación se ha desarrollado: la motivación, la prueba, la valoración, el debido proceso.

Se ha llegado a la siguiente conclusión general: los magistrados al emitir la sentencia condenatoria, no valoran los hechos, las pruebas, no hacen referencia al método de valoración utilizado para meritar los hechos y la prueba.

Palabra clave: Motivación de los hechos, motivación de las pruebas y método de valoración.



ABSTRAC

This research aims: Aim, verify that the lack of motivation on the assessment of the evidence, the facts and failure to apply the methods of evaluating evidence as causes affecting the right to due process in convictions in criminal matters in the north of the Superior Court of Justice Puno 2013 - 2014. Specific objectives: a) Determine that the lack of motivation in the evaluation of evidence is a cause that affects the right to due process b) Establish the lack of motivation of the facts, is another factor that affects the right to due process, c) demonstrate the inapplicability of the methods of assessment of the evidence, it is because it affects the right to due process. As a hypothesis has been raised: general hypothesis, lack of motivation on the assessment of the evidence, the facts and failure to apply the methods of evaluation of evidence are causes that affect the right to due process in convictions in criminal matters in the northern part of the Superior Court of Justice Puno 2013 - 2014; as specific assumptions: a) The lack of motivation in the evaluation of evidence is a cause that affects the right to due process, b) Lack of motivation of the facts, is another factor that affects the right to due process c) Deviations from the valuation methods of proof, is because it affects the right to due process. It has been used as research design, it's kind of causal or explanatory therefore the following research design was used. As such research; it is quantitative, because it has worked with mathematical techniques and statistical designs; and the knowledge gained is objective, is most widely used as hypothetical-deductive methodology is valid for all sciences track. As theories underpinning research has developed: motivation, testing, assessment, due process.

It has come to the following general conclusion: the judges when issuing the sentence, do not appreciate the facts, evidence, no reference to the method of valuation used for weighing the facts and evidence.

Keyword: Motivation of the facts, evidence and motivation valuation method.

INTRODUCCIÓN

Pongo en consideración el siguiente trabajo de investigación científica titulado "Motivación de la prueba, hechos e inaplicación de los métodos de valoración, afectan el debido proceso en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Puno, 2013 - 2014", para el cumplimiento de dicha investigación se ha tenido en cuenta los pasos esenciales que menciona la investigación científica.

El objetivo del estudio es para optar el grado de doctor en derecho. El método empleado corresponde al paradigma cuantitativo, tipo causal explicativa, porque se ha investigado los fenómenos de los problemas, la carencia de motivación en la valoración de la prueba, carencia de motivación en los hechos e inaplicación de los métodos de valoración de las pruebas y su influencia en la afectación del derecho al debido proceso.

Las conclusiones relevantes son:

- a) En las sentencias los magistrados enuncian los hechos y circunstancias objeto de la acusación; de igual manera las sentencias contienen la enunciación de las hipótesis alternativas a la hipótesis acusatoria, en lo fáctico se hace mención en el 87.30%, en lo jurídico por el contrario no se hace mención en el 93.65%.
- b) La motivación del juicio histórico es clara, se ha expresado en un lenguaje comprensible para cualquier ciudadano, en este caso representa el 90.48%. La motivación fáctica de la sentencia tiene consistencia lógica, esto es libre de contradicciones o de vacíos o saltos lógicos, con un 74.6%.

- c) La motivación sobre los hechos es completa; esto es, existe un pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probado, en el 58.70%; la motivación sobre los hechos no ha sido completa en el 41.27%.
- d) Para dictar sentencia condenatoria los magistrados han recurrido como fuente de prueba: en el 79.37% en la declaración del imputado, en el 77.78% en la declaración del agraviado, en el 69.84% en los peritos, en el 63.49% en las declaraciones testimoniales, en el 33.33% en la prueba documental. Ha considerado todas las pruebas practicadas en el 33.33%, no ha considerado todas las pruebas practicadas en el 66.67%.
- e) La argumentación en la sentencia sobre las pruebas legítimamente incorporadas en el juicio se hace mención en el 77.78%, no se ha hecho referencia en el 22.22%. En relación al examen individual de las pruebas como la fiabilidad probatoria, interpretación, verosimilitud y comparación con lo alegado, en su gran porcentaje no se ha argumentado. La motivación acerca del razonamiento probatorio, no se ha efectuado en el 74.60%, sólo se ha cumplido en el 25.40%.
- f) En las sentencias condenatorias no se analiza el valor de la declaración del acusado como: honestidad, objetividad, capacidad de memoria, corroboración con otras pruebas, las cuales supera el 92.06%.
- g) No se ha argumentado el valor probatorio del testimonio como: el conocimiento personal de los hechos, la comprensión de los hechos que relata, en el 87.30%, solamente se ha motivado en el 12.70%. En relación al análisis de la credibilidad del testigo como la honestidad, objetividad, capacidad sensorial y de memoria no se ha argumentado en 95.24%. La

argumentación para evaluar la declaración del testigo como: examen directo, bolígrafo, contrainterrogatorio y examen psicológico, superior a 95.24% no se argumentado.

- h) En relación al análisis del valor probatorio de la pericia como: educación, historial del empleo, actividad profesional, licencias, membresías, publicaciones, honores y cualificaciones previas no se argumentan en superior al 82.54%. Tampoco se justifica sobre la vinculación del perito con el caso; como perito de oficio no se hace mención en el 76.19%, en el peritaje de parte en el 88.89%. En la sentencia no establece la confiabilidad de la ciencia y la evaluación del peritaje en el 100%. En relación al análisis de la opinión pericial de otros expertos, no se ha argumentado en el 96.08%.
- i) En relación a la motivación sobre los hechos, no explica los criterios adoptados en la valoración de los hechos como: método científico en el 96.83%, del sentido común en el 96.83%, la lógica en el 92.06% y la establecida por la doctrina jurisprudencial en el 85.71%
- j) En relación a la argumentación en la valoración de la prueba, no explica los criterios adoptados en la valoración de la prueba como: método científico en el 93.65%, del sentido común en el 92.06%, la lógica en el 93.54% y la establecida por la doctrina jurisprudencial en el 82.54%.

Durante la tarea investigativa se encontró gravitantes limitaciones, como es característico en toda investigación y estas fueron: a) La huelga atacada por los trabajadores del Poder Judicial ha limitado a que revisemos las sentencias objeto de investigación, b) económicas, la bibliografía que se adquirió fue muy



costosa, a los exiguos ingresos económicos no he podido adquirir en su totalidad las obras clásicas.

Técnicas e instrumentos en la investigación científica. En la presente investigación se ha utilizado la técnica de la observación y como instrumentos la ficha de observación.

Para un estudio sistematizado del problema de investigación se ha estructurado de la siguiente manera:

Capítulos I. Planteamiento del problema de investigación, definición del problema, formulación de los problemas, objetivos.

Capítulo II. Marco teórico, la misma está dividido en tres aspectos como: marco referencial, marco teórico y marco conceptual.

Capítulo III. Metodología de la investigación, en la que contiene, diseño de investigación, tipo de investigación, método de investigación, población y muestra, definición de unidad de análisis, muestra, técnicas de instrumentos.

Capítulo IV. Presentación de resultado, conclusiones y recomendaciones.



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. EL PROBLEMA

1.1. Análisis de la situación problemática

La Constitución Política del Estado Peruano en el artículo 139 Inciso 5 establece en forma expresa: "La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan"; ello significa, cuando los señores magistrados expiden sentencias, autos deben motivar sus decisiones; en estricto respeto al debido proceso, la motivación debe ser completa.

Cuando un magistrado expide sentencia condenatoria, afecta la libertad de una persona, la misma está protegida a nivel supra e infra Constitucional; por consiguiente la motivación debe ser completa, es más exigida la labor de la argumentación del magistrado.

En la práctica judicial de los magistrados, que expiden sentencias condenatorias en materia penal, se puede observar que se limitan en enumerar las pruebas que se han actuado en el proceso, no motivan la valoración de la prueba; es decir, no someten al análisis crítico, lógico, etc., del medio probatorio. De igual manera el otro componente en la expedición de la sentencia son los hechos; en efecto, la parte agraviada, el representante del Ministerio Público postula hechos, los mismos no deben ser transcritas o tomados por cierto por parte del magistrado, los hechos tienen que ser sometido a una valoración, motivación. Ahora, el Código Procesal Penal en el artículo 158 literal 1 precisa: "En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados", la norma adjetiva en materia procesal penal establece, el Juez que métodos debe aplicar para valorar la prueba; pero si revisamos las sentencias condenatorias, el señor magistrado no indica que método de valoración ha utilizado.

El señor juez al no motivar la valoración de la prueba, los hechos, al inaplicar los métodos de valoración de la prueba, afecta el derecho constitucional del debido proceso.

¿Los señores magistrados en la práctica están cumpliendo con su deber constitucional, legal, moral e incluso de prestigio de fundamentar en las sentencias las pruebas, los hechos, el método utilizado?; revisado las sentencias lamentablemente ello no es así, lo que se estila es se enumera todas las pruebas actuadas en el

proceso, en una forma aparente de análisis, es una especie de resumen de las pruebas. Sobre el tema sostiene: "...No se le puede dar el carácter de fundamentación (incluso faltaría esta) a la enumeración, tipo parte expositiva, del resumen de la actividad probatoria, ya que ello obviamente no es ponderación o valoración. La práctica nos demuestra que los jueces se limitan en sus fallos a expresar, escuetamente, que han apreciado la prueba en conciencia, lo que es inaceptable..." (GONZÁLEZ CASTILLO, 2006), por su parte Manuel Atienza sostiene: "Una de las insuficiencias más notables de las teorías de la argumentación jurídica que se han elaborado en las últimas décadas, es la escasa o nula atención que prestan a la argumentación en materia de hechos. Esta carencia es particularmente grave en la que atañe al Derecho Penal...", citado por (TALAVERA ELGUERA, 2009)

1.2. Definición problema

1.2.1. Problema general

¿Será que la carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de valoración de la prueba son causas que afectan el debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno 2013 - 2014?

1.2.2. Problemas específicos

- a) ¿Será que la carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso?
- b) ¿Será que la carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el derecho al debido proceso?
- c) ¿Será que la inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso?

1.3. Delimitación del problema de investigación

1.3.1. Delimitación espacial

El presente trabajo de investigación se ha ejecutado, en las sentencias expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román; dicha Sala en un principio ha tenido competencia de las provincias de: Moho, Huancané, San Antonio de Putina, Sandia, Azángaro, Carabaya, Melgar, Lampa, San Román. Ahora tiene competencia sólo de las siguientes provincias: San Román, Lampa, Melgar y Carabaya.

1.3.2. Delimitación temporal

Ha sido materia de análisis las sentencias expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, de los años 2013 y 2014.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Verificar que la carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de la valoración de la prueba como causas que afectan el derecho al debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno 2013 – 2014.

2.2. Objetivos específicos

- a) Determinar que la carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso.
- b) Establecer la carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el derecho al debido proceso.
- c) Demostrar la inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso.

2.3. Justificación de la investigación

a) Conveniencia

La presente investigación es importante, porque permitirá explicar, que la carencia de motivación en la valoración de la prueba, de los hechos y la inaplicación de los métodos de valoración de la prueba afecta el derecho a la presunción de inocencia.

b) Relevancia social

Con los resultados del presente estudio, la sociedad en su conjunto, fundamentalmente los procesados se beneficiarán, en el sentido de que las sentencias condenatorias deben motivar

para valorar la prueba, los hechos, de igual forma deben aplicar los métodos de valoración de la prueba.

c) Valor teórico

Se identificará las dificultades, limitaciones, deficiencias que presenta la legislación procesal, en materia de valoración de la prueba, de los hechos y la inaplicación de los métodos de valoración de la prueba. Una vez identificado los mismos se propondrá la modificatoria de las normas adjetivas.

d) Beneficiarios directos

El beneficiario directo con el presente trabajo de investigación serán los procesados, a fin de que el magistrado expida sentencia condenatoria basada en la motivación de la valoración de las pruebas, los hechos y la aplicación correcta de los métodos de valoración de la prueba.

3. HIPÓTESIS

3.1. Hipótesis general

La carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de la valoración de la prueba son causas que afectan el derecho al debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno 2013 – 2014.

3.2. Hipótesis específicos

- a) La carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso.
- b) La carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el derecho al debido proceso.
- c) La inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso.



5. VARIABLES E INDICADORES

	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADOR	CATEGORIA
INDEPENDIENTE	1. Carencia de motivación en la valoración de la prueba	La motivación de la resolución judicial	Clases de motivación en la valoración de la prueba	a) Falta de motivación b) Aparente motivación c) Insuficiente motivación d) Defectuosa motivación e) Motivación completa
	2. Carencia de motivación de los hechos	La valoración de los hechos	Las reglas para la motivación de los hechos	a) Se enuncia los hechos y las circunstancias b) Hipótesis alternativo a la acusatoria c) Hecho elegido por el Juez en base a prueba d) Criterio adoptado en la valoración de prueba e) Razonamiento probatorio f) Juicio histórico es claro g) La motivación fáctica es lógica h) Considera todas las pruebas practicadas
	3. Inaplicación de los métodos de valoración de la prueba	Métodos de valoración de la prueba	Clases de métodos de valoración de la prueba	a) Ciencia b) Lógica c) Máximas de experiencia
DEPENDIENTE	4. La afectación del derecho al debido proceso	Efectos	A nivel procesal	a) El debido proceso
			A nivel extra procesal	a) El debido proceso

6. LIMITACIONES

a. En cuanto al tamaño de la muestra

La Corte Superior de Justicia de Puno, tiene varias salas penales como: Sala penal de apelaciones y de liquidación de Puno, la sala penal de apelaciones de la Provincia de San Román, la sala penal de liquidaciones de la provincia de San Román, y la sala penal de penal de apelaciones y de liquidación de la provincia de Huancané. La investigación se ha ejecutado en las sentencias condenatorias en materia penal, expedido en la sala penal de apelaciones de la Provincia de San Román, con carácter censal.

b. En cuanto a la recolección de datos

En el proceso de recolección de datos hemos tenido dificultades, en el mes de noviembre y parte del mes de diciembre los trabajadores del Poder Judicial han acatado la huelga nacional indefinida; como consecuencia, de ello las instalaciones del Poder Judicial estaban cerradas.





CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DISEÑADA

Hechas las indagaciones, se ha encontrado una tesis doctoral de Iván Díaz García, quien llega en su trabajo de investigación a las siguientes conclusiones:

1. Las propuestas de este trabajo se han edificado a partir de dos supuestos fundamentales.

El primer supuesto es que el Derecho penal material debe ser aplicado de la mejor manera posible. Esta mejor aplicación posible del Derecho penal material debe entenderse a partir de un cierto tipo de relación entre el imputado y el hecho investigado. En este sentido, se estableció la siguiente dicotomía:



a) Si se trata de una persona que no es penalmente responsable del hecho punible, la mejor aplicación posible del Derecho penal significa tres cosas, cada una subsidiaria de la anterior. Ante todo consiste en que el proceso penal debe evitar la persecución criminal en contra de esa persona. En caso de haberse iniciado, implica que dicha persecución debe cesar en la más temprana gestión del procedimiento que sea posible. Si lo anterior no ha ocurrido, se traduce en asegurar su absolución en la respectiva sentencia.

b) Si, por el contrario, se trata de una persona penalmente responsable del hecho punible, la mejor aplicación posible del Derecho penal material significa que el proceso penal debe permitir su condena en el grado estrictamente debido.

El segundo supuesto es que la aplicación del Derecho penal material depende del proceso penal y se mueve en el terreno de la posibilidad y no en el de la certeza. Ello se debe a que, en lo relativo al juicio de hecho, la participación del imputado en el hecho punible constituye una hipótesis sobre cuya comprobación nunca existirá certidumbre. Y también se debe a que, en el plano del juicio de Derecho, las valoraciones inherentes al mismo siempre podrán conducir a resultados divergentes.

e) Sin embargo, tales constataciones no impiden considerar que ciertas decisiones judiciales se encuentran mejor justificadas que otras desde el punto de vista del sistema jurídico vigente. Por lo mismo, no se puede renunciar a alcanzar una decisión más correcta, generando condiciones que permitan contar con la mejor justificación posible. Lo contrario implicaría sostener, expresa o tácitamente, que la condena de un inocente



o la absolución de un culpable carecen de toda relevancia moral, jurídica e institucional.

2. Desde tales supuestos, el trabajo comparte la posición del profesor De Asís en orden a admitir la existencia de ciertos criterios cuyo respeto incrementa las posibilidades de alcanzar una mejor aplicación del Derecho penal material. Eso no significa que la concurrencia de tales criterios asegura una decisión judicial correcta. Sin embargo, sí resulta posible sostener que omitir su consideración seguramente conduce a una decisión judicial incorrecta.

Ahora bien, son muchos los criterios que pueden concurrir para incrementar las posibilidades de una más correcta aplicación del Derecho penal material. Este trabajo se ha centrado en dos de esos criterios, los que operan como recomendaciones para el juzgador en la toma de decisiones en el ámbito procesal penal: uno referido al juicio de hecho y el otro relativo al juicio de Derecho. El desarrollo y justificación de tales criterios ha constituido el objetivo central del presente trabajo.

3. El juicio de hecho consiste en determinar si la persona ha incurrido en el hecho investigado. Pues bien, el criterio dirigido al juicio de hecho postula que el juez penal debe admitir ampliamente la realización de diligencias de investigación tendientes a la obtención de prueba, que importen una interferencia en aquellos derechos fundamentales cuya indemnidad perjudica la calidad epistemológica del proceso penal. Inversamente, el criterio sugiere que el juez debe rechazar la realización de diligencias de investigación tendientes a la obtención de prueba, que importen una



interferencia en derechos fundamentales cuya indemnidad favorece la calidad epistemológica del proceso penal.

Según se mostró, se trata de un criterio que quiebra la asentada concepción de la doctrina, que establece una relación inversamente proporcional entre respeto de los derechos fundamentales y la calidad del juicio de hecho. Contrariando esta perspectiva, se ha sostenido y demostrado que resulta perfectamente posible establecer una distinción entre dos categorías de derechos fundamentales. La afectación de algunos incrementa la calidad del juicio de hecho (como ocurre con la inviolabilidad del domicilio), mientras la afectación de otros perjudica dicha calidad (como ocurre con la inmediación y la contradicción). En otros casos la afectación del derecho fundamental podrá incrementar o disminuir la calidad del juicio de hecho dependiendo de las circunstancias del caso (como ocurre con el derecho a no declarar contra sí mismo).

Desde la perspectiva de este criterio, los derechos fundamentales deben ser analizados separadamente. No obstante, la toma de posición frente a cada uno de ellos descansa sobre un único y mismo punto de partida: resulta posible afirmar que la persona ha incurrido en el hecho investigado si esto efectivamente ha acaecido y se cuenta con información probatoria (verificadores de verdad) que permiten sostenerlo. Consecuencia de ello es, precisamente, que el juzgador penal debe autorizar toda aquella diligencia de investigación que permite generar prueba de calidad. Y, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la prueba de calidad es aquella que proviene de la

indemnidad o de la afectación de los mismos, dependiendo de su relación con la calidad epistemológica del proceso penal.

Por último, conviene recordar que el criterio dirigido al juicio de hecho no opera a lo largo de todo el proceso de fijación de los hechos. Según se expresó, para llegar a este estadio es necesario pasar de los hechos brutos a los hechos alegados, de éstos a los hechos probados y luego estos últimos se transforman en hechos fijados. En este entendido, la distinción entre las dos categorías de derechos fundamentales aquí referidas es significativa para pasar de los hechos alegados a los hechos probados. Los demás tránsitos pueden estar sometidos a otro tipo de criterios, en todo caso ajenos a las pretensiones y posibilidades del presente trabajo.

4. El juicio de Derecho consiste en determinar si el hecho fijado es jurídico penalmente reprochable. Pues bien, el criterio relativo al juicio de Derecho propone que el juzgador penal se someta al precedente al momento de interpretar los enunciados normativos de Derecho penal material eventualmente aplicables a los hechos fijados, siempre que los hechos fijados del precedente sean iguales a los del caso actualmente sometido a su decisión. A falta de precedente, se postula que el juzgador penal debe formular un precedente hipotético al que esté dispuesto a someterse a futuro en todos los casos cuyos hechos fijados sean iguales a los hechos fijados en el caso actualmente sometido a su decisión, y aplicarlo en este último.

A diferencia de lo que ocurre con el criterio ofrecido para el juicio de hecho, la sumisión al precedente aparece con fuerte respaldo en la doctrina. El problema, por tanto, no consiste en contar con el apoyo de



autores tan destacados como De Asís, Peces-Barba o Alexy, que comparten este criterio, sino en entregar nuevos argumentos a jueces y magistrados para que resulten persuadidos de que se trata de un mandato constitucionalmente justificado. En efecto, el derecho fundamental a la igualdad, el constitucional principio de seguridad jurídica, la exigencia de racionalidad establecida por el propio Tribunal Constitucional y una serie de fundamentos prácticos argumentan a favor de dicha sumisión. Por tanto, mientras las razones sobran, las voluntades jurisdiccionales faltan.

Ahora bien, el hecho es jurídico penalmente reprochable si el hecho fijado en que ha intervenido es denotado por una norma de derecho penal material (aplicabilidad interna) y ello ha sido así determinado por el órgano competente y en un proceso judicial tramitado conforme a Derecho (aplicabilidad externa). En lo que se refiere al criterio ofrecido para el juicio de Derecho, sólo la aplicabilidad interna resulta relevante. En este sentido, se afirma que una norma de Derecho penal material es internamente aplicable al hecho fijado si éste es igual al hecho fijado en el precedente en el cual se declaró aplicable la norma. Y lo mismo puede decirse si el juzgador está dispuesto a aplicar la misma norma en un caso futuro cuyo hecho fijado coincida con el que se encuentra actualmente sometido a su decisión. En los casos contrarios la norma no es internamente aplicable. No parece estar demás reiterar por última vez que este no es el único ni el más importante de los criterios, pero seguramente sí uno de los más controvertidos en el discurso judicial.

Por último, se ha mostrado la debilidad de la mayor parte de las objeciones erigidas en contra del mandato de sumisión al precedente. Sólo

a una de ellas parece posible reconocerle un contenido argumental fuerte. Se trata de aquel que sostiene que la sumisión al precedente no hace más que reconducir el problema de la valoración desde el juicio de Derecho a la igualdad de hechos fijados. Frente a ello sólo resulta posible responder que, aunque el precedente no suprime las valoraciones, la especificación de los significados de los enunciados normativos de Derecho penal material eventualmente aplicables al menos las atenúa.

5. Como la mejor aplicación posible del Derecho penal material puede conducir a una equivocada percepción respecto de las intenciones de este trabajo, conviene concluir destacando las pretensiones y consecuencias que no se le pueden adscribir.

Ofrecer al juzgador algunos criterios de decisión en el ámbito procesal penal para permitirle la mejor aplicación posible del Derecho penal material no se relaciona con el Derecho penal material ni con el Derecho penal de ejecución. En consecuencia, tales criterios no pretenden ni producen un incremento en la cantidad de tipos penales, en las penas establecidas para los delitos, ni en la imposición de las penas privativas de libertad. Del mismo modo, no persiguen ni necesariamente generan un incremento en las tasas de encarcelamiento o una disminución de los beneficios penitenciarios.

En fin, los criterios tantas veces mencionados se relacionan con el Derecho procesal penal. En este horizonte no tienen más ni menos pretensión que colaborar a la absolución del inocente, o a evitar o detener su persecución penal en la más temprana etapa procesal posible, y permitir

la condena del culpable en el grado estrictamente debido. (DÍAZ GARCÍA, 2009)

2. BASES TEÓRICAS O DOCTRINARIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN

1. LA MOTIVACIÓN

1.1. Antecedentes históricos

“Los gobiernos monárquicos, absolutistas, se caracterizaban por ser autoritarios; por tanto, los Jueces no tenían obligación de fundamentar sus decisiones. Esto resulta lógico y natural para aquella época porque los Jueces era únicamente delegados del Rey, y éste último no tenía que dar cuenta a nadie de sus actos.

(...). En 1771 en Francia el autor Jus sostenía: “Que no es necesario que los jueces expresen los motivos de sus sentencias, pero si lo quieren hacer, dependen de ellos, no obstante es mejor no manifestarlo para no dar lugar a reclamaciones por parte de quien ha perdido”.

Asimismo, una sentencia de Primera Instancia, decía: “Fallamos que la parte demandante probó su petición y demanda, démoslo por bien probada y que los Fiscales del Rey Nuestro Señor y Consejo de Hombre Buenos de dicha Villa no probaron sus excepciones ni defensiones, y las damos por no probadas, pronunciamos y declaramos: estimada la demanda”. Y la

sentencia de segunda instancia decía: "Fallamos que el Juez y los Alcaldes expidieron la sentencia definitiva, pronunciaron bien y por ende debemos confirmar y confirmarnos el juicio".

Excepcionalmente los Jueces podían motivar sus sentencias, pero tampoco eran de fiar porque utilizaban fórmulas como: "*Consideratis Considerandis*": que significa, considerando todo lo que hay que considerar, o "*Inspectis ómnibus que nos moveré poterant et debebant*": que significa, examinando todas las cosas que podía convencernos. Realmente, ello no garantizaba una motivación de las decisiones judiciales" (BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro y PALANCO GUTIÉRREZ, Carlos, 2005, pág. 328).

Hasta fines del siglo XVIII los Jueces no tenían la obligación de motivar, porque no buscaban, no tenían que hacer, no estaban obligados a expedir sentencias con motivación, sino solamente sentencias justas. Entonces ¿Cómo se dictaban las sentencias justas?. Pues por boca o por pluma de Jueces justos; y por eso se nombraban como jueces a hombres justos, probos de buenas costumbres, amantes de la justicia y se suponía que un Juez justo, probo, neutral y amante de la justicia, dictaría sentencias justas.

Con la Revolución Francesa, surgen nuevas corrientes, se empieza a sostener que las sentencias deben ser motivadas. Y hay que conectar esta exigencia de motivación con la exigencia

de legalidad. Se empieza a pensar que el Juez no sólo tiene la obligación de dictar una sentencia justa sino que tiene que dictar una sentencia ajustada a la ley.

Los juristas Españoles Luís Díez – Pícaso y Ponce de León han sostenido: “La verdadera justificación de la motivación es que el Juez tiene que razonar que la sentencia que dicta es congruente con el derecho, no es tanto probar la infracción o no infracción de una norma, sino que eso encaja dentro de nuestro ordenamiento”.

Actualmente en todas las constituciones políticas de todo el mundo se exige, que el magistrado debe motivar, explicar la razón que ha tenido para dictar la sentencia.

1.2. Concepto de Motivación

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, motivar tiene también como significado dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa. Tratándose de resoluciones judiciales, motivarlas importará explicar la o las razones que se han tenido en consideración para resolver el conflicto de intereses en uno u otro sentido. La argumentación jurídica, que constituye el contenido de la motivación de una resolución judicial, explicará y justificará la decisión jurisdiccional que adopte el Juez.

Roger E. Zavaleta Rodríguez sostiene: "La motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto de razonamiento de hecho y de derecho realizados por el juzgador, con los cuales apoya su decisión. Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión" (CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger, 2006, pág. 369).

"La motivación es un acto intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico que está configurado por el conjunto de razonamientos fácticos y jurídicos que sustentan las resoluciones.

El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la razón suficiente como fundamento racional del deber de motivar las resoluciones judiciales, dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación observancia de dicho principio en el acto intelectual evolutivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor sino también una garantía procesal del debido proceso" (BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro y PALANCO GUTIÉRREZ, Carlos, 2005, pág. 329).

Víctor Ticona Postigo sostiene sobre el particular: "es un acto intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico que está configurado por el conjunto de razonamientos fácticos y jurídicos

que sustenta la parte resolutive de aquella" (TICONA POSTIGO, 1998, pág. 111).

Jorge Carrión Lugo conceptúa: "Es comprensible que la motivación constituye una garantía de la administración de justicia, pues, si no se exigiera, el destinatario de la resolución no tendría cómo enterarse de las razones que haya tenido el juzgador para adoptar la decisión correspondiente. La motivación esencialmente debe contener argumentos relacionados con la determinación de los hechos acreditados en el proceso, previo análisis de los medios probatorios utilizados, así como con la fijación de la o de las normas jurídicas (no sólo las normas legales) aplicables al caso" (CARRIÓN LUGO, 2004, pág. 194).

Respecto a la motivación de las sentencias, Picó i Junio afirma que: "(...) esta obligación de fundamentar las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido o en otro, sino que el deber de motivación que la Constitución y la Ley exigen, imponen que la decisión judicial este precedida de la argumentación que la fundamente. No se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen suficientes quienes ejercen la potestad jurisdiccional: Se trata que

la tutela judicial efectiva se anude con los extremos sometidos por las partes a debate. (...)", citado por (AMORETTI PACHAS, 2007, pág. 85).

"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios pronunciamientos, ha señalado que la motivación de las resoluciones judiciales en general y de las sentencias en particular forma parte de la noción del debido proceso. Asimismo el Art. 6.1 de la Corte Europea de Derechos Humanos señala la obligación por parte de los Tribunales de expresar adecuadamente en sus sentencias aquellas **razones** en las que se basan, y ello comprende tanto la **motivación jurídica como la motivación fáctica**" (CERDAN SAN MARTÍN, Rodrigo y FELICES MENDOZA, María Esther, 2011, pág. 298)

1.3. Obligación de motivar

"Esta mencionada evolución ha venido de la mano de los diversos cambios que han ido sufriendo a lo largo del tiempo las funciones encomendadas a la justificación de la decisión judicial. Hasta el punto que el alcance de la obligación de motivación ha ido variando en relación directa a los cambios experimentados por las funciones encargadas a la motivación en cada uno de los periodos históricos. Por todo ello resulta útil estudiar la evolución histórica de la obligación de motivación de las decisiones judiciales como manifestación de los cambios producidos a lo largo de la historia en las finalidades asignadas a la actividad de

motivación o justificación. En este sentido, el punto de partida de este pequeño recorrido histórico lo constituye el hecho de que hasta la segunda mitad del siglo XVIII no se estableciese un principio general de obligatoriedad de la motivación de las decisiones judiciales. Lo que claramente demuestra que la justificación de las decisiones judiciales es una manifestación de una concepción democrática de la jurisdicción vinculada a un pasado muy reciente y ajeno por tanto a la praxis judicial de una gran parte de la historia de la humanidad" (COLOMER HERNÁNDEZ, 2003, págs. 60-61).

"Los fundamentos de hecho y derecho obtenidos mediante el criterio de conciencia que, a su vez, son generadores de la certeza del juzgador sobre la veracidad o el error o falsedad de la acusación, tanto respecto al hecho como respecto a la culpabilidad imputada al acusado, deben ser explícitamente sustentados mediante argumentación coherente.

Si esos fundamentos resultaren eventualmente significaciones probatorias equilibradamente antagónicas en pro o en contra de la tesis acusatoria determinan la aplicación de in dubio pro reo.

Esos fundamentos deben ser exteriorizados y debidamente documentados para conocer si son del propio juzgador, si son coherentes, si son consistentes fácticas y, jurídicamente, si son el resultado de un razonamiento correcto o si adolecen de falacia, si

reflejan un conocimiento profundo y exhaustivo del caso" (MIXÁN MÁSS, Juicio Oral, 1993, págs. 316-317).

1.4. Naturaleza de la obligación

1.4.1. La motivación como exigencia política

Osvaldo Alfredo Gozaíni sostiene: "Se ha dicho que la motivación o fundamentación razonada de los pronunciamientos judiciales tiene un significado para la democracia institucional, en el sentido de legitimar la intervención judicial en un régimen constitucional.

Con esa finalidad, las razones del fallo justifican el poder y la autoridad jurisdiccional. Es una proyección del deber de rendir cuentas sobre los actos que se realizan en nombre del pueblo. Por eso se tiene al deber de fundamentación como una exigencia política" (GOZAÍNE OSVALDO, s/f, pág. 429).

1.4.2. La motivación como garantía constitucional.

La Constitución Política del Estado Peruano en su artículo 139 Inciso 5 señala: "La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 12 establece: "Todas las resoluciones, con



exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan, pudiendo estas reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado". El Código Procesal Civil señala: "Como una exigencia necesaria de las resoluciones judiciales que éstas contengan la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de la actuado y al derecho", artículo 122 Inciso 3 de la norma adjetiva precitada.

"El paso siguiente fue volcar en la Constitución el deber de señalar los motivos de persuasión adquiridos e indicados en la sentencia. Antes la idea se asumía como una derivación de preceptos y garantías, como el derecho a la defensa del debido proceso.

Se consideró que instalando en la Norma Fundamental esta obligación de fundamentarse adecuaba la finalidad de control sobre el razonamiento legal, mejoraba el convencimiento de las partes sobre los porqués de la justicia impartida, y limitaba el ejercicio abusivo de los recursos.

La Constitucionalización tiene dos etapas: la primera no encuentra indicación precisa en los textos porque se

deriva del derecho al debido proceso legal; inclusive, tampoco se halla mencionada en los textos internacionales de protección de los derechos humanos, quizás por las dificultades que podría tener en los sistemas que actúan con jurado. De todos modos si tiene recepción en las condiciones de decidir con fundamentos en el enjuiciamiento penal y la condena en que estos procesos se dicta.

La segunda consolida la obligación cuando comienzan a reformarse las cartas constitucionales que fueron adaptando sus principios, declaraciones y garantías, al compás de la evolución y consagración de los derechos humanos" (GOZAÍNE OSVALDO, s/f, pág. 430).

1.4.3. La motivación como presupuesto procesal de la sentencia

"Desde otra perspectiva el deber de motivación se instala como un presupuesto procesal para que la sentencia sea válida (...). En realidad, no es la nulidad propiamente dicha el efecto que tiene un pronunciamiento sin fundamentos, sino la determinación para obtener agravios directos por esa ausencia de razones y motivos que habilitan el recurso correspondiente, el cual, eventualmente, puede conducir a la nulidad.

Sucede que como presupuesto procesal también se vincula con el deber constitucional que se instala como garantía judicial, porque una sentencia infundamentada es un caso de arbitrariedad que traslada a la revocación de lo resuelto.

En uno u otro caso lo importante estriba en la consolidación del deber de argumentar y tomar partido entre una de ambas pretensiones. No significa más que resolver en el marco dialéctico del proceso donde si las partes están obligadas a presentar sus afirmaciones por escrito, es obvio y natural que la decisión respectiva sea expresada del mismo" (GOZAÍNE OSVALDO, s/f, págs. 432-433).

1.4.4. La motivación como parte esencial de las resoluciones judiciales

Marcial Rubio Correa señala: "sentencia no motivada es instrumento fácil de manipulación en manos tanto del juzgador como de terceros que puedan influir en él, directa o indirectamente. Además, cada sentencia sirve de precedente (vinculante o simplemente ilustrativo pero no poco importante) para la resolución de casos sucesivos. Este carácter de precedente es imposible de aplicarse si es que la sentencia no tiene fundamentos" (RUBIO CORREA, 1999, pág. 74).

1.4.5. La motivación como deber de la jurisdicción

“Durante nuestra vida como Nación independiente, el deber de motivar las sentencias fue recogido por primera vez, como manifestación de la publicidad de “los juicios” en la Constitución de 1828, dedicándole dos normas: una para los dos “juicios civiles” (art. 122) y otra para las “causas penales” (art. 123). Será recién a partir de la Constitución de 1834 que la formula se hará única y se repetirá, con ligeras variantes, en las sucesivas constituciones hasta la de 1933; “Las sentencias serán motivadas, expresándose en ellas la ley o los fundamentos en que se apoyen”.

Sin embargo, será recién con la Constitución de 1979 que, adoptando y adaptando la fórmula del Inciso d) del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 (Decreto Ley Nro. 14605), el deber de motivación devendrá explícitamente una autónoma “garantía de la administración de justicia”, (artículo 233 Inciso 4) a observarse por los jueces de todas las instancias y en relación a todas las resoluciones judiciales con la sola exclusión de las “de mero trámite”. Fórmula luego reproducida en el inciso bajo comentario.

Es interesante poner en relieve que en la Constitución vigente (al igual que en todas las anteriores) el Poder Judicial, frente a sus “pares” Legislativo y Ejecutivo, es el

único órgano al que se le exige motivar sus actos, casi como poniendo en evidencia que los jueces serán todo lo independientes que deben ser, pero estando sometidos a la Constitución y a la ley (art. 146.1 Const.), así debe reflejarse en sus resoluciones. Es así que se ha dicho que la motivación es el "banco donde el juez paga el precio de la independencia y libertad de decisión" (ARIANO DEHO, 2005, págs. 504-505).

1.4.6. La motivación como derecho exigible de las partes

"Se encuentra otra tendencia dominante, que pone a la motivación de las sentencias como un derecho que las partes pueden exigir por ser parte integrante del derecho al debido proceso.

Para ella, la solución justa de un litigio no es simplemente como lo afirma el positivismo jurídico el hecho de que sea conforme con la ley, es decir, legal. En efecto, no hay palabras que cubran la necesidad de justicia si no va implícita en los contenidos del pronunciamiento la cobertura de argumentos suficientes para convencer a las partes sobre la justicia del caso.

Una vez más aparece la dimensión social del proceso y la repercusión que tiene en la sociedad cualquier sentencia judicial, junto porque la medida de la legalidad no siempre

es la vara de la justicia, como también la discrecionalidad excesiva, y razonable o directamente incongruente, es una arbitrariedad que el mismo sistema repulsa" (GOZAÍNE OSVALDO, s/f, págs. 435-436).

1.5. Funciones de la motivación

"La motivación escrita (que es lo que exige la Constitución) de las resoluciones judiciales puede cumplir, dependiendo del ángulo en que se mire, hasta tres funciones.

- a) Desde el punto de vista del juez: una función *preventiva* de los errores, en cuanto debiendo aquel dar cuenta por escrito de las razones por las que ha llegado a su fallo, al momento de "redactar" su resolución podría bien darse cuenta de aquellos errores que podría haber cometido en su "operación intelectual" previa y "auto enmendarse";
- b) Desde el punto de vista de las partes: una función *endoprocesal* o de *garantía de defensa* en cuanto les permite conocer la *ratio decidendi* de la resolución y, como tal, detectar esos errores que se mantendrían ocultos si no se explicitarán por escrito, a los efectos de poder utilizar las impugnaciones enderezadas a reparar tales errores.
- c) Desde el punto de vista de la colectividad: Una función *extraprocesal* o *democrática* de garantía de publicidad (y como tal de exclusión o de detección de la arbitrariedad) en el

ejercicio del poder por parte del Juez" (ARIANO DEHO, 2005, págs. 507-508).

"Ningún juez está obligado a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí está constreñido a indicarle las razones de su sinrazón. Esta exigencia de fundamentar, de basar el fallo en apreciaciones fácticas y jurídicas, es una garantía para la prestación de justicia que deviene, en esencia, de dos principios: imparcialidad e impugnación privada. El principio bajo estudio se relaciona con el principio de imparcialidad, pues la fundamentación de una resolución es el único rastro que posibilita comprobar si el juzgador ha resuelto imparcialmente la contienda. La motivación de las resoluciones judiciales también permite a los justiciables conocer las causas por las que la pretensión que se esgrimió fue restringida o denegada y esto, en buena cuenta, hace viable que quien se sienta agraviado por la decisión del Juez pueda impugnarla, posibilitando el control por parte de los órganos judiciales superiores y el derecho de defensa" (CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZA VALETA RODRIGUEZ, Roger, 2006, pág. 371).

1.6. Los fines de la motivación.

"La jurisprudencia ha señalado como fines de la motivación a los siguientes:

- a) Que, el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión por el legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas;
- b) Que, se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada responde a una determinada interpretación y aplicación del derecho;
- c) Que, las partes tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; y,
- d) Que, los Tribunales de Revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho"¹.

1.7. Los requisitos de la motivación.

Ignacio Colomer Hernández sostiene: "Para determinar adecuadamente los requisitos que la motivación debe reunir no se debe olvidar que la decisión judicial es, ante todo, una decisión jurídica. Es, por tanto, una decisión fundada en Derecho, fruto del ejercicio de la libertad de elección que el ordenamiento concede al juez para encontrar una solución al conflicto que esté en concordancia con el derecho válido; de ahí que se pueda exigir que el juzgador justifique la racionalidad y la razonabilidad de su decisión. En el sobreentendido que dicha racionalidad ha de ser jurídica, lo que significa que la decisión y su correspondiente

¹ Casación Nro. 912-1999-Ucayali, publicado en el Diario Oficial el Peruano. Lima Perú. 12 de Noviembre de 1999, p. 3906 y Casación Nro. 990-2000. Lima Perú. Diario Oficial el Peruano. 30 de Octubre de 2000, p. 6380.



justificación deben ser concordes con el derecho válido y vigente” (COLOMER HERNÁNDEZ, 2003, pág. 158).

Roger E. Zavaleta Rodríguez sostiene: “... el proceso es un terreno de probabilidades; que por sus caracteres dialéctico y discursivo nunca supone una conclusión demostrativa, sino probable; que en él pueden presentarse diversas interpretaciones legales; que los hechos también son probables, porque se afirma en un contexto tiempo espacial distinto a donde ocurrieron y están sujetos a la valoración del juzgador, el que finalmente debe exponer las razones de su conclusión, en la medida que su fuerza depende de la fortaleza de las premisas. Pues bien, ahora nos toca estudiar los requisitos procesales que califican de “motivada” a una resolución judicial. El punto reviste capital importancia, ya que en la dilucidación de las controversias jurídicas los jueces siempre deben representar un razonamiento fundado en los hechos y en las normas legales o las fuentes del derecho pertinentes. La inferencia judicial debe brindar la posibilidad de ser verificada a través de sus fundamentos, los cuales nos indican el sendero lógico seguido por el juzgador para la solución del caso concreto” (CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger, 2006, págs. 448-449).

1.8. Clases de motivación

1.8.1. Falta de motivación

“Cuando la motivación de la resolución está totalmente ausente. Ejemplo: cuando el Ad Quem revoca una parte de la sentencia apelada y no fundamenta por qué lo realiza” (BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro y PALANCO GUTIÉRREZ, Carlos, 2005, pág. 367).

“El primer grupo apunta a aquellos casos en los cuales la motivación de la resolución está totalmente ausente” (MIXÁN MÁSS, Lógica para Operadores del Derecho, 1998, pág. 367).

Roger Zavaleta Rodríguez señala: “Este tipo de error revela una ausencia total de fundamentos, no obstante el deber que les viene impuesto a los jueces de motivar los autos y las sentencias” (CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger, 2006, pág. 44).

“Nosotros, sin embargo, hemos conservado este grupo genérico de sentencias con esa jerarquía, porque la realidad judicial nos muestra casos muy extraños, donde no hallamos motivación. Fuera de un deseo de motivar, la realidad exhibe una ausencia de motivación en la práctica” (GUIRARDI,

Lógica del Proceso Judicial (Diálogo del Derecho), 1992, pág. 115).

1.8.2. Defectuosa motivación

a) Motivación aparente

Según Zavaleta Rodríguez Roger E. "Son casos típicos de esta clase de vicio, las resoluciones que sólo se limitan a describir los hechos alegados por las partes, sin analizarlos ni vincularlos con prueba alguna; las que no valoran los medios probatorios esenciales para resolver la controversia, sino efectúan una vaga alusión a todas las pruebas aportadas al proceso, sin especificar el valor otorgado a los medios probatorios que han motivado su decisión; las que de manera aseverativa expresan que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en ningún medio probatorio; las que de manera genérica indican que se han cumplido todos los requisitos para encuadrar el caso *sub judice* dentro del supuesto de una norma jurídica, sin embargo, no contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que conlleven a esa conclusión, luego de un análisis de los medios probatorios; las que se apoyan en pruebas obtenidas en forma ilícita, entre otras" (CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZAVALA RODRIGUEZ, Roger, 2006, págs. 445-446).

Por su parte Florencio Mixán Máss señala: "pues se presentan como actos jurisdiccionales a prima facie fundados, pero que si no nos detenemos en lo que es la caparazón de los mismos, sino que procuramos adentrarnos en la racionalidad y razonabilidad de la fundamentación, descubriremos que en verdad no tiene fundamento" (MIXÁN MÁSS, Lógica para Operadores del Derecho, 1998, pág. 368).

"Resulta claro que, en una suerte de definición de la apariencia de motivación, el caso viene a decirnos que los motivos reposan en cosas que no ocurrieron o en pruebas que no se aportaron o bien como en otros casos en fórmulas vacías de contenido que no condicen con la realidad del proceso y, finalmente, que nada significan por su ambigüedad o vacuidad" (GUIRARDI, Lógica del Proceso Judicial (Diálogo del Derecho), 1992, pág. 118).

b) Motivación insuficiente

Zavaleta Rodríguez Roger señala: "El juez yerra de este modo cuando no respeta el principio lógico de razón suficiente, es decir, cuando de las pruebas en las que basa su conclusión sobre los hechos no sólo puede inferirse aquella, sino también otras conclusiones. La sentencia expedida en un proceso de indemnización por la mala praxis médica, ejemplo, no gozaría de suficiente

motivación si el juez declarara fundada la demanda, basándose en una pericia que no excluye otras causas de muerte, aparte de la imputada al galeno. Tampoco estaría suficientemente fundamentada la sentencia que relaciona los hechos con medios probatorios impertinentes o inconducentes para acreditar las afirmaciones de los justiciables" (CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZA VALETA RODRIGUEZ, Roger, 2006, pág. 447).

En este tema Florencio Mixán Máss escribe: "La doctrina ha señalado que en los casos que se viole el principio lógico de razón suficiente, se está ante los supuestos que se cataloga como de motivación insuficiente..." (MIXÁN MÁSS, Lógica para Operadores del Derecho, 1998, pág. 370).

Respecto a lo mismo, Bustamante y Polanco dicen: "Es la más corriente y se produce cuando se viola el principio lógico de la razón suficiente. Nada hay sin una razón suficiente. Ejemplo. Se expide una sentencia y no se invoca dispositivo legal alguno, sino únicamente se relatan hechos acreditados por las partes" (BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro y PALANCO GUTIÉRREZ, Carlos, 2005, pág. 330).



El tratadista Olsen Ghirardi señala: "El principio se enuncia diciendo que *nada hay sin una razón suficiente*. Nos da la razón del porqué de la existencia de los seres desde el punto de vista ontológico. Y, en ese sentido, no se diferencia mucho del principio de causalidad" (GUIRARDI, Lógica del Proceso Judicial (Diálogo del Derecho), 1992, pág. 120).

c) Motivación defectuosa en sentido estricto

"Se produce cuando el juez viola los principio lógicos o las reglas de la experiencia.

Un lector acucioso podrá percatarse que las violaciones judiciales al principio de razón suficiente, por su calificación lógica, deberían pertenecer a este tipo de errores y, en tal sentido, carecería de objeto de clase anterior, sin embargo, dicho principio alude en gran medida a la veracidad de las afirmaciones sobre los hechos, situación que lo distancia de los principios lógicos de no contradicción, tercio excluido e, identidad, que únicamente inciden en la corrección formal del razonamiento. Esta diferencia propicia que la doctrina ubique al principio de razón suficiente en la frontera de la lógica y que le otorgue un tratamiento distinto" (CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZAVALITA RODRIGUEZ, Roger, 2006, pág. 448).

Sobre el tema Olsen Ghirardi señala: "La motivación es defectuosa en sentido estricto cuando el razonamiento del juez viola los principio lógicos y las reglas de la experiencia.

Diríamos, por la investigación realizada, que los casos que se presentan aquí son menos frecuentes.

El caso que quizá se da alguna vez es el de la violación del principio de contradicción (o de no contradicción) que se enuncia en latín con la fórmula *Nihil potest simul esse et non esse*, que puede traducirse como que Nada puede ser y no ser juntamente. En verdad, en cuanto meditamos sobre este principio, tal como se ha enunciado, advertiremos que parte de la raíz más honda del ser" (GUIRARDI, Lógica del Proceso Judicial (Diálogo del Derecho), 1992, pág. 122).

1.8.3. Motivación completa y rigurosa

Mixán Máss sostiene: "La motivación completa y rigurosa, es la que contiene una argumentación necesaria y suficiente para el caso concreto: argumento de naturaleza óptica (fáctica), argumentos jurídicos (inherentes a la norma jurídica aplicable) y argumentos valorativos; todos ellos, formulados y concatenados rigurosamente mediante los principios lógicos pertinentes (de lógica clásica y/o moderna)

y las reglas lógicas de los tipos de inferencias aplicadas; o sea, argumentación exenta de paralogismos o falacias. También son de aplicación las reglas no – lógicas necesarias, como por ejemplo, las de experiencia. La motivación completa y rigurosa requiere como mínimo:

- a) Dominio cognoscitivo sobre el caso problema.
- b) Aplicación del fundamento jurídico.
- c) Proceso discursivo correcto.
- d) Argumentación pertinente, explicativa y valorativa.
- e) Deber de argumentar el apartamiento de la orientación precedente.
- f) Completud de la argumentación” (MIXÁN MÁSS, Lógica para Operadores del Derecho, 1998, págs. 373-377).

1.8.4. Motivación incompleta

“Es la que consta de proposiciones pero que no constituyen argumentación alguna ya sea sobre una o más aspectos o circunstancias importantes del caso o con respecto a la causa o al efecto, etc., del problema a resolver. Tiene lugar mediante yuxtaposición de proposiciones impertinentes u oscuras o anfibológicas o difusas o también mediante la yuxtaposición de proposiciones incoherencias pero, al final, aparece una conclusión ex abruptamente acoplada. Es una motivación hecha omitiendo la exigencia de la completad (de la “saturación”).

En este caso se trata de una motivación unilateral que incluso puede ser superficial" (MIXÁN MÁSS, Lógica para Operadores del Derecho, 1998, pág. 381).

1.8.5. Motivación deficiente

"La motivación deficiente es la que contiene una argumentación vaciada en todo o en parte por infracción de uno o más principios lógicos indispensables para el caso. Esta deficiencia puede ocurrir por ignorancia o por negligencia o intencionalmente. Es obvio que la motivación deficiente incluye también el supuesto de la omisión de criterios gnoseológicos como, por ejemplo, de las reglas de la experiencia o criterios de valor pese a que son indispensables para completar la argumentación, sean en la dimensión explicativa o en la dimensión justificatoria" (MIXÁN MÁSS, Lógica para Operadores del Derecho, 1998, pág. 381)

1.9. Deber de motivación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El artículo 8 de la Convención Americana permite notar que el deber de motivación no se encuentra incluido expresamente dentro de sus disposiciones. A través de su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha tenido la posibilidad de ampliar, aunque paulatinamente, el contenido del artículo 8.1., de la Convención para incorporar el deber de motivación. La Convención Europea de

Derechos y Libertades Fundamentales tampoco establece de modo literal esta garantía. Con anterioridad a los pronunciamientos del Sistema Interamericano, el Tribunal Europeo ha entendido la importancia de la motivación, puesto que su ausencia coloca en incertidumbre a los ciudadanos sobre si los órganos revisores han sido negligentes o si han descartado las alegaciones planteadas por los ciudadanos, tal como fuera señalado en el Caso Hiro Balani vs. España. Cf. TEDH. Caso Hiro Balani vs. España. Sentencia del 9 de diciembre de 1994, párrafos 26 a 28.

En el sistema Interamericano, el primer caso en el que se alegó la falta de motivación de una decisión judicial fue en el de Lori Berenson vs. Perú. Cf. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, párrafos 175 a 181. En concreto, la Comisión alegó que “la sentencia que condenó a la presunta víctima en el fuero ordinario carece de motivación de hechos, toda vez que no enunció los medios de prueba en que fundamentó su decisión ni analizó su valor probatorio”. Cf. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, párrafos 175. Por su parte, el Estado sostuvo que “en el Perú las cuestiones de hecho no se motivan, sino se definen por criterio de conciencia y a través de un documento que es previamente votado por el juzgador de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimientos Penales del Perú (...)””. Cf. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo,



Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, párrafos 175.

La Corte observó las normas del ordenamiento interno peruano relativas a la valoración de la prueba y motivación de hechos, y concluyó que la sentencia de condena a la señora Lori Berenson en el juicio ordinario se formuló conforme a estos criterios. Agregó además que no se pronunciaría "sobre la elección de dicho sistema de apreciación de la prueba que guarda estrecha relación con el que se observa en el juicio por jurado adoptado en diversos ordenamientos. Cf. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, párrafos 179. De este modo, en este primer caso, la Corte optó por una posición formalista y distante, en tanto no ingresó a analizar la calidad de motivación, situación que cambiará en posterior jurisprudencia.

A continuación, nos referimos a los múltiples procesos en los que la Corte Interamericana ha exigido el deber de motivación. La Corte Interamericana ha señalado que en toda decisión que afecte derechos humanos es fundamental la motivación de estas decisiones. Y es pertinente destacar que la Corte ha adoptado un estándar similar al desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, referido a que la forma de motivación depende de la naturaleza de la decisión y que no se exige una respuesta detallada a todo argumento suministrado por las partes. Estos criterios fueron establecidos en el caso Hurk vs. Holanda. Cf.

TEDH. Caso Hurk vs. Holanda. Sentencia del 19 de abril de 1994, párrafo 61, que versaba sobre un pronunciamiento denegatorio en el marco de un proceso agrario referido a medidas adoptadas por los órganos comunitarios europeos. (SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina, 2012, pág. 236)

1.10. La motivación según el Tribunal Constitucional del Perú

Como lo precisado este Tribunal el contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales exige: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y asimismo reclama, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. (Cfr. Exp. N° 4348-2005-PA/TC).

No es necesaria una motivación extensa, o pormenorizada, basta que la resolución exprese la justificación de la decisión adoptada, aún si fuera breve y concisa.

"11. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de



proceso. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezca, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resulto y, por sí misma, expresa una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.

Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que el juez penal corresponde resolver". (STC. Exp. N° 1230-2002-HC/TC).



El Juez penal deberá explicar la conexión entre los hechos narrados, las pruebas aportadas, y las razones que le permiten establecer una determinada relación jurídica. Asimismo, deberá explicar el grado de convicción que le generan las pruebas aportadas por las partes.

"La motivación de las resoluciones judiciales está comprendida en el debido proceso. La doctrina ha convenido en que la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales es la explicación detallada que hace el juez de las razones de su decisión final, explicación que va dirigida a las partes, al juez de grado superior (que eventualmente conocerá en impugnación la decisión del inferior jerárquico) y al pueblo, que se convierte en "juez de sus jueces". El juez debe efectuar una conexión – relación lógica entre los hechos narrados por las partes y las pruebas aportadas por ellas, estando en el deber de explicar con sentido, igualmente lógico, cuál de las razones que le permiten establecer la correspondiente consecuencia jurídica (fallo de la sentencia); además, deberá explicar – motivar en su sentencia el grado de convicción que tiene respecto de las pruebas aportadas por las partes para acreditar los hechos narrados por ellas. La doctrina reconoce infracciones a la motivación; así Mixán Máss, en "Debate Penal" N° 02, mayo, 1987, Perú, pp. 193-203, manifiesta que: "la infracción al deber de motivar adopta dos modalidades (tipos) a) Resoluciones sin motivación y b) resoluciones con motivación deficiente (...)"; agregando que esta última "(...) resulta superficial

y/o unilateral o cuando las formas del pensamiento esgrimidos resultan contradictorios antagónicamente o bien cuando está plagado de vicios de razonamiento o de demostración (falacias o paralogismos) que anulan su consistencia y conducen a conclusiones erróneas o cuando sólo contiene una caótica u ordenada pero simple enumeración de folios (...); concluyendo en que "(...) en el procedimiento penal peruano son de inexorable y rigurosa motivación las sentencias y autos (...)" y según la Constitución Política del Perú los órganos jurisdiccionales deben fundamentar sus resoluciones en todas las instancias y también en todos los casos (...)" (STC. Exp. N° 9598-2005-PH/TC)

En esta ejecutoria el Tribunal Constitucional delimita los siguientes supuestos donde se concreta la afectación de este derecho.

"4. Tal como lo ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad (Cfr. STC. Exp. N° 3943-2006-PA/TC, caso Juan de Dios Valle Molina, fundamento 4), el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.

5. Sin embargo no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente una violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a

la motivación de las resoluciones judiciales. A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos:

- a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.
- b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por una lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro, cuando existe coherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo consistente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar al ámbito constitucional de la debida motivación del control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
- c) Deficiencia en la motivación externa; justificación de las premisas; que se presente cuando las premisas de las que parten el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto a su validez fáctica o jurídica.
- d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exige atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivado. Si bien, como lo ha establecido este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N° 1291-200-AA/TC, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la

insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control en sede constitucional. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o del desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)". STC. Exp. N° 04295-2007-PHC/TC. Caso Casas Santillan, fundamento jurídico N° 4-5.

En la presente jurisprudencia el Tribunal Constitucional concreta aún más los supuestos en donde se estaría incurriendo una indebida motivación.

"7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren

justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona al ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular los magistrados Gonzáles Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N° 1744-2005-PA/TC), este colegiado constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado entre otros, en los siguientes supuestos:

- a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Esta fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustenta la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque sólo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
- b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento (defectos internos de la motivación) se presenta en una doble dimensión; por una lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y,

por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

- c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede utilizar la actuación del Juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto a la validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en casos difíciles como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) Ha establecido la existencia de un daño; 2) Luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por "X", pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de "X" en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas

por el Juez (Constitucional) por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del Juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio que el habeas corpus no puede reemplazar la actuación del Juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo de éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; si bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del Juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y la razonabilidad judicial en el estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

- d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido éste Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar



respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no de cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia

procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altera o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

- f) Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacada éste Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión, como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal". STC. Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, Caso Llamuja Hilares, fundamento jurídico N° 7.

La falta de motivación interna del razonamiento se da en dos dimensiones: a) cuando la inferencia es inválida; b) cuando existe incoherencia normativa.

"6. La falta de motivación interna del razonamiento (defectos internos de la motivación) se presenta en una doble dimensión: por una lado, cuando existen invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los



argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa". STC. Exp. N° 04950-2009-PHC/TC, Caso Aguirre Rojas, fundamento jurídico N° 6.

El artículo 139 de la Constitución del Estado enumera los principios y derechos de la función jurisdiccional y en cuyo inciso 5 establece: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan; a ello se agrega que el Tribunal Constitucional haciendo uso de las facultades de interpretación máxima de la Constitución Política del Estado ha señalado que El derecho a la debida motivación de las resoluciones como parte de un debido proceso, implica que una resolución debe contar con suficiente motivación tanto de los hechos como de la interpretación y/o razonamiento de normas invocadas; por tanto la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. Exp. N° 03283-2007-PA/TC, a ello es necesario señalar que en todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas - sean o no de carácter jurisdiccional-, es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la Tutela

Procesal efectiva, por tanto toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria siendo inconstitucional.

En igual sentido el Tribunal Constitucional en EXP. N.º 00728-2008-PHC/TC LIMA caso GIULIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES, señala: "... Este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el

ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. (...) El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva



constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) Motivaciones calificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el

caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal..."

El derecho a la debida motivación

Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de precisar que: "el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa por los Jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión.

Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los Jueces ordinarios" STC Exp. 1480-2006-AA, fundamento jurídico 2.

La debida motivación de las resoluciones judiciales

Merece control constitucional el extremo en el que se señala que la sentencia no ha tenido justificación suficiente. Al respecto, el derecho a la motivación de la resoluciones, tal como ha tenido la

oportunidad de precisar este Tribunal Constitucional (Exp. N° 05601-2006-PA/TC, fundamento 3). "... constituye una garantía fundamenta en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional".

En ese sentido si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, esto es, cuando no se motiva debidamente o en todo caso legítimamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción. En este sentido, toda sentencia que sea más bien fruto del decisionismo que de la explicación del derecho, que este más próxima a la voluntad que a la justicia o la razón; que sus conclusiones sean ajenas a la lógica será una sentencia arbitraria, injusta y por lo tanto inconstitucional (cfr. Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, caso Llamoya Hilaes, fundamento 8).

Esta exigencia de motivación de las resoluciones judiciales guarda concordancia con el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad, el cual surge del Estado Democráticos de Derecho (artículo 3 y 43 de la Constitución Política) y tiene un doble significado: a) en un sentido clásico y genérica la

arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; y, b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como la carente de fundamentación objetiva; como la incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo (Exp. N° 0090-2004-AA/TC, fundamento 12).

A lo dicho debe agregarse que constituye el deber primordial del Estado Peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad (artículo 44, de la norma fundamental).

Como lo ha precisado el Tribunal Constitucional el contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales exige que exista: a) fundamentación jurídica; que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación o justificación de porque tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas, b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes, y c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Exp. N° 4348-2005-PA/TC.

2. LA PRUEBA

2.1. Nociones generales sobre prueba

a) Que es prueba

“La prueba es la actividad desplegada generalmente por las partes, y excepcionalmente de oficio por el juez, cuya finalidad es verificar las afirmaciones sobre los hechos aportados por las partes y determinar la certeza de los hechos controvertidos, que se plasma en la sentencia a través de la motivación fáctica, basada ora en regla tasada ora en la sana crítica” (ABELL LLUCH, 2012, pág. 19)

b) Qué se prueba

“Cuando hablamos del objeto de la prueba no contestamos a la pregunta ¿Con qué se prueba?, ni tampoco a la pregunta ¿Con qué fin probamos?, sino que contestamos a la pregunta ¿Qué se prueba en el proceso penal?.

En general todo hecho, todo fenómeno o mejor dicho todo lo que existe en el mundo real es teóricamente susceptible de ser probado; lo que sucede es que hasta el avance actual de las ciencias existen muchos objetos por conocerse en su totalidad o muchos otros que se conocen sólo en sus aspectos parciales, por lo que, el objeto de conocimiento en la práctica tiene límites aunque éstos no sean infranqueables” (CHOCANO NÚÑEZ, 2008, pág. 65)

“El objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, o los

enunciados sobre hechos. Los hechos existen en la realidad, fuera del proceso, y en el proceso se verifican las afirmaciones que las partes efectúan sobre los mismos y a través de los escritos de alegaciones" (ABELL LLUCH, 2012, pág. 21)

"Se prueban y por lo tanto, son objetos de la prueba, las afirmaciones sobre hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes. A condición de que el hecho afirmado, controvertido y conducente no este exento de prueba ni exista prohibición legal al respecto. Examinémoslo a continuación: 1) los hechos afirmados, 2) los hechos conducentes, y 3) los hechos controvertidos (ora por haber sido expresamente negados, ora por haber sido afirmados por una parte y a su respecto la contraria guardo silencio)" (SEBASTIÁN MIDÓN, 2007, pág. 127)

c) Con qué se prueba

"Por los medios probatorios o medios de prueba comprendemos todos aquellos elementos o instrumentos utilizados por los sujetos procesales (las partes, el juzgador y los terceros legitimados) para incorporar al proceso o procedimiento fuentes de prueba. Son ejemplos de medios de prueba: los documentos, la declaración de parte, la declaración de testigo, las inspecciones judiciales, los dictámenes periciales, etc." (BUSTAMANTE ALARCÓN, 2001, pág. 97)

"Las afirmaciones sobre los hechos efectuadas por las partes se verifican a través de las fuentes de prueba, que se

introducen en el proceso mediante los medios de prueba. La distinción entre fuentes y medios de prueba, procedente de CARNELUTTI y desarrollada por SENTÍS MELENDO, resuelve el interrogante de con qué se prueba.

Las fuentes de prueba son conceptos preexistentes al proceso (la parte, el testigo, el documento, el lugar, objeto o persona que ha ser examinada, el conocimiento técnico del perito) y los medios de prueba son conceptos que existen en y para el proceso (el interrogatorio de las partes o de testigos, la prueba documental, el reconocimiento judicial, el dictamen de peritos).

Las fuentes de prueba son los instrumentos que deben averiguar las partes para acreditar sus afirmaciones de hecho y son, por definición, ilimitadas. Los medios de prueba son los instrumentos de que se sirve el juez para verificar las afirmaciones fácticas de las partes y son los previstos por el legislador" (ABELL LLUCH, 2012, pág. 25)

d) Quién prueba

"Según Eugenio Florián, la carga de la prueba consiste en el deber peculiar y exclusivo de cada una de las partes indicar el hecho que se ha de probar y suministrar la prueba de ese hecho, afirmado por cada una; vale decir, que la prueba de un hecho es asunto de la parte que lo afirma" (ROSAS YATACO, 2013, pág. 848)

“Aquí debemos distinguir entre cargas de las partes y facultades del juez. A las partes les corresponde la carga de alegar y probar. Incumbe a las partes la función de averiguar las fuentes de prueba y aportarlas al proceso, y no es tal misión la del juez, so pena de subvertir la función de juzgar o menoscabar el insoslayable deber de imparcialidad judicial. Nadie mejor que las partes conoce los hechos y puede aportar las fuentes de prueba ante el juez.

Las partes son, por ende, quienes tienen la carga de la prueba y quienes sufren también los riesgos por la falta de prueba, pues como apunta ROSEMBERG, el problema de la carga de la prueba sólo se presenta cuando la prueba no se ha producido, pues, son normas dirigidas al juez que se aplican cuando no se ha logrado la certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en cada proceso” (ABELL LLUCH, 2012, pág. 29)

e) Cómo se valora la prueba

“La verificación de los hechos afirmados por las partes e introducidos en el proceso a través los medios de prueba culmina con la valoración judicial en la sentencia. Aquí debemos acotar el significado legal de la valoración de la prueba, distinguir entre los sistemas tasados y los de libre valoración y por último, presar el alcance de la expresión apreciación conjunta de la prueba.

Las pruebas se valoran al final del proceso. En efecto, las partes son dueñas de las fuentes de prueba y al juez le corresponde introducirlas en el proceso con la admisión de los medios de prueba. Pero una vez introducidas en el proceso, las fuentes, que eran de las partes, dejarán de ser y se encuentran a disposición del juez para su valoración. Una vez adquirida la prueba, por cualquiera de las partes (principio de adquisición procesal), el juez inicia el proceso mental de valoración de la prueba" (ABELL LLUCH, 2012, pág. 31)

2.2. El derecho a probar

"El derecho a la prueba integra la garantía de defensa procesal. Se define este derecho como el poder jurídico que se reconoce a toda persona que interviene en un proceso jurisdiccional de provocar la actividad procesal necesaria – utilizar los medios de prueba necesarios – para lograr la convicción del órgano jurisdiccional acerca de la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto que es objeto del proceso" (SAN MARTÍN CASTRO, 2015, pág. 503)

"En nuestra opinión, el derecho a probar – también llamado derecho a la prueba – es un **derecho de carácter procesal que integra el derecho fundamental a un proceso justo** – o simplemente debido proceso – pues, éste es un derecho complejo que está conformado por un conjunto de derechos destinados a asegurar que el inicio, desarrollo y conclusión de un proceso o

procedimiento, así como las decisiones en ellos se emitan, sean objetiva y materialmente justas. Siendo el derecho a la prueba el que garantiza que los medios probatorios ofrecidos serán admitidos, practicados y valorados adecuadamente (de conformidad con los principios y demás bienes jurídicos que delimitan su contenido), el derecho a la prueba se presenta como uno de los elementos esenciales que configuran un proceso justo, de tal suerte que allí donde no exista o no tenga una vigencia real o efectiva no habrá proceso o procedimiento justo" (BUSTAMANTE ALARCÓN, 2001, pág. 80)

2.3. El derecho a ofrecer prueba

El Tribunal Constitucional afirma que una de las garantías que asiste a las partes del proceso (en general) es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de que sus enunciados fácticos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, no se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva. El derecho a la prueba implica la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor (STC 6712-2005-HC/TC)

Una de las manifestaciones de este elemento del derecho a probar se encuentra en la posibilidad de ofrecer testigos. Tal

como expresa con claridad el artículo 14, inciso 3, acápite e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la persona acusada tendrá derecho, en plena igualdad y durante todo el proceso: a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y a que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.

Conforme a este derecho, por regla general se puede ofrecer cualquier medio de prueba para probar cualquier hecho objeto de prueba, siempre que no esté expresamente prohibido o no permitido por la ley. Subyace aquí el principio de libertad de prueba. Pueden aportarse medios de prueba típicos – los previstos expresamente en la ley – o atípicos – aquellos que no están regulados en la ley -, en cuyo caso la forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos en lo posible (art. 157 del NCPP) (TALAVERA ELGUERA, La Prueba en el Nuevo Proceso Penal, 2009, pág. 24)

2.4. El derecho que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos

Este elemento consiste en el derecho que tiene su titular a que se admitan los medios probatorios ofrecidos, con el propósito de acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que

constituyen el objeto concreto de prueba. (TALAVERA ELGUERA, La Prueba en el Nuevo Proceso Penal, 2009, pág. 25)

El derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho a la prueba no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos. En principio, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando importen pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos o útiles, así como manifiestamente excesivos (STC 6712-2005-HC/TC)

“El primer elemento del derecho a la prueba carecería de trascendencia práctica si los medios probatorios ofrecidos no ingresaran oficialmente al proceso o procedimiento. Por lo tanto, su **segundo elemento** consiste en el derecho que tiene su titular a que se **admitan** los medios probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que constituyen el objeto concreto de prueba (trátase del objeto de prueba principal o de un objeto de prueba incidental o secundario)” (BUSTAMANTE ALARCÓN, 2001, pág. 140)

3. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

“La actividad probatoria tiene tres momentos: en primer lugar, la conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas (producción de la prueba), la valoración y la decisión sobre los hechos probados.



La valoración es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a establecer cuál es su real utilidad para los fines de la formación de la convicción en el juez sobre las afirmaciones sobre los hechos que dieron origen al proceso" (TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 105)

El Juez al dictar una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria tiene que valorar todos los medios probatorios de cargo y descargo que han sido ofrecidos, actuados en la tramitación de un proceso penal.

"La mayoría de las resoluciones judiciales, en especial las sentencias, no cumplen con los estándares de calidad adecuados en cuanto a la motivación de los hechos y las pruebas" (CASTILLO ALVA, 2013, pág. 242)

"La parte considerativa contiene el análisis de la cuestión en debate; puede adoptar nombres tales como "análisis", "consideraciones sobre hechos y sobre derecho aplicable", "razonamiento", entre otros. Lo relevante es que contemple no sólo la valoración de los medios probatorios para un establecimiento razonado de los hechos materia de imputación, sino también las razones que desde el punto de vista de las normas aplicables fundamentan la calificación de los hechos establecidos" (LEÓN PASTOR, 2008, pág. 81)

"La reconstrucción del hecho, al igual que las restantes pruebas obtenidas durante el proceso, será valorada con arreglo a la sana crítica racional (art. 193. CPP Córdoba).

De allí que pueda afirmarse que, apoyándose en las reglas de la lógica, las ciencias y la experiencia común, el órgano judicial



interviniente es totalmente libre en la apreciación de los resultados que pueda arrojar la reconstrucción, siempre que, desde luego, justifique de manera seria la apreciación que hace y la aceptabilidad racional de sus conclusiones" (AROCENA, Gustavo Alberto; BACARCE, Fabián Ignacio y CESANO, José Daniel, 2009, pág. 150)

"El resultado de la producción de las pruebas durante el juicio oral es la base de la sentencia ¿Pero qué hechos se tiene que probar?. Principalmente aquéllos requeridos para fundamentar la responsabilidad del acusado sobre la base de la acusación. Según el art. 156 inc. 1 del NCPP, son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. Entonces solamente estos hechos deberían ser objeto de las pruebas. En caso se hubiera producido pruebas en el juicio oral, pero sus resultados no fueran necesarios para fundamentar sentencia, entonces éstas podrían ser excluidas de la fundamentación sin necesidad de brindar explicación alguna. Como ya se ha manifestado en varias oportunidades a lo largo de este texto, solamente se debería incorporar a la fundamentación de la sentencia lo que se necesita para fundamentar el fallo y su resultado.

Para llegar la constatación de los hechos a través de la valoración de las pruebas no se necesita mayores conocimientos de derecho, estos más bien, se requieren para determinar cuáles con los hechos relevantes para la prueba y qué se necesita para fundar la existencia de un hecho delictivo punible" (SCHONBOHM, 2014)

4. LA MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS

“La descripción de los hechos deberá ser terminantemente, sin que pueda dar origen a dudas, que vaya a crear incertidumbre judicial, y, sin contradicciones, por cuanto que sobre el contenido de los hechos expuestos, va a fundamentarse jurídicamente la condena o absolución del procesado” (ADRIAN AMBIA, 2000, pág. 81)

“La garantía constitucional de la motivación de los hechos no debe entenderse como una mera garantía de carácter formal que se da por satisfecha con la simple presencia de palabras y un discurso inteligente, sin mayor exigencia en cuanto a su contenido y sentido. Se trata más bien de una garantía material en el que para su validez se requiere del aporte de buenas razones y de un discurso justificativo plausible tanto para precisar los enunciados fácticos, la prueba, su contenido, como las inferencias que las conectan con los hechos y que permiten considerar que se trata de enunciados verdaderos (o falsos)” (CASTILLO ALVA, 2013, pág. 251)

“Debe precisarse además, que el dato de hecho al que aquí nos referimos no está constituido por la mera existencia física de un cierto discurso objetivizado en el escrito, o de alguna de sus partes: se trata, por el contrario, de un hecho que tiene una estructura compleja, y que sólo en parte puede ser individuado a través de la percepción empírica. En general, el mismo puede definirse como un comportamiento del juez, constituido por la afirmación de determinadas cosas en la motivación: se trata, por lo tanto, de un hecho que puede individuarse sólo a través de una reconstrucción que realice el intérprete (por vía inductiva e

hipotética), sobre la base de lo que dicho comportamiento haya producido, es decir, las aserciones y los juicios expresados por el juez en la motivación" (TARUFFO, 2006, pág. 58)

"A continuación mencionaremos las reglas de carácter general que sobre la motivación del juicio histórico contiene el nuevo Código Procesal:

Primera regla: el juez está en la obligación de enunciar en la sentencia los hechos y circunstancias objeto de la acusación (art. 394°.2). Esto es, los enunciados fácticos de la parte acusadora, los mismos que deben ser detallados tomando en cuenta la pluralidad tanto de hechos punibles como de acusados, si fuera el caso.

Segunda regla: la motivación correcta de una sentencia debe contener la enunciación de las hipótesis alternativas a la hipótesis acusatoria; es decir, la explicación o versión acerca de los hechos que formulan las otras partes. Puede tratarse tanto de una alegación defensiva como de una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, o simplemente de una versión distinta de la presentada por la acusación. Si bien el nuevo Código no hace una mención expresa a una hipótesis alternativa, la misma se desprende del art. 394°.2 al referirse el Código a la enunciación de la pretensión de la defensa del acusado, que como se sabe engloba tanto lo fáctico como lo jurídico.

Tercera regla: el juez solo podrá justificar la motivación fáctica en las pruebas legítimamente incorporadas en el juicio (art. 393°.1). Dicho de otro modo, la hipótesis o versión acerca de los hechos elegida por el

juez debe sustentarse en pruebas practicadas u oralizadas en el debate.

Cuarta regla: la motivación sobre el juicio histórico o fáctico debe contener los resultados del examen individual de las pruebas del examen conjunto de las pruebas (arts. 158°.1 y 393°.2). En el primer caso, deberán explicitarse las fases de fiabilidad probatoria, interpretación, verosimilitud y comparación de los resultados probatorios con los enunciados fácticos alegados. En el segundo caso, se deberá determinar cuál de las hipótesis se encuentra mejor explicada o sustentada con el conjunto de la prueba.

Quinta regla: La motivación sobre los hechos debe explicitar los criterios adoptados en la valoración de la prueba, esto es, las pautas que se ha seguido para la valoración, que bien han podido ser criterios científicos, técnicos o de sentido común, así como aquéllos que se encuentran previstos específicamente en la ley (art. 158°) o han sido establecidos por la doctrina jurisprudencial. Así exige el art. 158°.1.

Sexta regla: La sentencia debe contener la motivación acerca del razonamiento probatorio (art. 394°.3), lo que significa explicitar la inferencia probatoria, una de cuyas premisas esenciales está dada por la regla o máxima de la experiencia (393°.2). Es decir, no basta con enunciar lo que dijo tal o cual testigo o perito (condición necesaria), sino que es indispensable que se enuncie la regla de experiencia conforme a la cual se le otorga o no credibilidad (condición suficiente).

Sétima regla: la motivación del juicio histórico debe ser clara (art. 394°.2); esto es, debe expresarse en un lenguaje comprensible para

cualquier ciudadano. No sólo se trata de observar las reglas de lenguaje y estilo, sino también de mostrar una coherencia narrativa y de que se encuentren comprendidos todos elementos del *tema probandum*.

Octava regla: la motivación fáctica ha de ser lógica (art. 394°.3); esto es, libre de contradicciones o de vacíos o saltos lógicos (falta de alguna de las premisas del razonamiento probatorio). Además, la argumentación debe respetar las leyes del razonamiento correcto y encontrarse carente de falacias.

Novena regla: la motivación sobre los hechos debe ser completa (art. 394°.3), no solo que en ésta exista un pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados, sino también a los que se declaran improbados. Esta regla es consecuencia del llamado principio de completud.

Décima regla: en la motivación de la sentencia han de considerarse todas las pruebas practicadas (arts. 393°.2 y 394°.3), no solo las que sustentan la hipótesis elegida. Se debe apreciar también las pruebas presentadas para refutarlas y las pruebas que respaldaban las hipótesis rechazadas" (TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 51 y 52)

"Según el art. 394, inc. 2 en la sentencia se debe indicar los hechos y circunstancias de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado. Con esta información el tribunal analiza el objeto del juicio con los puntos controversiales sobre cuales debe juzgar. En el centro está la acusación como ha quedado con la emisión del auto de enjuiciamiento, según el art. 353, pero esto no significa repetir todo el texto de la

acusación que con frecuencia contiene muchos datos y detalles no relevantes para la decisión del tribunal en el juicio oral. Se debería limitar a los hechos materia de la acusación fiscal, lo cual es necesario para fundamentar la existencia de un hecho delictivo con la indicación del texto legal del delito, la pena y reparación civil que se solicite y en el caso concreto otras alternativas de tipificación y subsidiarias. Repetir el contenido del alegato inicial del fiscal no ayuda, más bien, puede confundir, porque la base del proceso es la acusación con los cambios sufridos por el auto de enjuiciamiento. Solamente en el caso que el fiscal pretende introducir algunos cambios en relación a la acusación como ha quedado con el auto de enjuiciamiento sería recomendable mencionar también el cambio introducido. La razón es, que el tribunal tiene que expresarse en la sentencia sobre esta pretensión". (SCHONBOHM, 2014, pág. 76)

5. MÉTODOS DE VALORACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 literal 1 del Código Procesal Penal: "En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados"

a) La lógica

"El primer grupo viene a estar conformado por las leyes o principios lógicos que informan la validez del juicio de valor finalmente expuesto en los autos. Estos principios nos van

permitir evaluar si el razonamiento, en tanto estructura discursiva, es formalmente correcto; es decir, si no ha violado alguna ley del pensar.

Los principios o reglas básicas de la lógica aplicables en el proceso son:

El principio de identidad: cuando en un juicio, el concepto-sujeto es idéntico total o parcialmente al concepto-predicado, el juicio es necesariamente verdadero.

El principio de contradicción: no se puede afirmar y negar respecto de algo una misma cosa al mismo tiempo. Según este principio "la misma cosa no puede ser y no ser a la vez, y bajo el mismo respecto"; es decir, al mismo tiempo o en el mismo sentido. Por lo tanto, no es correcto afirmar y negar a la vez la existencia de un hecho, la calidad de una cosa, la aplicación de una norma, etc. Se viola este principio cuando se afirma y se niega conjuntamente una cosa o una característica de un mismo objeto.

El principio del tercero excluido: de dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero. Se sostiene la verdad de uno y la falsedad del otro enunciado opuesto contradictoriamente, aunque sin precisar cuál de ellos es el verdadero y cuál el falso. Este principio es similar al de contradicción; enseña que entre dos proposiciones contradictorias, necesariamente una es verdadera y la otra es falsa, y que ambas no pueden ser verdaderas y falsas a la vez. Se

afecta este principio, por citar un ejemplo, si se valora un medio probatorio que momentos antes fue declarado improcedente por ser manifiestamente impertinente (en efecto, al valorarlo se está reconociendo su pertinencia, a pesar de que momentos antes se dijo todo lo contrario); o cuando se dice que un testigo es idóneo para acreditar determinado hecho y actos seguido que no lo es" (TALAVERA ELGUERA, 2009, págs. 110-111)

b) La ciencia

"El proceso penal no ha permanecido ajeno al *boom* de las pruebas científicas (*scientific evidence*) generado en las últimas décadas como consecuencia de los avances tecnológicos y científicos. Hoy en día es frecuente el uso de dichas pruebas en el ámbito de la investigación penal y como fundamento de pronunciamientos condenatorios" (MIRANDA ESTRAMPES, 2012, pág. 137)

"Las exigencias de racionalidad, de controlabilidad y de justificación del razonamiento probatorio del juez, determinan que deba recurrir a la ciencia, o sea a conocimiento que se forman por fuera del Derecho y que se caracterizan por la peculiar aceptabilidad debida al hecho de que resultan de las investigaciones y búsquedas de carácter científico.

En la cultura moderna, la referencia a los conocimientos científicos responde de modo particularmente eficaz a la necesidad de certeza que se manifiesta en muchos sectores de la experiencia individual y social.

Dado, el avance vertiginoso de los descubrimientos científicos, el juez sólo puede emplear para la valoración de la prueba aquellos conocimientos científicos cuya aceptabilidad resulte segura. Dicho de otro modo, deberá aplicar las reglas de la ciencia o conocimientos científicos asentados, conocidos por la generalidad" (TALAVERA ELGUERA, 2009, págs. 114-115)

c) Las máximas de experiencia

"El grupo de las reglas de la experiencia está conformado por el número de conclusiones extraídas de una serie de percepciones singulares pertenecientes a los más variados campos del conocimiento humano (técnico, moral, ciencia, conocimientos comunes, etc.), consideradas por el juez como suficientes para asignar un cierto valor a los medios probatorios.

Son reglas contingentes, variables en el tiempo y en el espacio; y están encaminadas a argumentar el valor probatorio asignado a cada medio probatorio en particular; como primordialmente a su conjunto. Estas reglas, de otro lado, no pueden ser determinadas, por los menos de una manera pretendidamente exhaustiva. Ello no tendría sentido puesto que, si bien es importante detectarlas, no olvidemos que es el juez quien libremente las escoge y determina: solo le exigiremos que sea lógico, prudente y sensible para optar; en el caso concreto, por las reglas o pautas que mejor satisfagan al descubrimiento de la verdad" (TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 111)

"Máxima de experiencia" es apotegma que expresa el acervo de la experiencia colectiva sobre aquello que aconteció o acontece reiterativamente en la sociedad o en la naturaleza, razón por la que adquiere la categoría de pauta general que se transmite de generación en generación. Es una síntesis del proceso de abstracción colectiva, del saber colectivo de estirpe tradicional.

Por esa razón, en caso necesario, sea durante los actos de investigación o de juzgamiento (de prueba) o de valoración de la prueba, es aplicable directamente. No se necesita probar su existencia ni su veracidad; pero, es conveniente tener en cuenta si son pertinentes y, sobre todo, si mantiene su vigencia, ya que los cambios históricos o naturales pueden producir mutaciones cualitativas radicales (*rebus sic standibus*) que hayan dejado a la máxima sin contenido actual; pues, algunas de las máximas de la experiencia por ser propias de una determinada época o de una civilización extinguida pueden perder vigencia (...)

Las máximas de experiencia se clasifican tradicionalmente en *sentencias, proverbios, refranes, aforismos, adagios*.

La *sentencia*, como máxima de la experiencia, es una locución breve que expresa una sabiduría orientada a ilustrar, a instruir, el entendimiento de los demás. Por ejemplo: *"no es más sabio aquel que más sabe, sino aquel que sabe mejor"*. *"Si sólo lo escucho, lo olvido fácilmente; si lo veo lo recuerdo; si lo hago, lo sé"*. *"Un hombre concreto no puede encontrarse al mismo tiempo*



en dos lugares diferentes". "La juventud es el paraíso de la vida; la alegría es la juventud eterna del espíritu". "El que no teme la muerte no teme las amenazas". "Una amistad reanudada requiere más cuidado que la nunca se ha roto".

Cuando una sentencia es formulada en lenguaje sencillo, pero con contenido preeminentemente filosófico, recibe el nombre de *adagio*, tal sería por ejemplo: *"No hay mal que por bien no venga ni mal que no tenga algo de positivo"* (Esta sentencia equivale a una alusión a la ley dialéctica de la "unidad y lucha de contrarios"). *"La persona es individuo y ser social a la vez"*.

El *aforismo* es también un tipo de sentencia que tiene como nota distintiva la de expresar un laconismo doctrinario, una síntesis de lo más interesante de una determinada disciplina, como ocurre en materia jurídica. Son ejemplos típicos los *aforismos latinos*.

El *proverbio* es también un dicho breve, con contenido y mensaje necesariamente moralista: *"Quien comienza en juventud a bien obrar, señal es de no errar en senectud"*. *"No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo"*, etc." (MIXÁN MÁSS, Cuestiones Epistemológicas y Teoría de la Investigación y de la Prueba, 2009, págs. 159-160)

6. EL DEBIDO PROCESO

6.1. Concepto

“Hemos hecho referencia la institución del debido proceso que es una de las garantías imprescindibles que debe concurrir en toda clase de procedimiento, específicamente, dentro del proceso penal, por cuanto tiene como especial y sagrada misión, velar por el fiel cumplimiento de las normas procesales y de procedimientos, a fin de que no se vulneren los derechos fundamentales consignados en nuestra Carta Fundamental. En cierta forma, es la rectora de las demás garantías que rigen todo el proceso; así, cuando la Constitución afirma que la persona “fin supremo de la sociedad y del Estado”, significa que la actividad penal, en especial, la actividad probatoria, está inexorablemente inmersa en el ámbito normativo de este supremo principio constitucional” (PELAEZ BARDALES, 2013, pág. 70)

“El derecho al debido proceso, en sentido abstracto, se entiende como la posibilidad que tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, en aras de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un procedimientos judicial o administrativo. Así, el contenido y los alcances del debido proceso están determinados por ese grupo de atribuciones y mecanismos los cuales, a su vez, se encuentran establecidos en función de los derechos, intereses y valores que estén en juego en el procedimiento, de acuerdo con criterio de razonabilidad y proporcionalidad. (...)”

El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las personas, o de otros derechos que puedan verse afectados" (BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LAYNETT, Eduardo., 2004, pág. 357)

"En este orden de ideas, el nuevo Código Procesal Penal significa la constitucionalización del proceso penal, es decir, los principios y garantías consagrados en el texto *iusfundamental* son compaginados sistemáticamente en el sillar edificativo de este cuerpo de normas. Básicamente, el Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal ha adoptado un "núcleo duro" de estos *principios* tributarios del debido proceso y que inspiran el modelo procesal penal *acusatorio* con rasgos adversativos" (ORE GUARDIA, 2014)

6.2. Evolución histórica

"Para conocer el desarrollo y alcance del principio del debido proceso, es preciso remontarse a sus antecedentes históricos, que se encuentran reconocidos en el sistema *common law* anglosajón y regulado de manera expresa por primera vez en la Carta Magna de 1215, luego fue implantado a las colonias del Norte de América donde se incorporó en algunas constituciones coloniales o *charters*

y luego de un largo camino, a la Constitución Federal estadounidense de 1787 a través de sus enmiendas quinta (1791) y décimo cuarta (1868)

Los más importante instrumento que dieron a lo largo de esta historia jurídica el reconocimiento del *the due process of law* en Inglaterra han sido: The Charter of Liberties de 1100; la Carta Magna de 1215, las Oxford Provisions de 1258, el Confirmatio Cartarum de 1297, la Petition of Rights de 1628, the Instrument of Government (Cromwell) de 1653 y el Bill of Rights de 1688. La Declaración del Buen Pueblo de Virginia (1776)" (CERDAN SAN MARTÍN, Rodrigo y FELICES MENDOZA, María Esther, 2011, pág. 63)

"Históricamente, el derecho al debido proceso es una institución que proviene del derecho anglosajón (*due process of law*), y que faculta a toda persona a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues el Estado no solo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derecho de acción y contradicción), sino a proveerlas bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren el juzgamiento imparcial justo. Es decir, el derecho al debido proceso garantiza que la tramitación de un proceso – entendido en el sentido más lato posible – sea llevada a cabo de manera imparcial y ordenada, a fin de concluir en un resultado justo para las partes, por lo que también se erige como límite para el órgano que dirime la

controversia, determinando necesariamente su labor" (ORE GUARDIA, 2014, pág. 28)

"Derecho reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, mediante el cual se busca garantizar que, cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos, la solución es un conflicto jurídico o la aclaración de una incertidumbre jurídica, sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas (STC Exp. N° 0023-2005-PI/TC). La denominación procede del derecho anglosajón, en el que se emplea la expresión *due process of law* (que puede ser traducida como "debido proceso legal")" (BASTOS PINTO, 2012, pág. 163)

6.3. El debido proceso y el Tribunal Constitucional

"El Tribunal Constitucional ha establecido que el Debido Proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos" (Exp. N° 9727-2005-HC/TC. FJ. N° 7. Caso: Robert Ramírez Miranda)

"El Debido Proceso, a decir del Tribunal Constitucional, comporta dos dimensiones: una dimensión sustantiva (material) y una dimensión procesal (formal): Es la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tiene que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la



motivación, pluralidad de instancia; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer" (Exp. N° 8125-2005-HC/TC.FJ. N° 6. Caso: Jeffrey Immelt y otros)

"En otras palabras, el debido proceso no solo se manifiesta en una dimensión objetiva que está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales, sino también es una dimensión sustantiva que protege los derechos los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular. En consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios" (Exp. N° 3421-2005-HC/TC.FJ. N° 5. Caso: Nicke Nelson Domínguez Baylon)

"Como este Colegiado ha tenido oportunidad de señalar mediante uniforme y reiterada jurisprudencia, el debido proceso es un derecho fundamental de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los ámbitos sobre los que se aplica como en lo que atañe a las dimensiones sobre las que se extiende. Con relación a lo primero, queda claro que dicho atributo desborda la órbita estrictamente judicial para involucrarse o extenderse en otros campos como el administrativo, el corporativo particular, el parlamentario, el castrense, entre muchos otros, dando lugar a que en cada caso o respecto de cada ámbito pueda



hablarse de un debido proceso jurisdiccional, de un debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un debido proceso parlamentario, etc. Por lo que respecta a lo segundo, y como ha sido puesto de relieve en innumerables ocasiones, las dimensiones del debido proceso que no solo responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantivo material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgadas, etc.) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.) Así las cosas, el debido proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidas. Como ya se anticipó, en el caso de autos, se trata de un reclamo por la transgresión al debido proceso en sede administrativa, no solo en el ámbito formal sino también sustantivo. Corresponde, por tanto, a este Colegiado emitir pronunciamiento respecto de ambos extremo invocados". Derecho procesal de carácter genérico Exp. 03075-2006-AA. FJ. 4. (LANDA ARROYO, 2010, pág. 270)

"El debido proceso, según lo ha establecido la doctrina en forma consolidada es un derecho fundamental de carácter



instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Es el conjunto mínimo de elementos que deben estar presentes en cualquier clase de proceso para hacer posible la aplicación de la justicia en el caso concreto". Exp. N° 90-2004-PA/TC, 12-07-2004. Caso: Juan Carlos Gallegari Herazo. FJ. 22, citado por (TABOADA PILCO, 2014, pág. 706)

"El artículo 139.3° de la Const. Establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límite del ejercicio de las funciones asignadas. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Const. Y las leyes (art. 138 de la Const.) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Esta exigencia de motivación de las resoluciones judiciales guarda concordancia

con el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad que tiene un doble significado: a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho, b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo (STC N° 90-2004-AA/TC. FJ. 21). Constituye deber primordial del Estado peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, interdictando o prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad". (Art. 44 de la Const.). FJ. N° 3.

"El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe n puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.

En análisis de si es en una resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la

resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, más no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. En este tipo de proceso al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en la arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos (FJ. 6.)

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. No todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales". Exp. 728-2008-PHC/TC, 23-10-2008, Giuliana Flor de María Llamoja Hilares.

"El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, forma parte del "modelo constitucional del proceso",

cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse como debido.

En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no sólo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando éste participa en un proceso judicial – o en cualquiera de los ámbitos a los que este Tribunal en diversas ocasiones se ha referido – sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera sea la materia que en su seno pueda dirimir.

De esta forma, el debido proceso no es sólo un derecho de connotación procesal, que se traduce, como antes se dio, en el respeto de determinados atributos, sino también una institución más compleja “que no alude sólo a un proceso intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las modalidades de su tránsito, sino también a un proceso capaz de consentir la consecución de resultados esperados, en el sentido de oportunidad y de eficacia””. Exp. N° 2192-2002-HC/TC. FJ. N° 1. Caso: Noreña Tolentino. (CARO JOHN, José Antonio y HUAMAN CASTELLARES, Daniel, 2014, pág. 256)

6.4. Manifestaciones del debido proceso

a) El debido proceso formal

“En su faz procesal (*procedural due process*), el debido proceso o debido proceso adjetivo, formal o procesal, está comprendido por aquellos elementos procesales mínimos que resultan imprescindibles para que un determinado proceso

(concepto cuyos alcances trascienden a lo que nosotros conoces como "proceso judicial")" (CERDAN SAN MARTÍN, Rodrigo y FELICES MENDOZA, María Esther, 2011, pág. 74)

"El debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de ley y conformidad con ella en la materia procesal" (GOZAÍNE, pág. 21)

- El debido proceso como derecho al proceso

"En el debido proceso como derecho al proceso, todo sujeto de derecho debe tener la posibilidad de acceder a un proceso o procedimiento con la finalidad de que el órgano componente se pronuncie sobre su pretensión y le brinde una tutela efectiva y diferenciada" (CERDAN SAN MARTÍN, Rodrigo y FELICES MENDOZA, María Esther, 2011, pág. 75)

- El debido proceso como derecho en el proceso

"En el debido proceso como derecho en el proceso, todo sujeto de derecho que participe en un proceso o en un procedimiento cuenta con un conjunto de derechos esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión, incluyendo el respeto por las formas esenciales del procedimiento previamente establecido" (CERDAN SAN MARTÍN, Rodrigo y FELICES MENDOZA, María Esther, 2011, pág. 76)

b) El debido proceso sustancial o material

"El desarrollo del debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, entendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de los



actos de autoridades públicas con las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución". (GOZAÍNE, pág. 21)

"Por otro lado, en su faz sustancial o material (*substantive due process*), el debido proceso (denominado aquí: *debido proceso sustantivo o material*) es además un patrón o módulo de justicia para determinar la axiológica y constitucionalmente válido del actuar del legislador, de la administración y del órgano judicial; es decir, hasta donde puede restringir o afectar, válidamente, la libertad y los derechos individuales, en el ejercicio de sus poderes o atribuciones (...)

Entonces, el debido proceso sustantivo o sustancial exige que todos los actos de poder, incluyente los actos del legislador, de la administración, o de los órganos encargados de solucionar o provenir conflictos sean respetuosos de la vigencia real y equilibrada de la dignidad del ser humano, de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Por lo tanto, exige también que se establezca un adecuado equilibrio entre los derechos de la sociedad y los poderes del Estado (por ejemplo, al legislador sobre aspectos con una importante connotación moral) y que se respeten los principios de justicia que fundamentan un ordenamiento jurídico político" (CERDAN SAN MARTÍN, Rodrigo y FELICES MENDOZA, María Esther, 2011, pág. 77 y 78)

6.5. El debido proceso en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El proceso “es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia”, a lo cual contribuyen “el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”. Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC. 9/87 de 6 de octubre de 1987, párrafo 117.

En ese sentido dichos actos “sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” y son “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC. 9/87 de 6 de octubre de 1987, párrafo 118.

En buena cuenta el debido proceso supone “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales”. Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC. 9/87 de 6 de octubre de 1987, párrafo 27.

Esta aproximación resulta pacífica en la doctrina, y más allá de los diversos énfasis teóricos, resulta claro que estamos frente a un derecho que es, a su vez, un prerrequisito indispensable para la

protección de cualquier otro derecho. Constituye un verdadero límite a la regulación de poder estatal en una sociedad democrática. Cf. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de junio de 2005, párrafo 78.

“La relación con la protección judicial, cuyo acceso está consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, no ha resultado sencilla en el marco de la jurisprudencia y tiene múltiples lecturas. Basta, por ahora, señalar que los Estados tienen la obligación de suministrar recursos judiciales adecuados y efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal consagradas en el artículo 8 de dicho tratado” (SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina, 2012, pág. 25)

3. MARCO CONCEPTUAL

1. MOTIVACIÓN

“Todo pronunciamiento emitido por una autoridad, tanto de carácter administrativo como jurisdiccional e incluso por instancias privadas que toman decisiones que afectan a otros sujetos debe motivarse, lo que implica exponer las razones por las cuales se decide en un determinado sentido, plasmándolas en el pronunciamiento y que de tales argumentos se derive el sentido del fallo.

Ahora bien, la motivación puede ser entendida desde tres perspectivas: a) como justificación de la decisión, b) como actividad, c) como producto" (BASTOS PINTO, 2012)

2. VALORACIÓN

"Determinación del valor de las cosas (v). Justiprecio. Aumento de valor (v) experimentando por un bien. Estimación o fijación de la importancia o trascendencia, sea material o abstracto, de las cosas y de los hechos (depreciación, revaloración)" (CABANELLAS DE TORRES, 2010)

3. PRUEBA

"... la prueba penal, derecho constitucionalmente protegido, funciona dentro del proceso y, por consiguiente, tiene una orientación eminentemente procesal; dado que su realización debe hacerse conforme a las normas que rigen el proceso penal, con total respeto de los principios procesales y de procedimientos, que resultan integrantes del manto que cubre el debido proceso, garantía fundamental inherente a todo proceso penal" (PELAEZ BARDALES, 2013)

"La configuración del caso fiscal importa siempre que se debe haber logrado reunir importante conjunto de datos o información incriminante, que todavía no posee la calidad de prueba; pero que se convertirá en ella, como producto de su actuación en juicio oral, siendo en tal confianza, que el fiscal formula acusación penal" (ANGULO ARANA, 2014, pág. 91)

4. HECHO

"Se refiere a los hechos que dan cuenta del caso a plantear. Permite establecer las distintas circunstancias de tiempo, espacio y modo que concurren en el caso particular" (MORENO HOLMAN, 2012, pág. 42)

"El conocimiento y análisis de lo fáctico se constituyen en el primer eslabón de la construcción técnica de nuestra teoría del caso. Mediante el conocimiento de los hechos podemos entrar a deducir las circunstancias de tiempo, espacio y modo en que se desarrollaron los hechos relacionados con la presunta comisión del delito. Un análisis aproximado a la realidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos permite elaborar una hipótesis acertada sobre nuestra teoría del caso" (SÁNCHEZ LUGO, s/f, pág. 52)

5. MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

"Una vez realizada la actividad probatoria, debe, tal como se ha reiterado, el tribunal apreciar *"según su conciencia"* las pruebas practicadas en el juicio oral.

Lo que viene a consagrar el referido precepto, como es sabido, es el sistema de **libre valoración de la prueba**, el cual no significa libre arbitrio, ni posibilidad de entrada en la mente del tribunal de la "ciencia privada", sino que, antes al contrario, la valoración ha de versar, en primer lugar sobre el **resultado probatorio verificado en el juicio oral** (aunque excepcionalmente, tal y como se ha señalado, pueda el tribunal fundamentar su sentencia en actos de *prueba instructora anticipada o pre constituida*, pero, en modo alguno, sobre meros actos

de investigación); en segundo lugar, tampoco puede basar su sentencia en la prueba obtenida **ilícitamente** obtenida o con violación de las garantías constitucionales; finalmente, la valoración de la prueba se ha de realizar con arreglo a las normas de la *lógica, máximas de experiencia o de la "sana critica"* lo que conlleva la **obligación**, máxime si se trata de la denominada prueba indiciaria **de razonar el resultado probatorio** en la declaración de los hechos probados" (GIMENO SENDRA, 2012)

6. DEBIDO PROCESO

"En mi concepto, las categorías jurídicas procesales primarias, convergentes y referentes ineludibles del Debido Proceso son: Acción, Jurisdicción, Defensa y Derecho a Proceso Justo. La aplicación práctica, eficiente y paritaria de ellas es parte fundamental de las condiciones exigibles para la vigencia real del Debido Proceso. Desde el punto de vista del tipo de Estado, se requiere un Estado Constitucional Democrático y, por tanto, un ordenamiento jurídico estructurado teniendo como principio jurídico de máxima jerarquía el principio de *Constitucionalidad*, principio que es incluyente de los demás principios, también de necesaria aplicación, para la vigencia real del Debido Proceso. Esta afirmación equivale a sostener que el procedimiento se ha de iniciar, desarrollar y culminar en el marco de la Constitución y de los Tratados ratificados sobre Derechos Humanos; en especial, respetando tanto los derechos fundamentales como a los otros bienes jurídicos también titulados constitucionalmente; y, cumpliendo los deberes correlativos. La interpretación y aplicación

constitucional se concatena con los principios y prescripciones de los Tratados y Convenios ratificados por el Perú..." (MIXÁN MÁSS, Cuestiones Epistemológicas y Teoría de la Investigación y de la Prueba, 2009, págs. 207-208)

7. EL DEBIDO PROCESO LEGAL

"El **proceso**, en cualquiera de sus manifestaciones, surge de su propia finalidad dual: cuando la necesidad de la justicia y de paz social; cuando la necesidad de la convivencia humana en sociedad hace indispensable para el desarrollo social el manejo nacional de conflicto de derechos de sus integrantes, se hace vital el proscribir la **autotutela o autodefensa** como forma violenta, arbitraria e individual para la preservación de los derechos conculcados. Es decir, se hace necesario proscribir la justicia privada, la justicia por propia mano, la Ley de Talión" (QUIROGA LEÓN, 2014, pág. 42)

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. METODOLOGÍA

1.1. Diseño de la investigación

Como la investigación es de tipo causal o explicativo por consiguiente, se utilizó el siguiente diseño de investigación.

Dónde:

$$Y = f(x)$$

Y = Variable dependiente = La afectación de la presunción de inocencia.

X = Variable independiente = Carencia de motivación de la prueba de los hechos y la inaplicación de métodos de valoración de prueba.

F = Función = Nexos = influye.

1.2. Tipo de investigación

Por la naturaleza de la información, el tipo de investigación es cuantitativo, debido a que se ha trabajado con técnicas matemáticas y diseños estadísticos; y, el conocimiento obtenido es

objetivo, es más se ha utilizado la vía hipotético-deductiva y como metodología que es válido para todas las ciencias.

1.3. Método de la investigación

Se empleó el método científico como método general y como específicos se aplicó el método estadístico, el de matematización y la inferencial, en razón de que estos métodos nos han permitido lograr el objetivo de la investigación que nos hemos propuesto.

1.4. Población y muestra

La zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno, concretamente la sala de apelaciones de la Provincia de San Román, la misma tiene competencia de las provincias de: San Román, Lampa, Melgar, Azángaro y Carabaya. Ha sido materia de investigación sesenta y tres sentencias; es decir, con carácter censal, todas las sentencias condenatorias expedidas por las salas de apelación de la Provincia de San Román.

1.5. Procedimientos de investigación y contrastación de hipótesis

a) Hipótesis específico uno

H_i = La motivación en la valoración de la prueba en las sentencias condenatorias, afecta el derecho al debido proceso.

H_0 = La motivación en la valoración de la prueba en las sentencias condenatorias, no afecta el derecho al debido proceso.

b) Hipótesis específico dos

H_i = La carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el derecho al debido proceso.

H_0 = La carencia de motivación de los hechos, no es causa que afecta el derecho al debido proceso.

c) Hipótesis específico tres

H_i = La inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso.

H_0 = La inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, no es causa que afecta el derecho al debido proceso.

Dónde:

H_i = Hipótesis de investigación

H_0 = Hipótesis Nula.

1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

1.6.1. Técnicas de recolección de datos

Viene a ser un conjunto de herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y comunicar los datos que sirven para medir los indicadores, las dimensiones, las variables y de esta manera para contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. En la

presente investigación se ha utilizado la técnica de la observación.

1.6.2. Instrumentos de recolección de datos

La investigación científica como proceso sistemático de indagación y búsqueda de nuevos conocimientos acerca de los hechos y fenómenos de la realidad, sólo es posible mediante la aplicación de instrumentos de investigación o medición. El instrumento hace posible recopilar datos que posteriormente será procesado. En la presente investigación se ha aplicado la ficha de observación.

Matriz Instrumental

VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN	TÉCNICA DE RECOJO DE DATOS	INSTRUMENTO
			Nombre y Código
1. Carencia de motivación en la valoración de la prueba.	Primaria. Los datos se obtendrán de los expedientes judiciales.	Observación.	Ficha de Observación, N° 01.
2. La carencia de motivación de los hechos.	Primaria. Los datos se obtendrán de los expedientes judiciales.	Observación.	Ficha de Observación, N° 01.
3. Inaplicación de los métodos de valoración de las pruebas.	Primaria. Los datos se obtendrán de los expedientes judiciales.	Observación.	Ficha de Observación, N° 01.
4. La afectación del derecho al debido proceso	Primaria. Los datos se obtendrán de los expedientes judiciales.	Observación.	Ficha de Observación, N° 01.

1.7. Fuentes de investigación

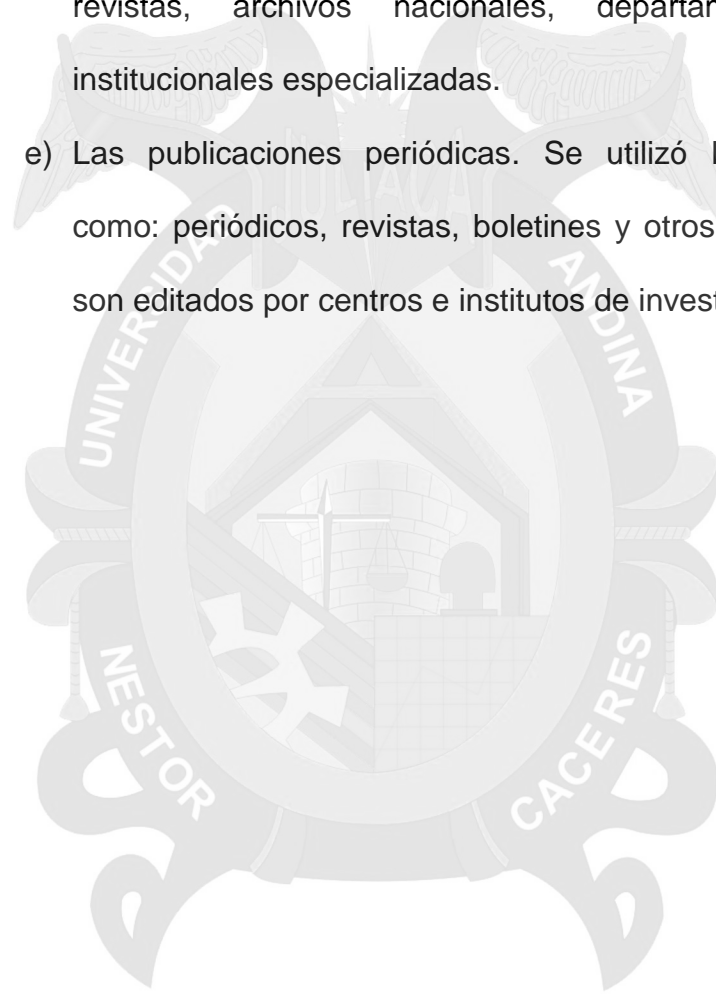
Las fuentes de investigación que se han utilizado en el presente trabajo es:

- Los expedientes judiciales. Para obtener los datos materia de análisis se ha tenido acceso a los expedientes penales tramitados en la sala de apelaciones de la provincia de San Román.
- Los centros de información. Se ha tenido acceso a las bibliotecas de las distintas Universidades del país y del extranjero, internet, los centros de documentación.
- Las fuentes de información bibliográfica. Se utilizó las enciclopedias, diccionarios, el Diccionario de la Real Academia Española, diccionarios de sinónimos antónimos y los manuales de redacción. De igual manera se ha utilizado la fuente



especializada como: tesis universitarias, diálogo con la jurisprudencia, Gaceta Penal y Procesal Penal, Actualidad Jurídica Penal, manuales, tratados, enciclopedias, etc., relacionado al derecho penal y procesal penal.

- d) Los archivos. Se ha tenido acceso a los libros, periódicos, revistas, archivos nacionales, departamentales y de institucionales especializadas.
- e) Las publicaciones periódicas. Se utilizó las publicaciones como: periódicos, revistas, boletines y otros documentos que son editados por centros e institutos de investigación.



CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

1. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

NÚMERO DE CUADRO Nº 01

EN LA SENTENCIA SE ENUNCIA LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN

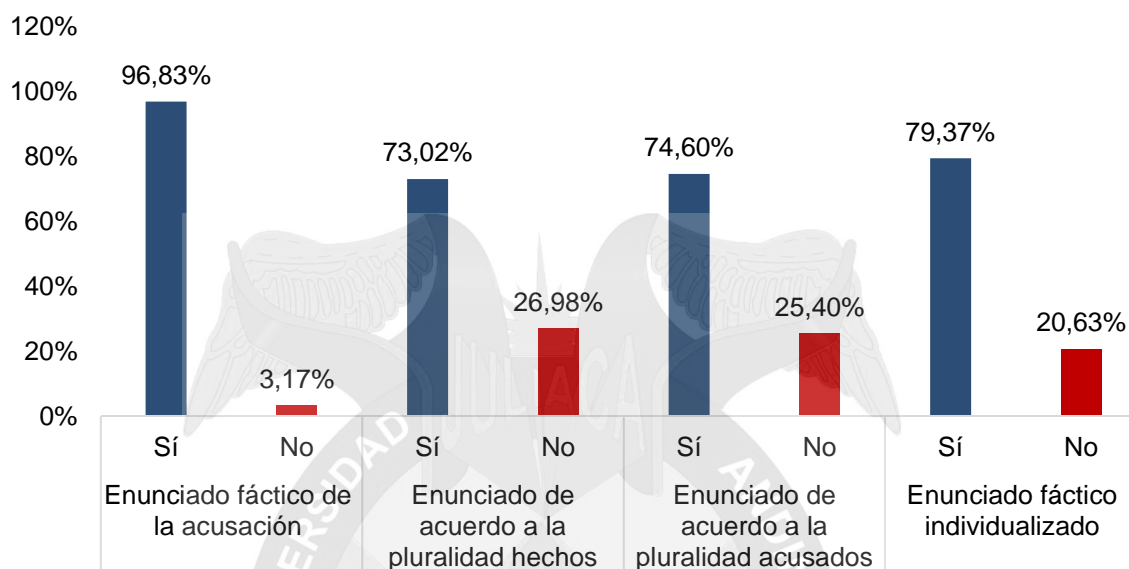
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA ACUSACIÓN										
Nº	Sala penal de apelación	Año	Enunciado Factivo de la acusación		Enunciado de acuerdo a la pluralidad hechos		Enunciado de acuerdo a la pluralidad acusados		Enunciado fáctico individualizado	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	32	2	24	10	25	09	28	07
2	San Román	2014	29	0	22	7	22	7	22	07
Total			61	2	46	17	47	16	50	14

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 -2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 01

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA ACUSACIÓN



Fuente: Cuadro número 01

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 01 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "En la sentencia se enuncia los hechos y circunstancias objeto de la acusación". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del cuadro y gráfico número 01 se aprecia: a) en relación a los enunciados fácticos de la parte acusadora: se ha considerado en el 96.83%, no se ha consignado en el 3.17%, b) los enunciados están detallados tomando en cuenta la pluralidad de hechos punibles: en el 73.61% se ha consignado, y 26.98% no se ha tomado en cuenta la pluralidad de los hechos, c) en lo referente si se ha detallado teniendo en cuenta la pluralidad de acusados: 74.61% se ha detallado, 25.39% no se ha detallado, d) si los enunciados están detallados teniendo en cuenta a un acusado: 79.37% se han detallado, en el 20.63% no están detallados.

3. INTERPRETACIÓN

Es una obligación del Representante del Ministerio Público, el de precisar los cargos que se le imputan en contra del procesado o



procesados; en doctrina y jurisprudencia se conoce con el nombre de imputación necesaria.

Dicha imputación debe contener también en la sentencia; esto es, los hechos y las circunstancias teniendo en cuenta la pluralidad de hechos, la pluralidad de acusados; o en todo caso si se procesa a un solo imputado de igual manera se debe precisar los hechos y las circunstancias.



NÚMERO DE CUADRO Nº 02

EN LA SENTENCIA CONTIENE LA ENUNCIACIÓN DE LAS HIPÓTESIS
ALTERNATIVAS A LA HIPÓTESIS ACUSATORIA

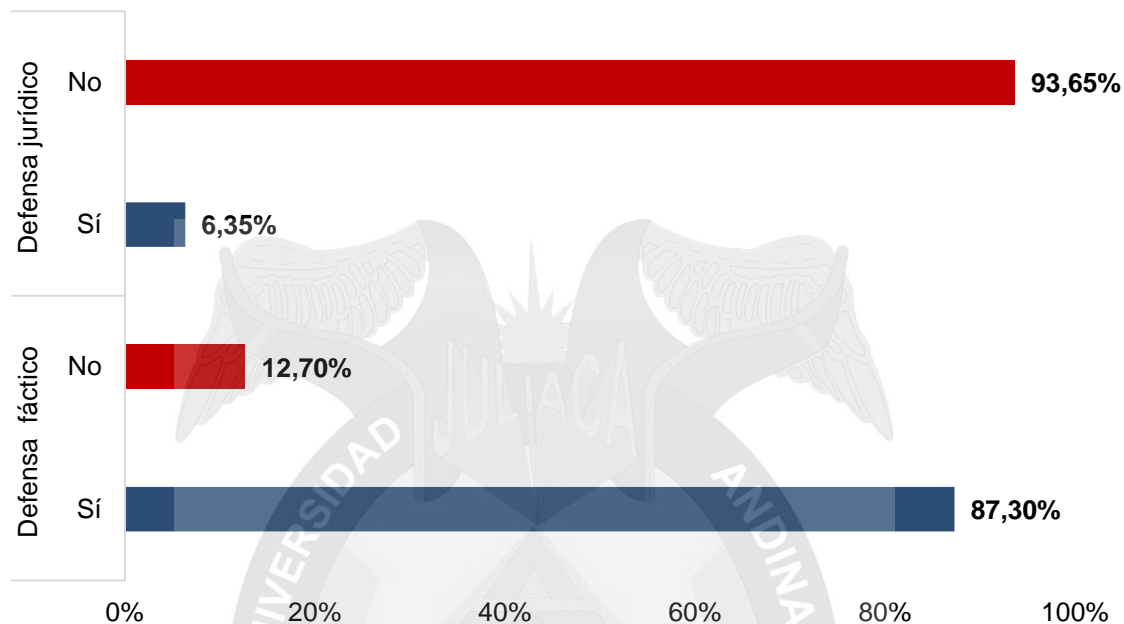
HIPÓTESIS ALTERNATIVA A LA ACUSACIÓN						
Nº	Sala penal de apelación	Año	Defensa fáctico		Defensa jurídico	
			SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	26	08	03	39
2	San Román	2014	29	00	01	28
Total			55	08	04	59

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 02

HIPÓTESIS ALTERNATIVA DE ACUSACIÓN



Fuente: Cuadro número 02

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 02 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "En las sentencias contienen la enumeración de las hipótesis alternativas a la hipótesis acusatoria". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del cuadro y gráfico número dos se observa: a) en relación a la pretensión de la defensa en lo fáctico: 87.30% si se hace referencia, el 12.70% no hace referencia, b) en relación a la pretensión de la defensa en lo jurídico; 93.65% no hace referencia, 6.35 si hace referencia.

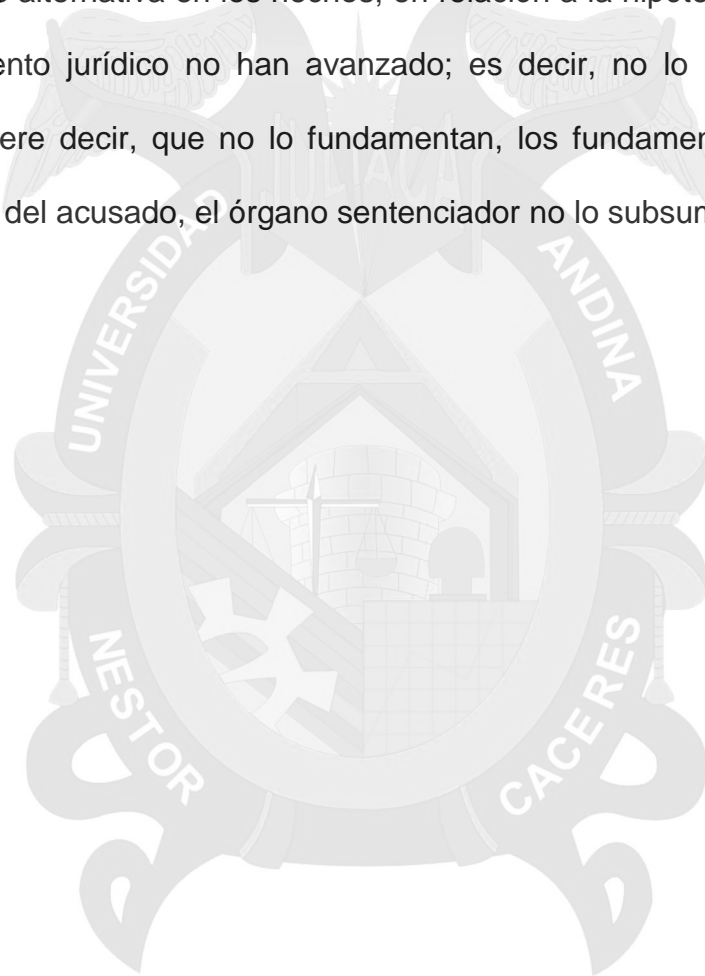
3. INTERPRETACIÓN

Para que la decisión sea completa, la explicación o versión acerca de los hechos que formulan las otras partes es de suma importancia. La misma puede tratarse tanto de una alegación defensiva como de una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, o simplemente de una versión distinta de la pretensión acusatoria. La misma se desprende del artículo 394 Inciso 2 del Código Procesal Penal que señala: "La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las



pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del acusado", que como se sabe engloba tanto la defensa fáctica, como la defensa en lo jurídico.

Los magistrados del Poder Judicial, quiénes han expedido las sentencias condenatorias, sólo han avanzado en la motivación de la hipótesis alternativa en los hechos; en relación a la hipótesis alternativa del fundamento jurídico no han avanzado; es decir, no lo han desarrollado; esto quiere decir, que no lo fundamentan, los fundamentos de hecho de defensa del acusado, el órgano sentenciador no lo subsume.





NÚMERO DE CUADRO Nº 03

MOTIVACIÓN DEL JUICIO HISTÓRICO ES CLARA

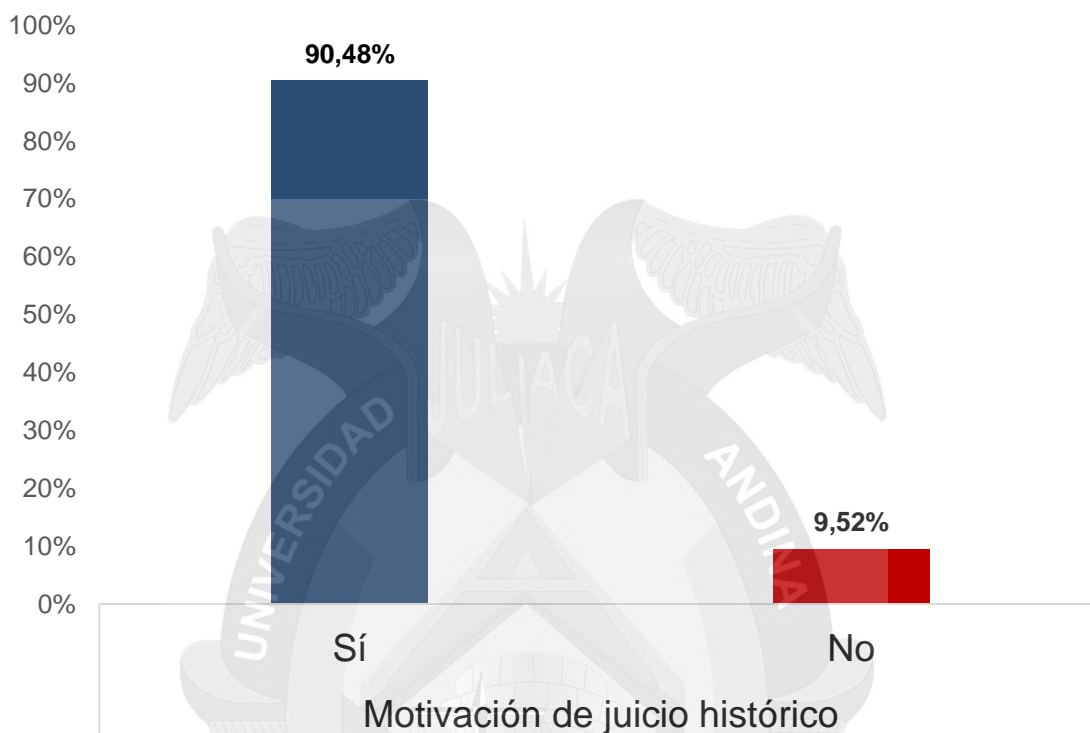
MOTIVACIÓN DEL JUICIO HISTÓRICO					
Nº	Sala penal de apelación	AÑO	SI	NO	TOTAL
1	San Román	2013	30	04	34
2	San Román	2014	27	02	29
Total			57	06	63

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación

GRÁFICO DEL CUADRO N°03

MOTIVACIÓN DEL JUICIO HISTÓRICO ES CLARA



Fuente: Cuadro número 03

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 03 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "La motivación del juicio histórico". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico número 03 se aprecia: 90.48% la motivación del juicio histórico es clara; en el 9.52% la motivación del juicio histórico no es clara.

3. INTERPRETACIÓN

Esto significa, que los magistrados vienen fundamentando en forma correcta la motivación del juicio histórico en las sentencias; significa que los magistrados expresan en un lenguaje claro, preciso, comprensible para cualquier ciudadano. No sólo están observando las reglas del lenguaje y estilo, sino también están mostrando una coherencia narrativa y que se encuentran comprendidos todos los elementos del tema probandum.

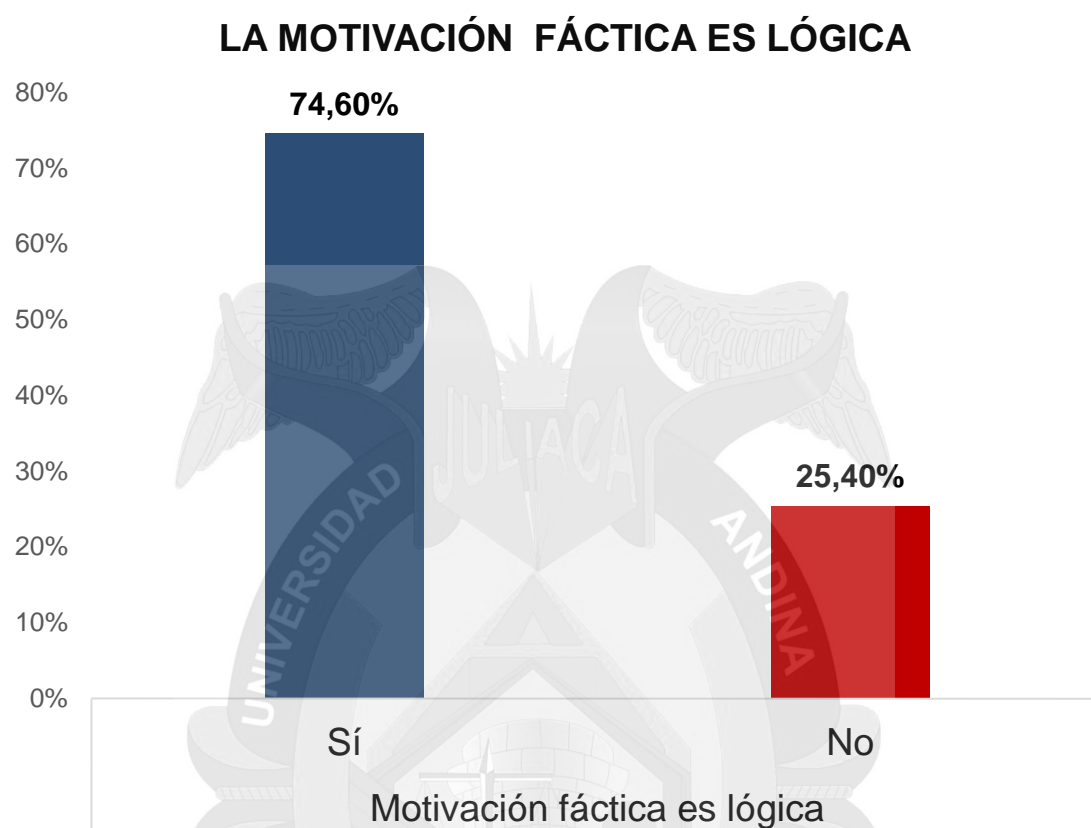
NÚMERO DE CUADRO Nº 04
LA MOTIVACIÓN FÁCTICA ES LÓGICA

MOTIVACIÓN FÁCTICA ES LÓGICA					
Nº	Sala penal de apelación	AÑO	SI	NO	TOTAL
1	San Román	2013	25	09	34
2	San Román	2014	22	07	29
Total			47	16	63

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 04



Fuente: Cuadro número 04

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 04 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "La motivación fáctica es lógica". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico número 04 se aprecia: 74.60% la motivación fáctica es lógica, en el 25.40% la motivación fáctica no tiene lógica.

3. INTERPRETACIÓN

Desde el punto de vista de la argumentación fáctica lógica, los magistrados vienen argumentando en forma correcta; esto es, está libre de contradicciones, de vacíos, saltos lógicos, falta de alguna de las premisas del razonamiento probatorio, la argumentación respeta las leyes del razonamiento correcto, carece en su gran mayoría de falacias o contradicciones.



NÚMERO DE CUADRO Nº 05

LA MOTIVACIÓN SOBRE LOS HECHOS ES COMPLETA

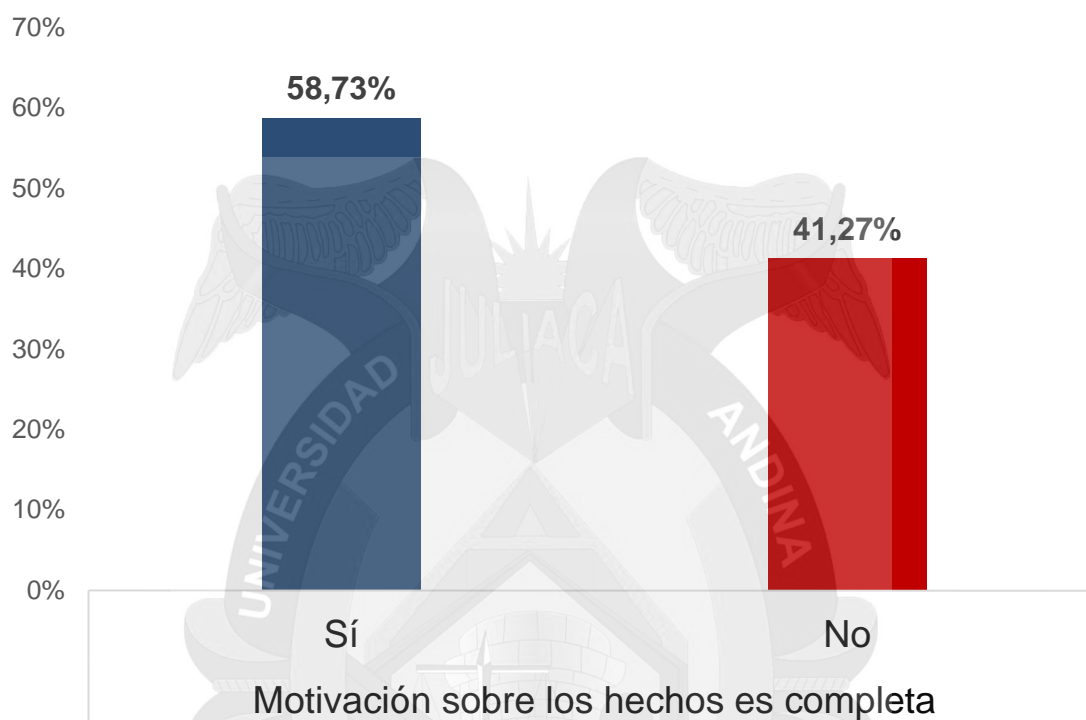
MOTIVACIÓN DEL JUICIO HISTÓRICO					
Nº	Sala penal de apelación	AÑO	SI	NO	TOTAL
1	San Román	2013	18	16	34
2	San Román	2014	19	10	29
Total			37	26	63

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 05

LA MOTIVACIÓN SOBRE LOS HECHOS ES COMPLETA



Fuente: Cuadro número 05

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 05 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "La motivación sobre los hechos es completa". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 05 se colige: 58.73% la motivación sobre los hechos es completa; 41.27% la motivación sobre los hechos no es completa.

3. INTERPRETACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 394 Inciso 3 del Código Procesal Penal: "La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique". Esto significa, en las sentencias no sólo debe existir pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas, sino también a los que se declaran improbados. Esta regla es consecuencia del llamado de completud.



El deber de motivación fáctica debe extenderse a la totalidad de las pruebas practicadas en el proceso, tanto las de cargo como las de descargo, siempre y cuando no sean superfluas, y no sólo de aquellas que avalan la hipótesis fáctica de la sentencia. En las palabras de IGARTUA SALAVERRIA, hay que dar cuenta razonada de todas las pruebas; en otras palabras las exigencias de fundamentación requieren del tribunal también la justificación precisa y detallada acerca de porqué se desechó la prueba de la contraparte. (IGARTUA SALAVERRIA, 1994, pág. 10)

En definitiva el juez debe valorar la totalidad del cuadro probatorio que se encuentra a su disposición sin seccionarlo y/o fraccionarlo, ni omitir la valoración de la prueba aportada por la defensa o por la acusación o acusaciones. Valoración integral de todas las pruebas que, además, forma parte del derecho a la prueba. El fraccionamiento del cuadro probatorio por parte del juez, omitiendo incluso su existencia, priva de racionalidad al proceso de valoración probatoria y hace que la decisión judicial sea arbitraria. En otras palabras, una selección de prueba a efectos de motivar la decisión previamente tomada, silenciando y/o prescindiendo de todas las pruebas relevantes practicadas, vicia la nulidad la resolución que se dicta.



NÚMERO DE CUADRO Nº 06
LAS FUENTES DE PRUEBAS VALORADAS

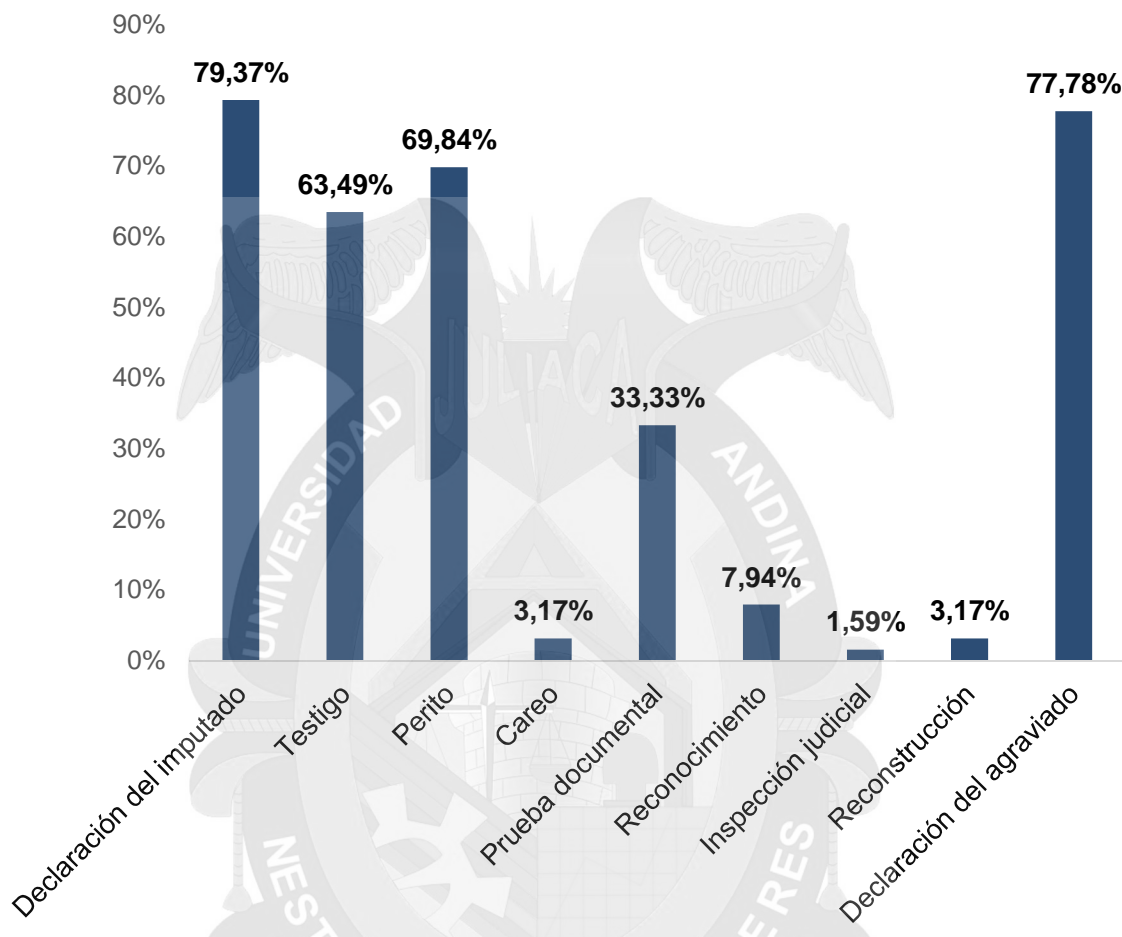
FUENTES DE PRUEBAS VALORADAS											
Nº	Sala Penal de Apelación	Año	Declaración del Imputado	Testimonio	Pericia	Confesión	Prueba Documental	Reconocimiento	Inspección Judicial	Reconstrucción	Declaración del Agravado
1	San Román	2013	31	25	27	01	18	05	01	02	30
2	San Román	2014	19	15	17	01	03	00	00	00	19
Total			50	40	44	2	21	05	01	02	49

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 06

FUENTES DE LAS PRUEBAS VALORADAS



Fuente: Cuadro número 06

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 06 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Las fuentes de pruebas valoradas". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 06 se colige: 79.37% se ha valorado, la declaración del imputado; 77.78% se ha valorado la declaración del agraviado; 69.84% se ha valorado la pericia; 63.49% se ha valorado las declaraciones testimoniales; 33.33% se ha meritado la prueba documental; 7.94 se ha valorado el reconocimiento; 3.17% es el careo; 3.17% es la reconstrucción; 1.59% se ha valorado la inspección judicial.

3. INTERPRETACIÓN

En la gran mayoría las sentencias condenatorias se han basado en la declaración del imputado y del agraviado, las mismas son corroboradas por otros medios probatorios como: el testimonio, la prueba documental, pericia, reconocimientos entre otros.

NÚMERO DE CUADRO Nº 07

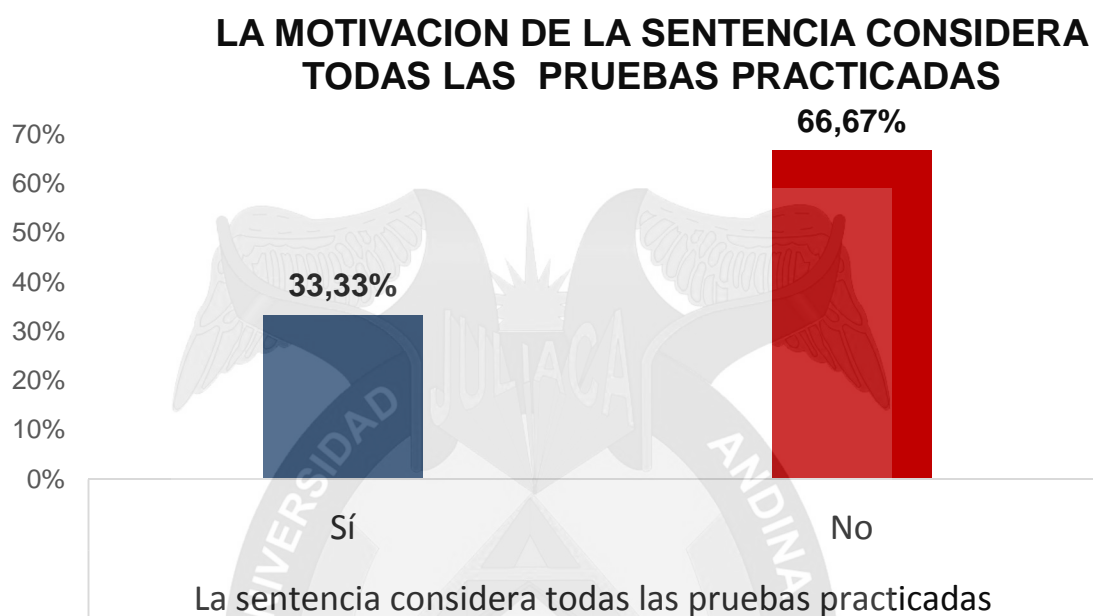
LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA CONSIDERA TODAS LAS PRUEBAS
PRACTICADAS

SENTENCIA CONSIDERA TODAS LAS PRUEBAS PRACTICADAS					
Nº	Sala penal de apelación	AÑO	SI	NO	TOTAL
1	San Román	2013	09	20	29
2	San Román	2014	12	22	34
Total			21	42	63

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 07



Fuente: Cuadro número 07

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 07 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "La motivación de la sentencia considera todas las pruebas practicadas". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 07 se aprecia: 66.67% en las sentencias condenatorias se ha considerado todas las pruebas practicadas; en un 33.33% de las sentencias investigadas no han considerado todas las pruebas practicadas.

3. INTERPRETACIÓN

De las sentencias analizadas, los magistrados en su gran porcentaje sólo valoran las pruebas que le son útiles para expedir la sentencia condenatoria; no lo valoran todas las pruebas actuadas en el plenario; con ello se afecta el derecho al debido proceso, fundamentalmente el derecho a la valoración de todas las pruebas ofrecidas, actuadas.

NÚMERO DE CUADRO: 08

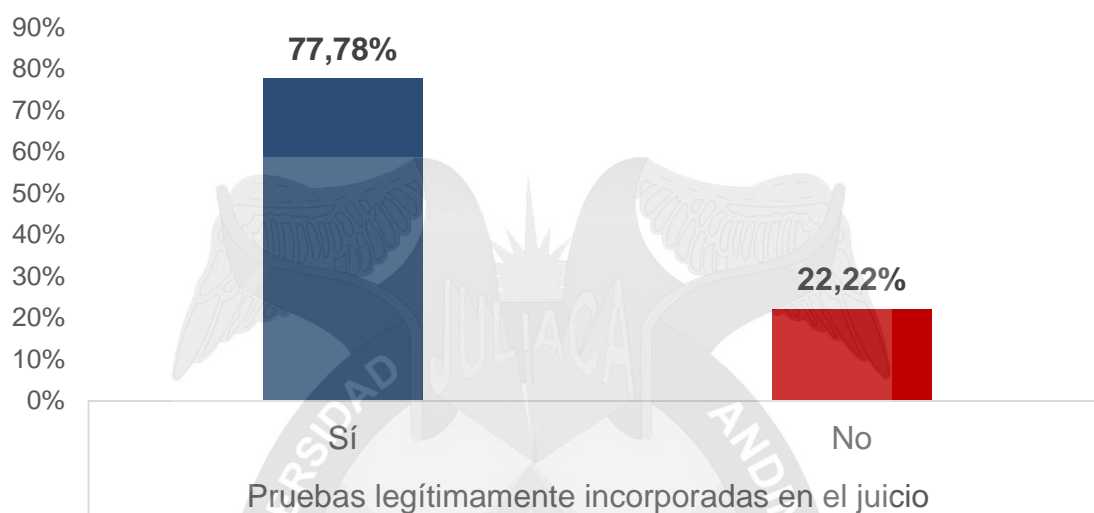
EL JUEZ JUSTIFICA LA MOTIVACIÓN FÁCTICA EN LAS PRUEBAS
LEGÍTIMAMENTE INCORPORADAS EN EL JUICIO

PRUEBAS LEGÍTIMAMENTE INCORPORADAS EN EL JUICIO					
Nº	Sala penal de apelaciones	AÑO	SI	NO	TOTAL
1	San Román	2013	30	04	34
2	San Román	2014	19	10	29
Total			49	14	63

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 08

PRUEBAS LEGÍTIMAMENTE INCORPORADAS EN
EL JUICIO

Fuente: Cuadro número 08

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 08 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "El Juez justifica la motivación fáctica en las pruebas legítimamente incorporadas en el juicio". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

En el gráfico del cuadro número 08 se aprecia: 77.78% se justifica las pruebas legítimamente incorporadas en el plenario; 22.22% de las sentencias analizadas no justifican las pruebas legítimamente incorporadas en el juicio oral.

3. INTERPRETACIÓN

El derecho a la prueba no es un derecho constitucional expresamente establecido en la Constitución de 1993, pero se reconoce su raigambre Constitucional, así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional en la sentencia normativa de fecha 3 de enero del año 2003, en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, caso: Marcelino Tineo Silva y cinco mil ciudadanos, al precisar en los fundamentos 148 al 150 del falle citado: El derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido



implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, Inciso 3 de la Constitución Política del Perú.

En el fundamento 149 de la sentencia citada, el supremo interprete de la constitución señala: "Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, que orientan que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Éstos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es derivados de la propia naturaleza del derecho a la prueba".

La motivación de la prueba debe basarse en pruebas legítimas; es decir, debe sustentarse en la ponderación de la prueba cuya formación, producción y actuación es respetuosa de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales básicas, como por ejemplo: defensa, contradicción, oralidad, intermediación, etc. Debe haber una validez intrínseca de las pruebas para que ellas sean valoradas en la resolución final.

Si hay una valoración de una prueba inconstitucional o prohibida se produce un grave vicio en la motivación de las resoluciones judiciales. La prueba ilícita no se debe valorar, sino excluir del acervo probatorio, ya que el juez no puede utilizar en la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el plenario, el artículo 139 Inciso 1 de la Constitución lo establece; de tal manera que "Todo medio de prueba será



valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo", conforme lo precisa el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Una resolución judicial que se construya sobre la prueba inconstitucional hace que su argumentación sea y tenga una base ilegítima.

El Juez al momento de dictar una sentencia debe ser respetuoso de los principios que inspira un Estado Constitucional, debe someterse y focalizar su atención exclusivamente en la valoración de la prueba válida.

En las sentencias materia de investigación, sólo en el 77.78% se hace referencia sobre la legitimidad de la prueba; es preocupante que en un 22.22% no se hace referencia sobre la legitimidad o ilegitimidad de la prueba ofrecida, actuada y valorada; considero que con ello se afecta gravemente el derecho al debido proceso.

NÚMERO DEL CUADRO 09

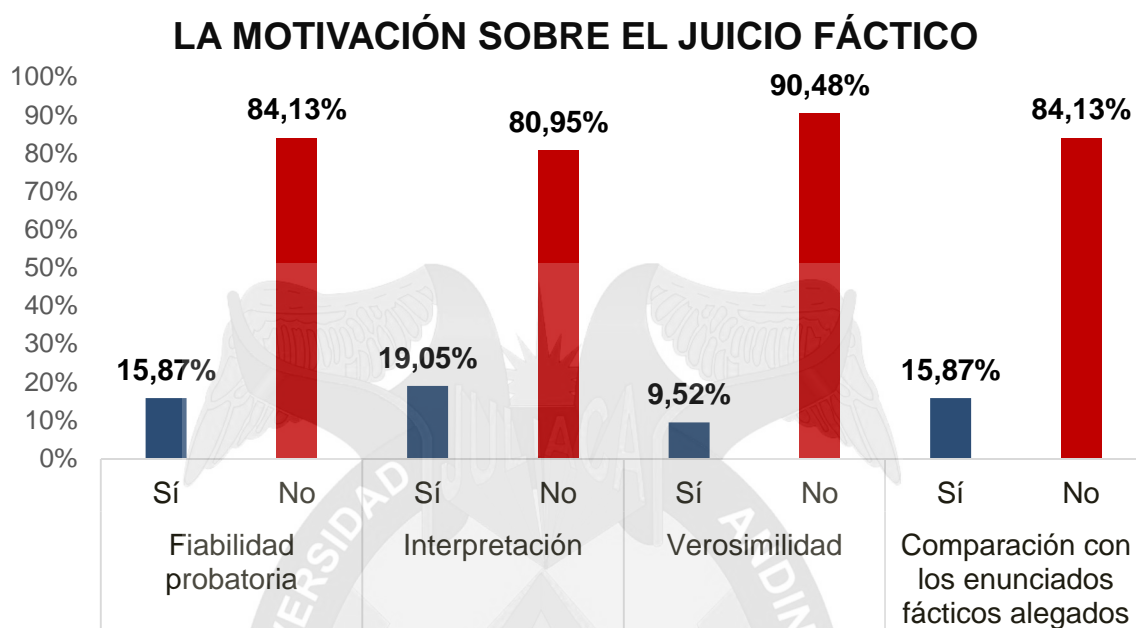
LA MOTIVACIÓN SOBRE EL JUICIO FÁCTICO CONTIENE LOS
RESULTADOS DEL EXAMEN INDIVIDUAL DE LAS PRUEBAS

LA MOTIVACIÓN SOBRE EL JUICIO FÁCTICO										
Nº	Sala penal de apelación	Año	Fiabilidad probatoria		Interpretación		Verosimilitud		Comparación con los enunciados fácticos alegados	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	09	25	12	22	06	28	10	24
2	San Román	2014	01	28	00	29	00	29	00	29
Total			10	53	12	51	06	57	10	53

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 09



Fuente: Cuadro número 09

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 09 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "La motivación sobre el juicio histórico o fáctico contiene los resultados del examen conjunto de las pruebas". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 09 se aprecia: a) en relación a la fiabilidad probatoria, las sentencias estudiadas en el 84.13% no hace referencia, sólo en el 15.87 si hace referencia; b) en lo referente a interpretación, las declaraciones testimoniales en 80.95% no son interpretadas, en el 19.05% si son interpretadas las declaraciones testimoniales; c) sobre la verosimilitud, 90.48% no se analiza, ni se hace referencia sobre la verosimilitud, el 9.52% si se hace referencia; d) sobre la comparación con los enunciados fácticos alegados, el 84.13% no se compara, el 15.87% si se hace comparación.

INTERPRETACIÓN

En la emisión de una sentencia, en forma obligatoria se tiene que argumentar sobre el examen individual de las pruebas; dicha exigencia esta previsto en el artículo 383 Inciso 2 del Código Procesal Penal que



señala: "El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos".

Nuestra norma adjetiva en materia penal, establece el procedimiento que se tiene que seguir para valorar las pruebas; primero se tiene que valorar cada una de las pruebas en forma individual, luego se tiene que merituar en forma conjunta. De las sentencias analizadas se pudo apreciar que no se respeta el procedimiento para valorar las pruebas, sólo se valora las pruebas que lo genera convicción al Juez, en forma conjunta; consideramos con ello se afecta el derecho al debido proceso.

NÚMERO DEL CUADRO: 10

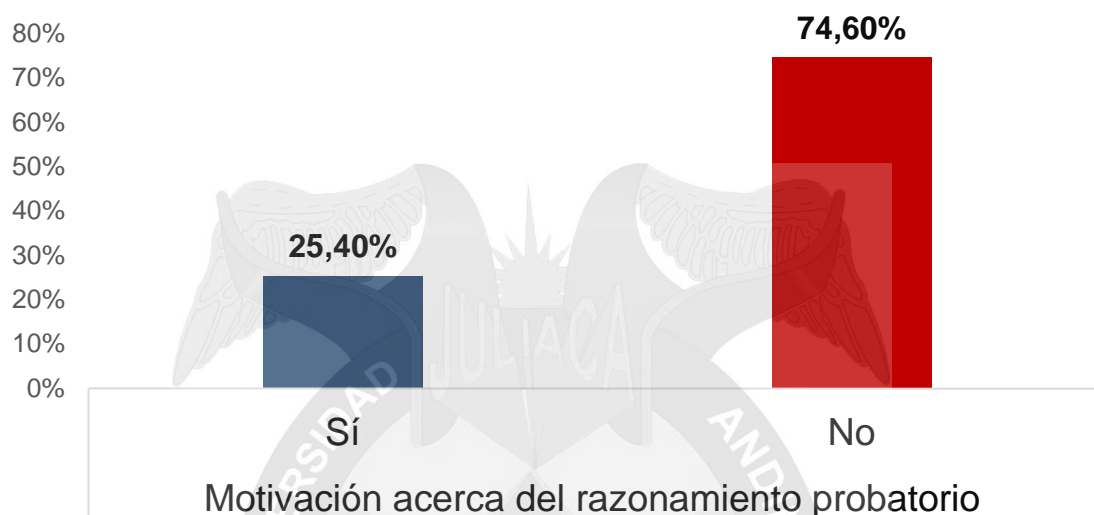
MOTIVACIÓN ACERCA DEL RAZONAMIENTO PROBATORIO

MOTIVACIÓN ACERCA DEL RAZONAMIENTO PROBATORIO					
Nº	Sala Penal de Apelaciones	Año	SI	NO	Total
1	San Román	2013	11	23	34
2	San Román	2014	05	24	29
Total			16	47	63

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 10

MOTIVACIÓN ACERCA DEL RAZONAMIENTO
PROBATORIO

Fuente: Cuadro número 10

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 10 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "En la sentencia se enuncia los hechos y circunstancias objeto de la acusación". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 10 se colige: El 74.60% los magistrados no motivan acerca del razonamiento probatorio, sólo en el 25.40% motivan sobre el razonamiento probatorio.

3. INTERPRETACIÓN

El razonamiento probatorio significa explicar la inferencia probatoria, una de cuyas premisas esenciales está dada por la regla o máxima de experiencia. Es decir, no basta con enunciar lo que dijo tal o cual testigo o perito, (condición necesaria) sino que es indispensable que se enuncie la regla de experiencia conforme a la cual se le otorga o no credibilidad (condición suficiente).

NÚMERO DEL CUADRO: 11

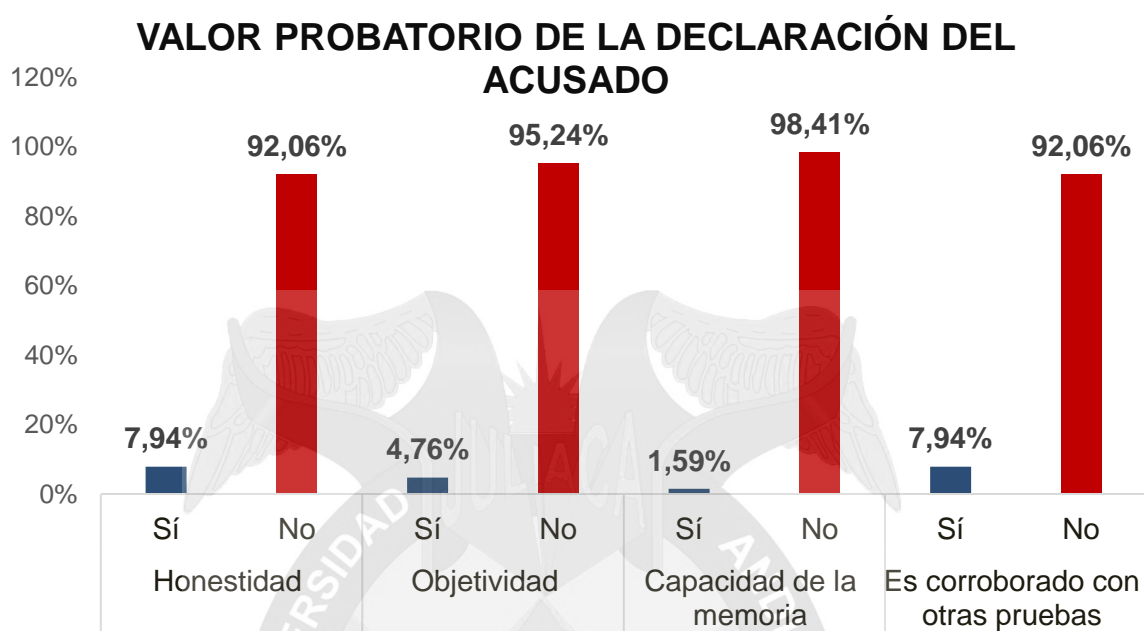
ANALIZA EL VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO

VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO										
Nº	Sala penal de apelación	Año	Honestidad		Objetividad		Capacidad de la memoria		Es corroborado con otras pruebas	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	05	29	03	31	01	33	05	29
2	San Román	2014	00	29	00	29	00	29	00	29
Total			05	58	03	60	01	62	05	58

FUENTE.- Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN: Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 11



Fuente: Cuadro número 11

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 11 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Analiza el valor probatorio de la declaración del acusado". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 11 se aprecia: a) analiza el valor probatorio de la declaración del acusado en relación a la honestidad, el 92.06% no analiza, sólo analiza en el 7.93%; b) analiza la objetividad, el 95.24% no lo analiza, sólo analiza en el 4.76.%; c) analiza la capacidad de memoria del acusado, en el 98.41% no analiza, 1.59% si analiza, d) si la declaración del acusado es corroborado con otras pruebas, en el 92.06% no lo corrobora, si corrobora en el 7.94%.

3. INTERPRETACIÓN

Si bien es cierto, el acusado tiene la libertad de declarar o de guardar silencio; cuando decide declarar, la misma tiene que ser analizada, examinada en forma analítica crítica, para luego valorar en forma conjunta.

NÚMERO DEL CUADRO 12

ANALIZA EL VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIAL

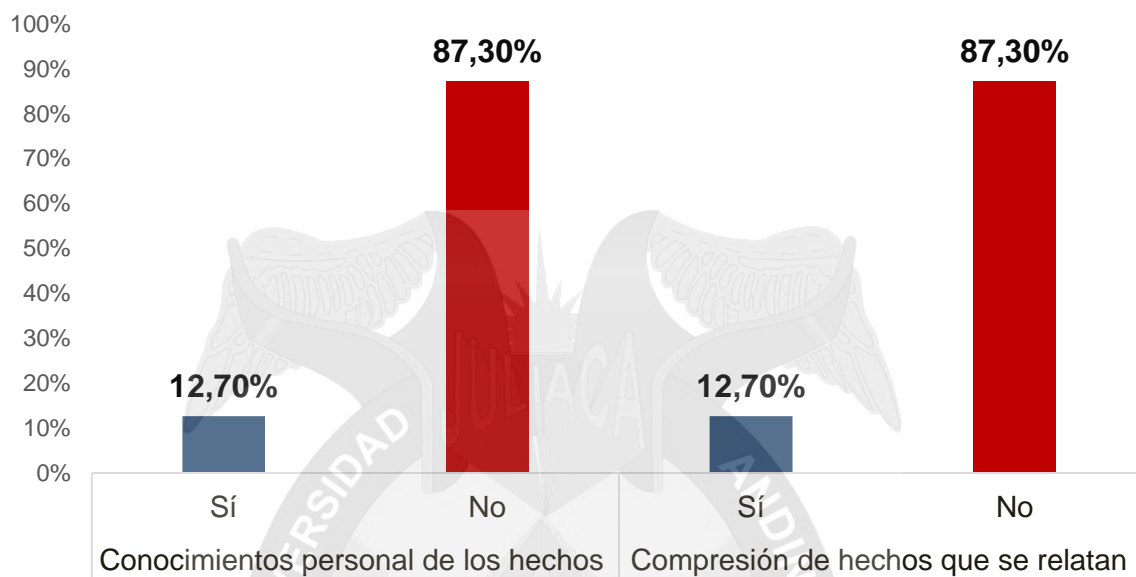
VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIAL						
Nº	Sala penal de apelación	Año	Conocimientos personal de los hechos		Compresión de hechos que se relatan	
			SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	04	29	04	29
2	San Román	2014	04	26	04	26
Total			08	55	08	55

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 12

VALOR PROBATORIO DEL TESTIGO



Fuente: Cuadro Numero 12

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 12 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Analiza el valor probatorio del testimonio, como la competencia del testigo". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Gráfico del cuadro número 12 se aprecia: analiza el valor probatorio del testimonio, en relación al conocimiento personal de los hechos, no analiza en el 87.30%, si analiza en el 12.70%; en lo referente a la comprensión de los hechos que relata el testigo, no analiza en el 87.30%, si analiza en el 12.70%.

3. INTERPRETACIÓN

En los procesos penales se ofrecen la declaración de los testigos, en la sentencia se debe analizar si estos medios probatorios ofrecidos, actuados cumplen con los requisitos de admisibilidad y credibilidad necesarios para dar información confiable sobre el hecho o hechos que se pretende probar.



De acuerdo a lo anterior, se debe efectuar un análisis sobre la competencia y credibilidad de los testigos. A efectos de analizar la competencia se deben tomar en cuenta los siguientes elementos:

- a) La observancia directa de los hechos por parte del testigo; y,
- b) La comprensión de esos hechos por parte del testigo.

En más del 87.30% de los casos, los magistrados no analizan al momento de valorar las declaraciones testimoniales, si conocen los hechos en forma personal, si han comprendido los hechos que han declarado. Los magistrados en la sentencia solamente se limitan en citar y transcribir las declaraciones de los testigos, no lo someten a un análisis crítico, lógico, no lo cuestiona las declaraciones testimoniales; con esa forma de proceder se afecta en forma negativa, el derecho al debido proceso que tiene el procesado.

NÚMERO DEL CUADRO 13

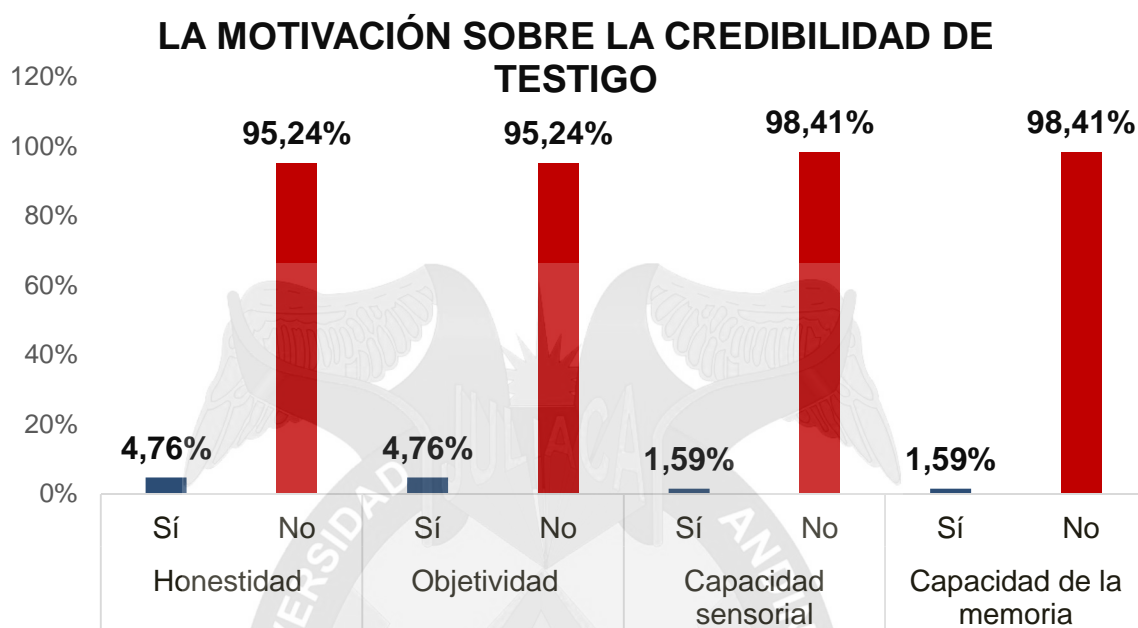
ANALIZA LA PRUEBA TESTIMONIAL COMO LA CREDIBILIDAD DEL
TESTIGO

LA MOTIVACIÓN SOBRE LA CREDIBILIDAD DE TESTIGO										
Nº	Sala penal de apelación	Año	Honestidad		objetividad		Capacidad sensorial		Capacidad de la memoria	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	02	30	03	30	01	32	01	32
2	San Román	2014	01	30	00	30	00	30	00	30
Total			03	60	03	60	01	62	01	62

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 13



Fuente: Cuadro Numero 13

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 13 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Analiza la prueba testimonial como la credibilidad del testigo". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

En el gráfico del cuadro número 13 se aprecia: a) en relación a la honestidad, el 95.24% no analiza, en el 4.76% si analiza; b) en lo referente a la objetividad, en las sentencias no se analizan en el 95.24%, sólo se analiza en el 4.76%; c) capacidad sensorial, no se analiza en el 98.41% sólo se analiza la capacidad sensorial en el 1.5.9%; d) capacidad de la memoria del testigo; no se analiza en el 98.41%, sólo se analiza la capacidad de la memoria del testigo en el 1.59%.

3. INTERPRETACIÓN

Al expedir una sentencia, si se trata de condenatoria con mayor razón, se debe analizar la credibilidad del testigo, para cuyo efecto se debe tener en consideración los siguientes cuatro elementos:

- a) La honestidad del testigo, que nos permite conocer qué tan confiable es esta persona.



- b) La objetividad, para lo cual se debe tomar en cuenta los prejuicios, el sesgo, los intereses y motivos del testigo para declarar en uno u otro sentido.
- c) La capacidad sensorial, tomando en cuenta que no todas las personas poseemos las mismas capacidades sensoriales; y,
- d) La memoria, puesto que existen determinados hechos que por su naturaleza o por la condición del testigo, quedan grabados en su memoria con mayor o menor facilidad. (HIGA SILVA, César y YAGI KUME, Miguel, 2013, pág. 194)

En las sentencias condenatorias, materia de investigación se ha constatado, los señores magistrados no lo someten a un análisis crítico, lógico sobre la credibilidad del testigo; solamente se limitan en mencionar el nombre del testigo, transcribir en forma textual lo que ha declarado el testigo, y el folio donde se encuentra dicha declaración testimonial, prácticamente argumentan en forma mecánica, literal; con ello evidentemente se afecta el derecho al debido proceso.

NÚMERO DEL CUADRO 14

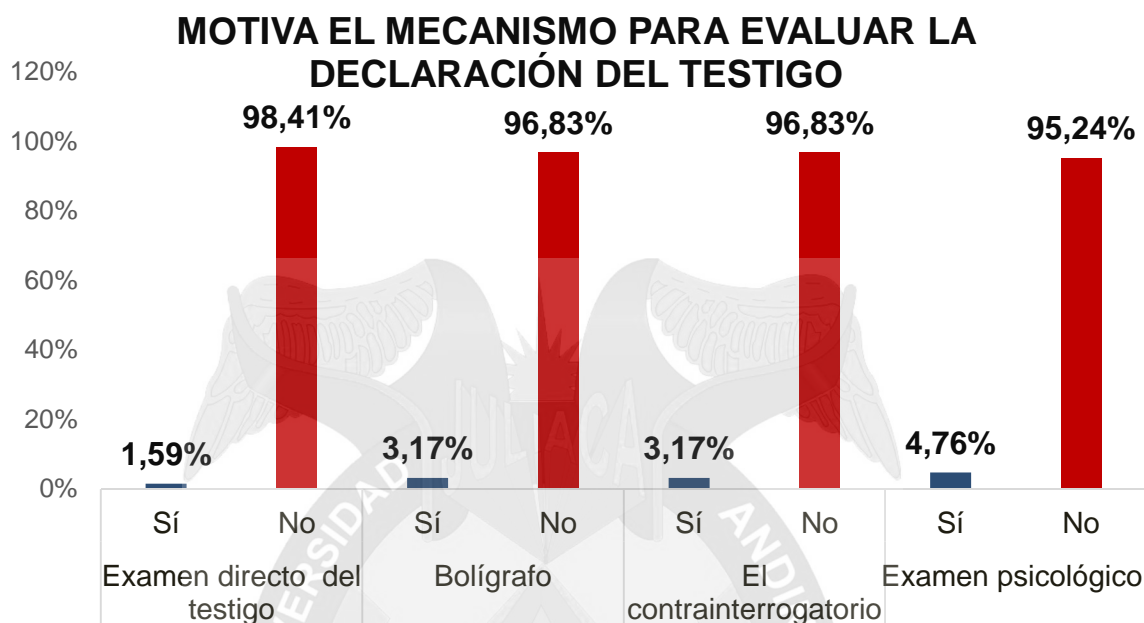
ANALIZA EL MECANISMO PARA EVALUAR LA DECLARACIÓN DEL
TESTIGO

MOTIVA PARA EVALUAR LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO										
Nº	Sala penal de apelación	Año	Examen directo del testigo		El bolígrafo		El contrainterrogatorio		Examen psicológico	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	01	32	01	32	01	32	01	32
2	San Román	2014	00	30	01	29	01	29	02	28
Total			01	62	02	61	02	61	03	60

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborada por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 14



Fuente: Cuadro Numero 14

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 14 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Analiza el mecanismo para evaluar la declaración del testigo". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Gráfico del cuadro número 14 se aprecia: los magistrados al expedir sentencia deben analizar el mecanismo para evaluar la declaración del testigo: a) examen directo del testigo, los magistrados no lo analizan en el 98.41%, si lo analizan en el 1.59%; b) el bolígrafo, en la sentencia no lo analizan en el 98.83%, si lo analizan en el 3.17%; c) el contrainterrogatorio; no lo tiene en consideración en el 96.83%, si lo analiza en el 3.17%, y d) examen psicológico, no se hace mención en el 95.24%, sólo se hace mención a dicha evaluación en el 4.76%.

3. INTERPRETACIÓN

Para dar la credibilidad, confiabilidad de la declaración testimonial en un proceso penal, el testigo ha sido examinado en forma directa por la parte que ofrece; por la contraparte dicho testigo ha sido sometido a un



contrainterrogatorio, de igual manera ha podido ser sometido a la prueba de bolígrafo o en todo caso a un examen psicológico.

"El propósito de un juicio es descubrir la verdad. El contraexamen es la mejor herramienta para descubrir la verdad, entonces, el propósito de un juicio es el contraexamen" (VIAL CAMPOS, 2008, pág. 13), "Interrogatorio es la acción externa que ejecuta una persona (examinador) frente a otra (examinado), con la finalidad de obtener de este una respuesta sobre determinado punto en concreto, por medio de una pregunta idónea. Esta técnica busca siempre recibir información válida y eficaz para los intereses del examinador" (QUIROZ SALAZAR, 2015, pág. 93), "Las repreguntas arrancan la verdad en innumerables formas, obligando al testigo a abandonar las posiciones preparadas y a improvisar en circunstancias de apremio, induciéndolo a desarrollar sus mentiras al revelar éstas y al dejar al declarante en el aire, de modo tal que la verdad es su única alternativa disponible" (DECASTRO GONZÁLEZ, 2009, pág. 7).

La credibilidad de la declaración del testigo no sólo se puede someter al examen directo y el contrainterrogatorio; también se puede someter al examen de bolígrafo y psicológico; en las sentencias analizadas los magistrados no hacen mención a dichos exámenes.

NÚMERO DEL CUADRO 15
ANALIZA EL VALOR PROBATORIO DE LA PERICIA COMO LA CUALIFICACIÓN ADECUADA DEL PERITO

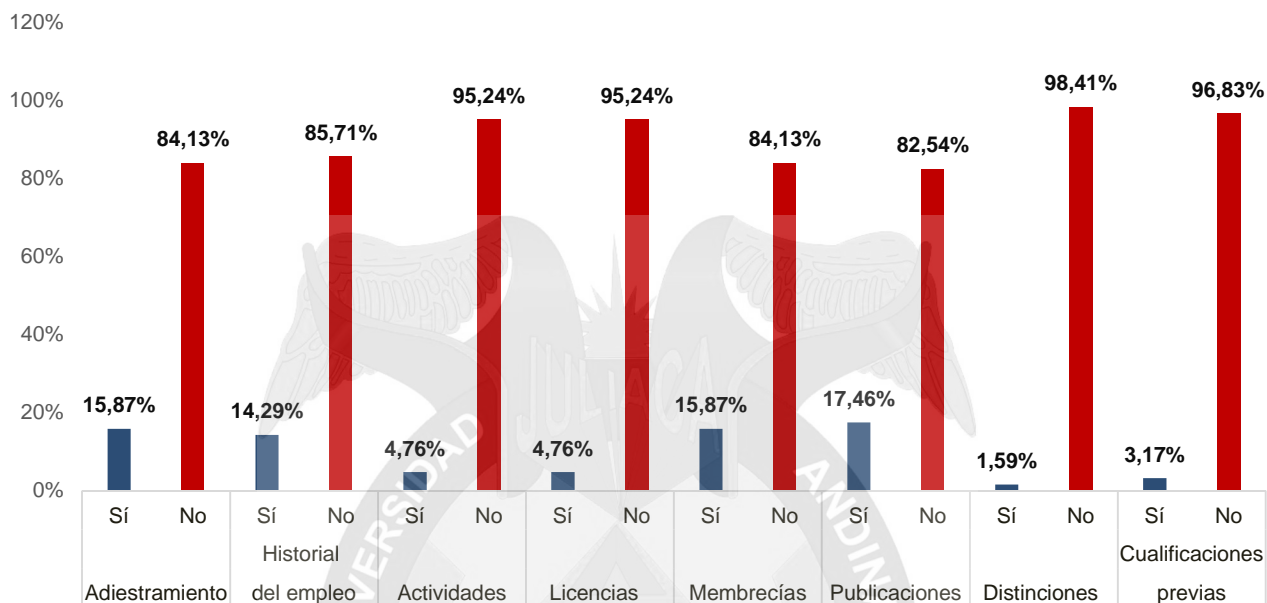
VALOR PROBATORIO DE LA PERICÍA																		
Nº	Sala penal de apelación	Año	Educación o adiestramiento		Historial del empleo		Actividades profesionales		Licencias		Membrecías en asociaciones		Publicaciones y presentaciones		Honores y Distinciones		Cualificaciones previas como peritos	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	03	31	03	31	01	32	01	32	04	30	03	34	00	34	01	33
2	San Román	2014	07	22	06	23	01	29	02	28	06	23	08	18	01	28	02	28
Total			10	53	09	54	02	61	03	60	10	53	11	52	01	62	02	61

FUENTE.- Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 -2014

ELABORACIÓN: Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 15

VALOR PROBATORIO DE LA PERICIA



Fuente: Cuadro Numero 15

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 15 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Analiza el valor probatorio de la pericia como la cualificación adecuada del perito". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

En el gráfico del cuadro número 15 se colige: a) educación o adiestramiento, no se hace referencia en el 84.13%, se hace referencia en el 15.87%; b) historial del empleo, no se hace mención en el 85.71%, se hace referencia en el 14.29%; c) actividades profesionales, en el 95.24% no se señala, se hace mención en el 4.76%; d) licencias, no señala en el 95.24%, sólo se hace mención en el 4.76%; e) membresías en asociaciones o grupos profesionales, que no se menciona en el 84.13%, si hace mención en el 15.87%; f) publicaciones y presentaciones, no hace mención en el 82.54%, sólo se hace mención en el 17.46%; g) honores y distinciones, no se hace mención en el 98.41%, tan sólo se hace mención en el 1.59%; h) cualificaciones previas como peritos, no se hace referencia en el 96.83%, se hace referencia tan sólo en el 3.17%.

3. INTERPRETACIÓN

El juez al no poder conocer todo necesita de un conocimiento especializado para poder fundar su decisión en virtud de criterios lógicos, objetivos y racionales. En tal sentido, el perito es un testigo con conocimiento y experiencia cualificada sobre un tema que no le consta pero respecto del cual está en capacidad de emitir una opinión especializada.

Así como para fundar la necesidad del testimonio se ha dicho que el juez "No puede verlo todo", con igual razón se ha señalado que "tampoco puede saberlo todo". Partiendo de esta base, en ciertos casos se impone la intervención en el proceso de una persona que sepa lo que el juez no sabe: es el perito, sujeto al cual el magistrado debe ineludiblemente recurrir cuando ha verificado que para descubrir o valorar un elemento de prueba son necesarios determinados conocimientos artísticos, científicos o técnicos.

Cuando la cultura del juzgador no es adecuada para ocuparse de los rasgos técnicos o científicos específicos de los hechos litigiosos es necesario complementarla. Por ello, todos los sistemas procesales tienen que utilizar algunas formas de prueba pericial. Esto significa que hay que recurrir a peritos expertos en diversos ámbitos para ofrecer al juzgador toda la información técnica y científica necesaria para decidir el caso.

NÚMERO DEL CUADRO 16

ESTABLECE LA VINCULACIÓN DEL PERITO CON EL CASO

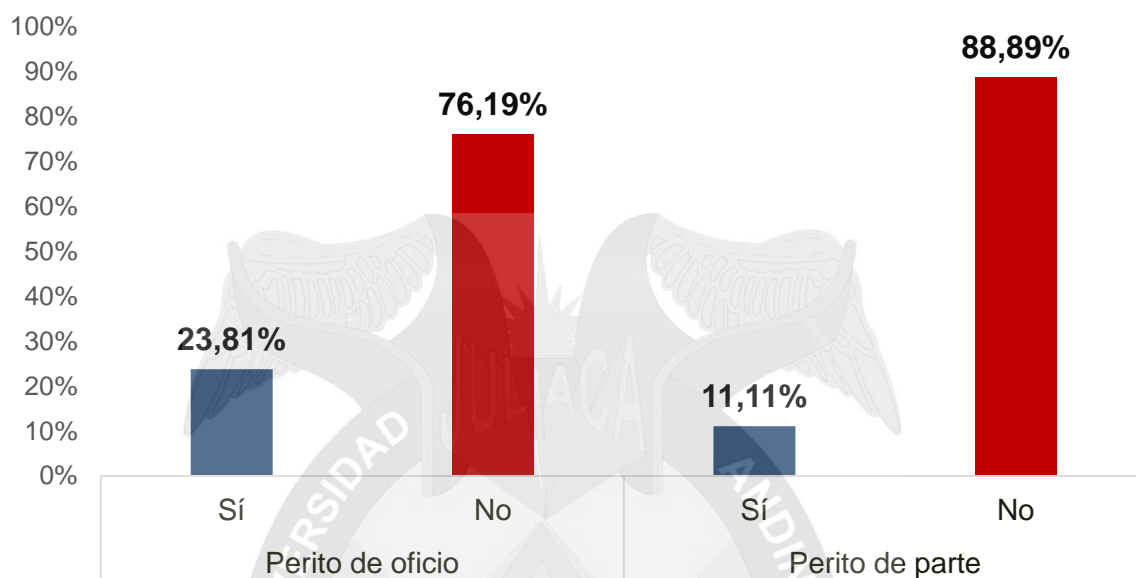
VINCULACIÓN DEL PERITO CON EL CASO						
Nº	Sala penal de apelación	Año	Es perito de oficio		Es perito de parte	
			SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	08	32	04	30
2	San Román	2014	07	16	03	26
Total			15	48	07	56

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 16

VINCULACIÓN DEL PERITO CON EL CASO



Fuente: Cuadro número 16

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 16 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Establece la vinculación del perito con el caso". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 16 se aprecia: el magistrado en la sentencia establece la vinculación del perito con el caso: a) es perito de oficio, en el 76.19% no lo establece, sólo lo precisa en el 23.80%; b) es perito de parte, en el 88.89% no lo precisa, tan sólo lo señala en el 11.11%.

3. INTERPRETACIÓN

Los magistrados en las sentencias condenatorias, considero que deben establecer, el perito que ha sido examinado en el juicio oral, es un perito de oficio o perito ofrecido por las partes. Ello es de suma importancia para determinar si tiene algún interés en el caso; generalmente los peritos ofrecidos por las partes siempre emiten, declaran a favor del oferente.

NÚMERO DEL CUADRO 17

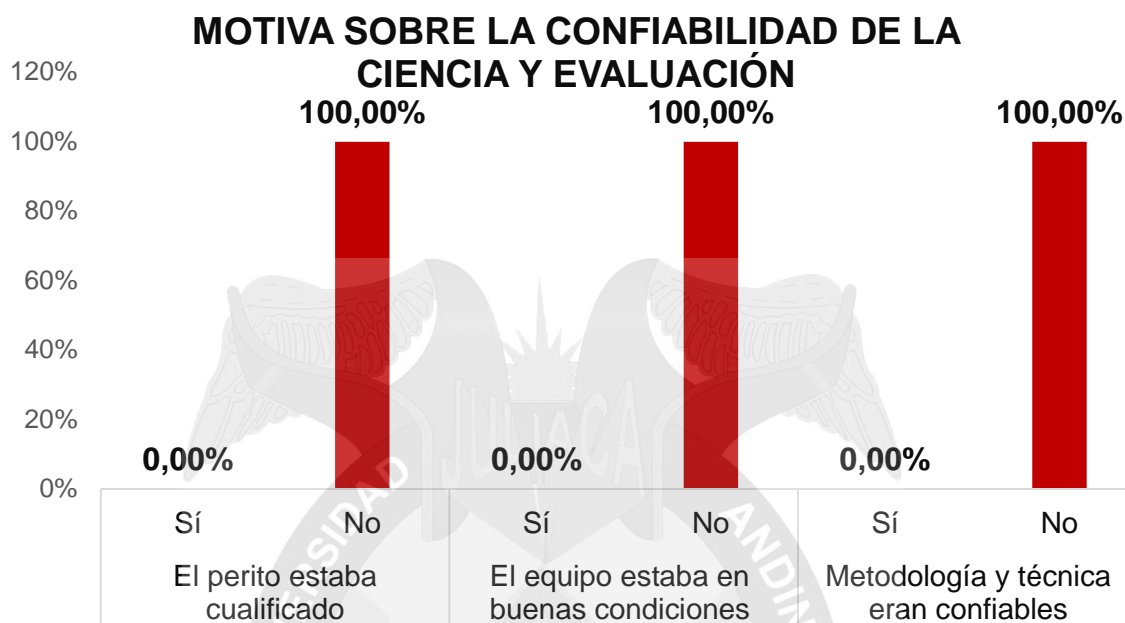
ESTABLECE LA CONFIABILIDAD DE LA CIENCIA Y DE LA EVALUACIÓN

CONFIABILIDAD DE LA CIENCIA Y EVALUACIÓN								
Nº	Sala penal de apelación	Año	El perito estaba cualificado		El equipo estaba en buenas condiciones		Metodología y técnica eran confiables	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	00	33	00	33	00	33
2	San Román	2014	00	18	00	18	00	18
Total			00	51	00	51	00	51

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 17



Fuente: Cuadro Numero 17

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 17 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Establece la confiabilidad de la ciencia y la evaluación". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 17 se colige: los magistrados al dictar sentencia condenatoria, establecen la confiabilidad de la ciencia y de la evaluación como: a) el perito o peritos estaban cualificados para ello, no lo establece en el 100%, si lo establece en el 00%; b) el equipo que utilizo para la prueba del experimento estaba en buenas condiciones para operar adecuadamente, no lo establece en el 100%, si lo establece 00%; c) las teorías, principios, metodología y la técnica utilizada para el experimento o prueba eran confiables, no lo establece en el 100%, si lo establece en el 00%.

3. INTERPRETACIÓN

En la resolución de un caso, el magistrado utiliza para resolver, la lógica, el sentido común y la ciencia. Cuando nos referimos a la ciencia los magistrados recurren a los peritos de distintas materias o especialidades



como: médicos, contadores, ingenieros, psicólogos, agrónomos, físicos, matemáticos, etc.

El Tribunal Constitucional ha desarrollado conceptualmente los límites del derecho a la prueba en el expediente N° 6712-2005-HC/TC.

Pertinencia: exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del proceso. Es la relación lógica entre el medio y el hecho por probar. En consecuencia, prueba pertinente es aquella que de alguna manera hace referencia al hecho que constituye objeto del proceso. Prueba impertinente es la que evidentemente no tiene vinculación alguna con el objeto del proceso, en razón que no se puede inferir de la misma ninguna referencia directa ni indirecta con el mismo o con un objeto accesorio o incidental que sea menester resolver para decidir sobre el principal.

Conducencia e idoneidad: el legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos sean probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o vedado para verificar un determinado hecho.

Utilidad: se presenta cuando contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Sólo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, más ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta; cuando se

ofrecen medios probatorios para acreditar hecho no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar por su intermedio los hechos que pretenden ser probados por la parte; y cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se ha propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes.

Licitud: No puede admitirse medio probatorio obtenido en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida. En la STC 1014-2007-PH/TC, se exige la constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o las transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba.

Quiénes utilizan equipos, metodologías, instrumentos, etc., las mismas deben estar en óptimas condiciones.

NÚMERO DEL CUADRO 18

**ANALIZA LA CORROBORACIÓN O RATIFICACIÓN DE LA OPINIÓN
PERICIAL POR OTROS EXPERTOS QUE DECLARAN TAMBIÉN EN EL
MISMO PROCESO**

ANALIZA LA CORROBORACIÓN DE LA OPINIÓN PERICIAL POR OTROS EXPERTOS				
Nº	Sala penal de apelación	Año	SI	NO
1	San Román	2013	01	32
2	San Román	2014	01	17
Total			02	49

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 18

MOTIVA LA CORROBORACIÓN O RATIFICACIÓN
DE LA OPINIÓN PERICIAL POR OTROS
EXPERTOS QUE DECLARAN TAMBIÉN EN EL
MISMO PROCESO

Fuente: Cuadro número 18

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 18 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Analiza la corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran también en el mismo proceso". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso

2. ANÁLISIS

De gráfico del cuadro 18 se aprecia: en el 96.08% no analiza la corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos, sólo en el 3.92% lo han hecho.

3. INTERPRETACIÓN

Los magistrados no pueden creer ciegamente en la opinión de un perito, pues el dictamen pericial y la respectiva ratificación en el juicio oral, debe ser corroborado con la opinión de otros expertos en la materia; en muchos casos se ha visto que los peritos se equivocan, nadie tiene el conocimiento en forma absoluta en una determinada materia; por ello, es necesario escuchar a varios peritos o expertos en un determinado tema, para evitar que los magistrados incurran en errores judiciales.

NÚMERO DEL CUADRO 19

MÉTODO DE VALORACIÓN SOBRE LOS HECHOS

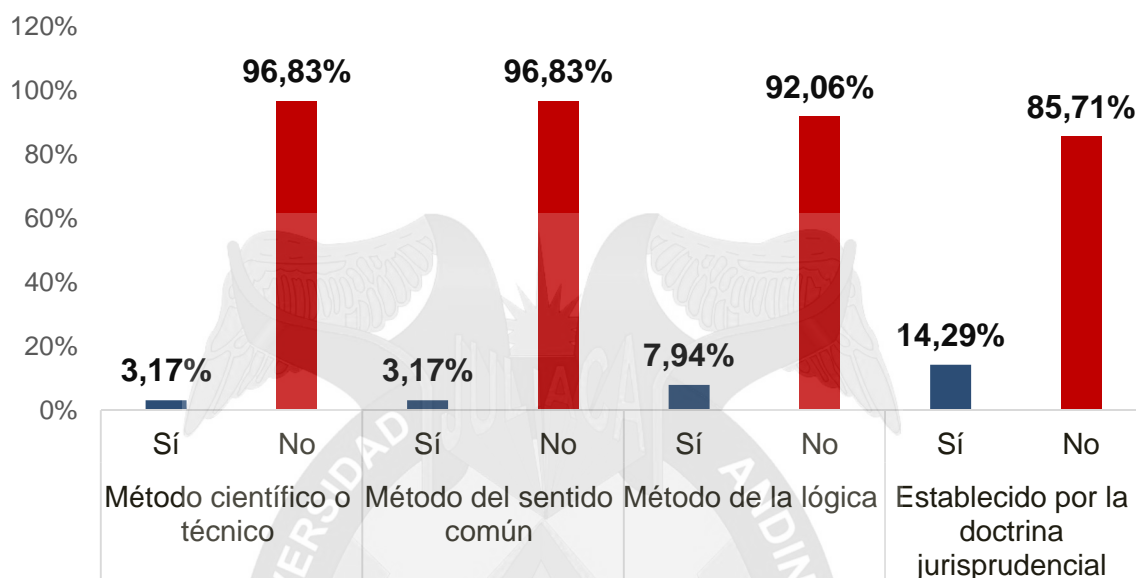
LA MOTIVACIÓN SOBRE LOS HECHOS										
Nº	Sala penal de apelación	Año	Método científico o técnico		Método del sentido común		Método de la lógica		Establecido por la doctrina jurisprudencial	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	01	34	01	34	03	31	04	30
2	San Román	2014	01	27	01	27	02	27	05	24
Total			02	61	02	61	05	58	09	54

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 19

MÉTODO DE VALORACIÓN SOBRE LOS HECHOS



Fuente: Cuadro número 19

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 19 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Método de valoración sobre los hechos". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso.

2. ANÁLISIS

Del gráfico del cuadro número 19 se aprecia: a) método científico o técnica, no se ha hecho referencia en el 96.83%, sólo se hace referencia en el 3.17%; b) método del sentido común, no se ha señalado en el 96.83%, sólo se señala en el 3.17%; c) método de la lógica, no se hace mención en forma absoluta en el 92.06%, sólo se señala en el 7.94%; d) establecido por la doctrina jurisprudencia, no se hace referencia en el 85.71%, sólo se hace mención en el 14.29%.

3. INTERPRETACIÓN

Los magistrados al expedir la sentencia, deben precisar que método ha utilizado para valorar los hechos; esto es, las pautas que se ha seguido para la valoración, que bien han podido ser criterios científicos, sentido común, la lógica, así como aquellos que se encuentran previstos en el artículo 158 del Código Procesal Penal, o han sido establecidos por la



doctrina jurisprudencial. Pues así lo exige el artículo 158 inciso 1 del Código Procesal Penal, la misma señala: "En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados".



NÚMERO DE CUADRO: 20

MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

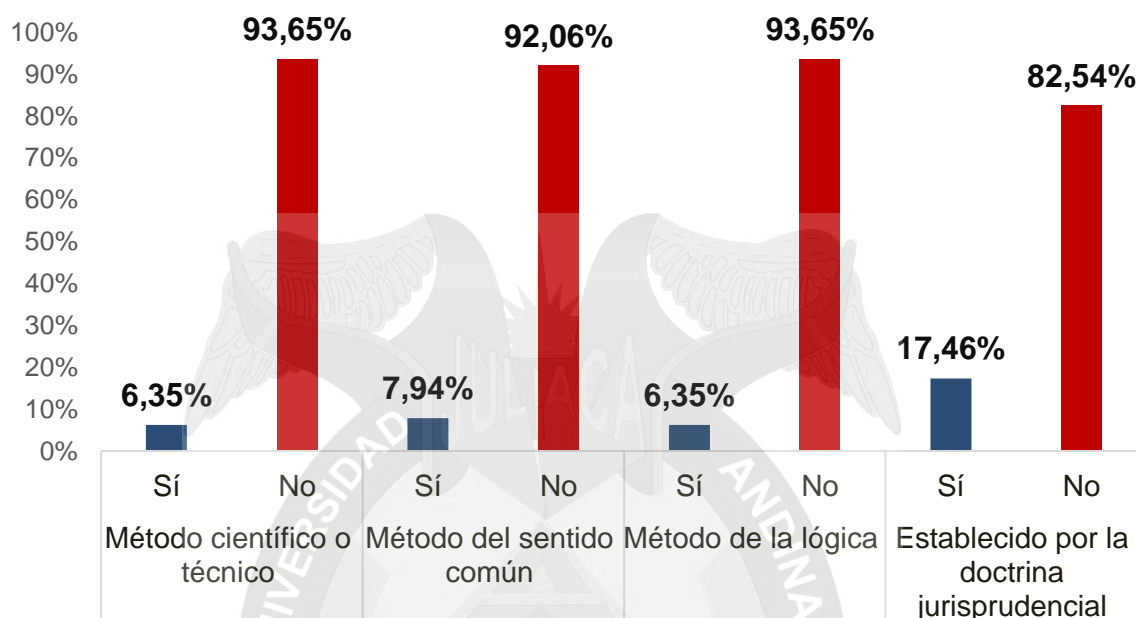
MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA										
Nº	Sala penal de apelación	Año	Método científico o técnico		Método del sentido común		Método de la lógica		Establecido por la doctrina jurisprudencial	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	San Román	2013	02	32	02	32	03	31	05	29
2	San Román	2014	02	27	03	26	01	28	06	23
Total			04	59	05	58	04	59	11	52

FUENTE : Datos obtenidos del legajo de sentencias de la sala penal de apelaciones de la provincia de San Román años 2013 - 2014

ELABORACIÓN : Elaborado por la autora de la investigación.

GRÁFICO DEL CUADRO N° 20

MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA



Fuente: Cuadro número 20

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION

1. DESCRIPCIÓN

En el cuadro número 20 se consigna las frecuencias y los porcentajes del sub indicador: "Que criterio ha utilizado en la valoración de la prueba". Los datos se han obtenido del legajo de sentencias de vista, expedidas por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román, en los años 2013 y 2014. Dichos datos forman parte del total de la población de la respectiva unidad de estudio de análisis de la hipótesis general y se analiza las consecuencias de la variable dependiente, la afectación del derecho al debido proceso

2. ANÁLISIS

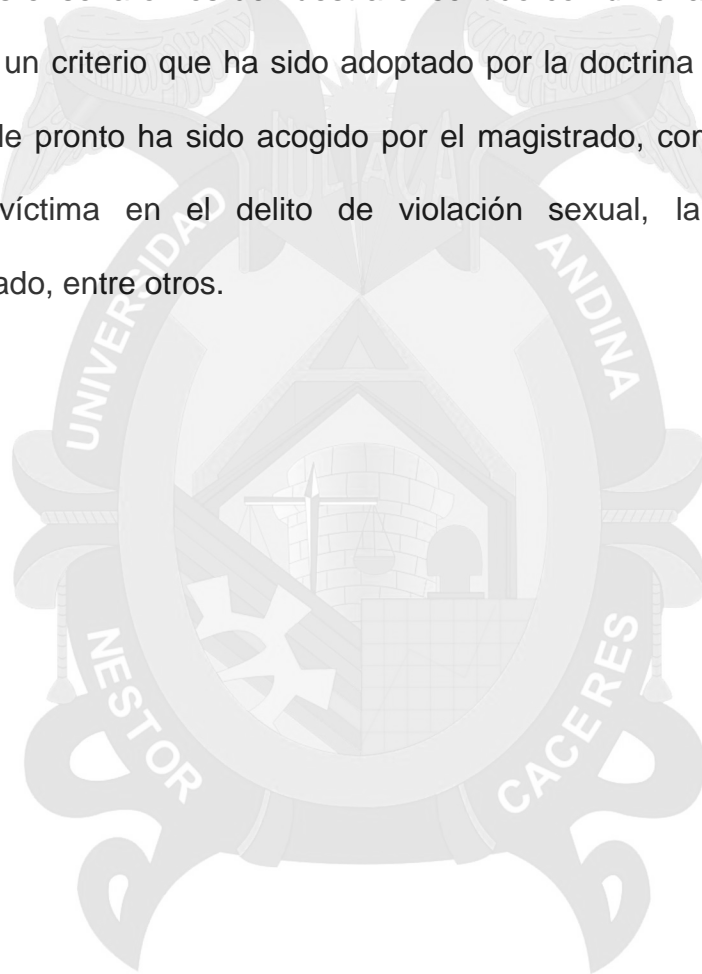
Del gráfico del cuadro número 20 se aprecia: a) método científico o técnica, no se ha valorado en el 93.65%, sólo se hace referencia en el 6.35%; b) método del sentido común, no se ha señalado en el 92.06%, sólo se señala en el 7.94%; c) método de la lógica, no hace mención en lo absoluto en el 93.65%, sólo se señala en el 6.35%; d) establecido por la doctrina jurisprudencial, no se hace referencia en el 82.54%, sólo se hace mención en el 17.46%.

3. INTERPRETACIÓN

La motivación en la valoración de la prueba, explica los criterios adoptados en la valoración de las pruebas, esto es, las pautas que se ha seguido para la valoración, que bien ha podido ser: la ciencia, la lógica, máximas de experiencia, o la establecida por la doctrina jurisprudencial, conforme lo dispone el artículo 158 inciso 1 del Código Procesal Penal.



Considero que al expedir una sentencia, el magistrado no sólo debe nombrar, citar las pruebas actuadas en la etapa del juicio oral; al valorar una prueba el Juez lo da credibilidad, certeza; en consecuencia, tiene la obligación de señalar que criterio ha adoptado para valorar dicho medio probatorio; dicha prueba es creíble porque así lo ha demostrado la ciencia, o así nos enseña o nos demuestra el sentido común o la lógica, o en todo caso es un criterio que ha sido adoptado por la doctrina jurisprudencial, la misma de pronto ha sido acogido por el magistrado, como en el caso del testigo víctima en el delito de violación sexual, la declaración del coimputado, entre otros.



CONCLUSIONES

PRIMERA: En las sentencias los magistrados enuncian los hechos y circunstancias objeto de la acusación; de igual manera las sentencias contienen la enunciación de las hipótesis alternativas a la hipótesis acusatoria, en lo fáctico se hace mención en el 87.30%, en lo jurídico por el contrario no se hace mención en el 93.65%.

SEGUNDA: La motivación del juicio histórico es clara, se ha expresado en un lenguaje comprensible para cualquier ciudadano, en este caso representa el 90.48%. La motivación fáctica de la sentencia tiene consistencia lógica, esto es libre de contradicciones o de vacíos o saltos lógicos, con un 74.6%.

TERCERA: La motivación sobre los hechos es completa; esto es, existe un pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probado, en el 58.70%; la motivación sobre los hechos no ha sido completa en el 41.27%.

CUARTA: Para dictar sentencia condenatoria los magistrados han recurrido como fuente de prueba: en el 79.37% en la declaración del imputado, en el 77.78% en la declaración del agraviado, en el 69.84% en los peritos, en el 63.49% en las declaraciones testimoniales, en el 33.33% en la prueba documental. Ha considerado todas las pruebas practicadas en el 33.33%, no ha considerado todas las pruebas practicadas en el 66.67%.

QUINTA: La argumentación en la sentencia sobre las pruebas legítimamente incorporadas en el juicio se hace mención en el 77.78%, no se ha hecho referencia en el 22.22%. En relación al examen individual de las

pruebas como la fiabilidad probatoria, interpretación, verosimilitud y comparación con lo alegado, en su gran porcentaje no se ha argumentado. La motivación acerca del razonamiento probatorio, no se ha efectuado en el 74.60%, sólo se ha cumplido en el 25.40%.

SEXTA: En las sentencias condenatorias no se analiza el valor de la declaración del acusado como: honestidad, objetividad, capacidad de memoria, corroboración con otras pruebas, las cuales supera el 92.06%.

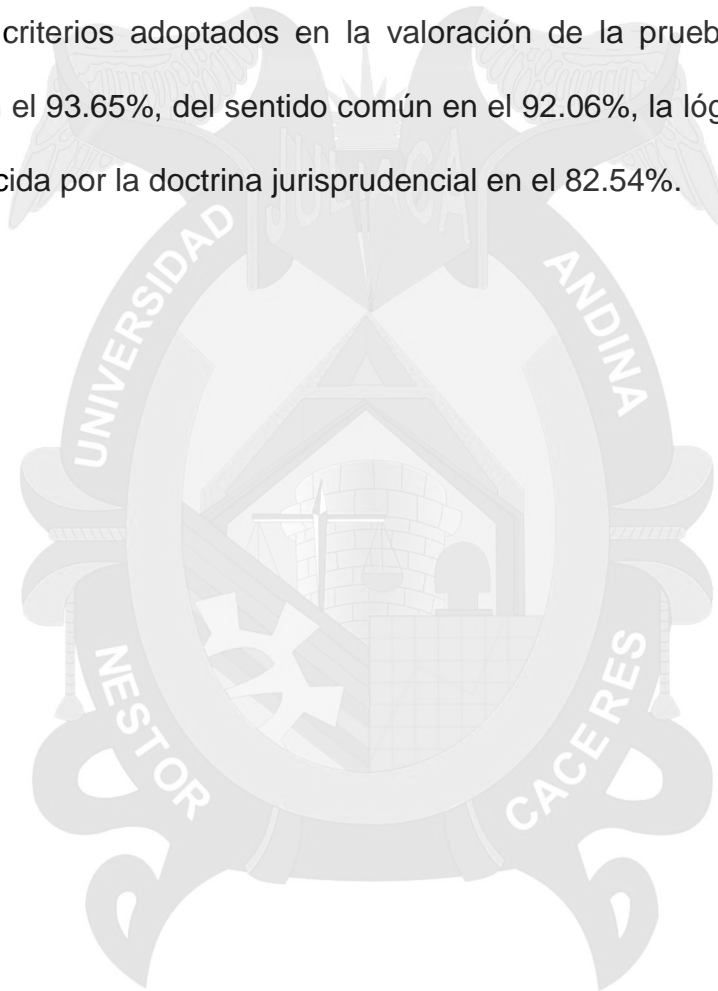
SETIMA: No se ha argumentado el valor probatorio del testimonio como: el conocimiento personal de los hechos, la comprensión de los hechos que relata, en el 87.30%, solamente se ha motivado en el 12.70%. En relación al análisis de la credibilidad del testigo como la honestidad, objetividad, capacidad sensorial y de memoria no se ha argumentado 95.24%. La argumentación para evaluar la declaración del testigo como: examen directo, bolígrafo, contrainterrogatorio y examen psicológico, superior a 95.24% no se argumentado.

OCTAVA: En relación al análisis del valor probatorio de la pericia como: educación, historial del empleo, actividad profesional, licencias, membresías, publicaciones, honores y cualificaciones previas no se argumentan en superior al 82.54%. Tampoco se justifica sobre la vinculación del perito con el caso; como perito de oficio no se hace mención en el 76.19%, en el peritaje de parte en el 88.89%. En la sentencia no establece la confiabilidad de la ciencia y la evaluación del peritaje en el 100%. En relación al análisis de la opinión pericial de otros expertos, no se ha argumentado en el 96.08%.



NOVENA: En relación a la motivación sobre los hechos, no explica los criterios adoptados en la valoración de los hechos como: método científico en el 96.83%, del sentido común en el 96.83%, la lógica en el 92.06% y la establecida por la doctrina jurisprudencial en el 85.71%

DECIMA: En relación a la argumentación en la valoración de la prueba, no explica los criterios adoptados en la valoración de la prueba como: método científico en el 93.65%, del sentido común en el 92.06%, la lógica en el 93.54% y la establecida por la doctrina jurisprudencial en el 82.54%.



RECOMENDACIONES

Si bien es cierto, en algunos aspectos como la argumentación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, sobre la enunciación de las hipótesis alternativas o a la hipótesis acusatoria; entre otros se ha avanzado. Sin embargo, se ha podido apreciar de la investigación efectuado, no se motiva en la valoración de la prueba, tampoco se motiva en la valoración de los hechos, mucho menos no se hace mención en relación al método de valoración de los hechos y las pruebas, con ello como es natural se afecta el debido proceso, al que tiene derecho todo imputado.

Para superar este problema, se debe adoptar las siguientes medidas:

PRIMERA: La Academia de la Magistratura del Perú, debe capacitar en forma permanente, a los aspirantes y a los magistrados, sobre la argumentación jurídica relacionada a la valoración de los hechos, pruebas y métodos de valoración.

SEGUNDA: El Consejo Nacional de la Magistratura, en el proceso de nombramiento y en el proceso de ratificación de los magistrados, debe aplicar con rigor la evaluación, en relación a la argumentación sobre la valoración de los hechos, pruebas y métodos de valoración utilizados en la expedición de las sentencias.

TERCERA: Los magistrados por la delicada función que desempeñan, se deben auto capacitar, para superar los problemas expuestos.



CUARTA: Las facultades de Derecho de todas las Universidades, deben enseñar a sus alumnos, futuros operadores del derecho, la asignatura de argumentación jurídica; fundamentalmente relacionado a los temas como: la valoración de las pruebas, la valoración de los hechos y los métodos de valoración.



BIBLIOGRAFÍA

- ABELL LLUCH, X. (2012). *Derecho Probatorio*. España: BOSCH.
- ADRIAN AMBIA, A. (2000). *Guía de Pautas Metodológicas para la Elaboración de Sentencias* (Primera ed.). Lima, Perú: Tarea Asociación Gráfica Educativa.
- AMORETTI PACHAS, M. (2007). *Violación al Debido Proceso Penal* (Primera ed.). Lima, Perú: GRIJLEY.
- ANGULO ARANA, P. (2014). *El Caso Penal*. Lima: Gaceta Jurídica S.A.
- ARIANO DEHO, E. (2005). *La Constitución Comentada* (Primera ed., Vol. II). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- AROCENA, Gustavo Alberto; BACARCE, Fabián Ignacio y CESANO, José Daniel. (2009). *Prueba en Materia Penal* (Primera ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea de Alfredo y Recardo Depalma.
- BASTOS PINTO, M. C. (2012). *Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo*. Lima - Perú: GACETA JURÍDICA S.A.
- BEDOYA SIERRA, L. (2013). *Prueba de Referencia y Otros Usos de Declaraciones Anteriores al Juicio Oral*. Medellín, Colombia: Panamericana Formas e Impresos S.A.
- BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LAYNETT, Eduardo. (2004). *El Proceso Penal. Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio. Quinta Edición*. Combia: Ladiprint Editorial Ltda.



- BUSTAMANTE ALARCÓN, R. (2001). *El derecho a Probar como Elemento Esencial de un Proceso Justo*. Lima: ARA.
- BUSTAMANTE ZEGARRA, Ramiro y PALANCO GUTIÉRREZ, Carlos. (2005). *Argumentación Jurídica*. Arequipa, Lima: Universidad Nacional de San Agustín.
- CABANELLAS DE TORRES, G. (2010). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual* (30° ed., Vol. VIII). Buenos Aires: Heliasta S.R.L.
- CARO JOHN, José Antonio y HUAMAN CASTELLARES, Daniel. (2014). *El Sistema Penal en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima Perú: Editores del Centro.
- CARRIÓN LUGO, J. (2004). *Tratado de Derecho Procesal Civil* (Primera ed.). Lima: GRIJLEY.
- CASTILLO ALVA, J. (2013). *La motivación de la valoración de la prueba en materia penal* (Primera ed.). Lima, Perú: GRIJLEY.
- CASTILLO ALVA, José Luís, LUJAN TUPE, Manuel y ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger. (2006). *Razonamiento Judicial. Interpretación, Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales* (Segunda ed.). Lima, Perú: Ara.
- CERDAN SAN MARTÍN, Rodrigo y FELICES MENDOZA, María Esther. (2011). *El Nuevo Proceso Penal* (Primera ed.). Lima, Perú: GRJLEY.
- CHOCANO NÚÑEZ, P. (2008). *Derecho Probatorio y Derechos Humanos* (Segunda ed.). Lima: IDEMSA.



- COLOMER HERNÁNDEZ, I. (2003). *La Motivación de las Sentencias: sus Exigencias Constitucionales y Legales* (Primera ed.). Madrid: Tirant Lo Blanch.
- DECASTRO GONZÁLEZ, A. (2009). *El Contrainterrogatorio*. Medellín, Colombia: Legis S.A.
- DIAZ GARCÍA, I. (2009). *Derechos Fundamentales y Decisión Judicial. Algunos Criterios para la Mejor Aplicación del Derecho*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
- GIMENO SENDRA, V. (2012). *Derecho Procesal Penal*. Navarra: Aranzadi SA.
- GONZÁLES CASTILLO, J., & GONZÁLES CASTILLO, J. (2006). LA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA Y LA SANA CRITICA. *Revista Chilena de Derecho*, vol. 33, núm. 1, enero-abril, 93-107.
- GONZÁLEZ CASTILLO, J. (2006). La Fundamentación de las Sentencias y la Sana Crítica. *Revista Chilena de Derecho*, vol. 33, núm. 1, enero-abril, 93-107.
- GOZAÍNE OSVALDO, A. (s/f). *Derecho Procesal Constitucional. Debido Proceso* (Primera ed.). Buenos Aires, Argentina: Culzoni.
- GOZAÍNE, O. A. (s.f.). *Derecho Procesal Constitucional. El Debido Proceso*. Buenos Aires - Argentina: RUBINZAL - CULZONI EDITORES.
- GUIRARDI, O. (1992). *Lógica del Proceso Judicial (Diálogo del Derecho)*. Córdoba, Argentina: Marcos Lerner.
- GUIRARDI, O. (s.f.). *Lógica del Proceso Judicial (d)*.



- HIGA SILVA, César y YAGI KUME, Miguel. (2013). *El Caso Abencia Meza: ¿Una condena a 30 años de pen privativa de libertad sin prueba suficiente?* Lima: Gaceta Jurídica S.A.
- IGARTUA SALAVERRIA, J. (1994). *Valoración de la Prueba, Motivación y Control en el Proceso Penal*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- LANDA ARROYO, C. (2010). *Los derechos Fundamentales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima Perú: PALESTRA.
- LEÓN PASTOR, R. (2008). *Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales* (Primera ed.). Lima, Perú: VLA & SCTLtda.
- MIRANDA ESTRAMPES, M. (2012). *La Prueba en el Proceso Penal Acusatorio* (Primera ed.). Lima, Perú: JURISTA EDITORES E.I.R.L.
- MIXÁN MÁSS, F. (1993). *Juicio Oral* (Primera ed.). Trujillo: BLG.
- MIXÁN MÁSS, F. (1998). *Lógica para Operadores del Derecho* (Primera ed.). Lima, Perú: BLG.
- MIXÁN MÁSS, F. (2009). *Cuestiones Epistemológicas y Teoría de la Investigación y de la Prueba* (Primera reimpresión ed.). Trujillo: BLG EDICIONES.
- MORENO HOLMAN, L. (2012). *Teoría del Caso*. Argentina: Ediciones Didot.
- ORE GUARDIA, A. (2014). *Las Garantías Constitucionales del Debido Proceso en el Nuevo Código Procesal Penal. Nuevo Código Procesal Penal Comentado. Tomo 1*. Lima: Ediciones Legales E.I.R.L.



PELAEZ BARDALES, J. A. (2013). *La Prueba Penal*. Lima: GRIJLEY, pág. 70.

QUIROGA LEÓN, A. (2014). *El Debido Proceso Legal en el Perú y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos - Jurisprudencia* (Segunda Edición ed.). Lima: IDEMSA.

QUIROZ SALAZAR, W. (2015). *El Interrogatorio Cruzado en el Modelo Procesal Acusatorio*. Lima: ADEE.SAC,.

ROSAS YATACO, J. (2013). *Tratado de Derecho Procesal Penal*. Lima: Pacífico Editores S.A.C.

RUBIO CORRREA, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993* (Primera ed., Vol. V). Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina. (2012). *El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Lima Perú: Gráfica Delvi S.R.L.

SAN MARTÍN CASTRO, C. (2015). *Derecho Procesal Penal Lecciones*. Lima: Iakob Comunicadores & Editores S.A.C.

SÁNCHEZ LUGO, C. (s/f). *La Teoría del Caso*. Colombia: Imprenta Nacional de Colombia.

SCHONBOHM, H. (2014). *Manual de Sentencias Penales. Aspectos Generales de Estructura, Argumentación y Valoración Probatoria*. Lima: ARA Editores.



SEBASTIÁN MIDÓN, M. (2007). *Tratado de la Prueba*. Argentina: Librería de la Paz.

TABOADA PILCO, G. (2014). *Constitución Política del Perú de 1993*. Lima Perú: GRIJLEY.

TALAVERA ELGUERA, P. (2009). *La Prueba en el Nuevo Proceso Penal* (Primera ed.). Lima: ZOOM-Grafic de Henry Alexander Figueroa Mandaré.

TALAVERA ELGUERA, P. (2009). *La Sentencia Penal en el Nuevo Código Procesal Penal su Estructura y Motivación* (Primera ed.). Lima, Perú: Academia de la Magistratura.

TALAVERA ELGUERA, P. (2009). *La Sentencia Penal en el Nuevo Código Procesal Penal su Estructura y Motivación*. Lima: Academia de la Magistratura.

TARUFFO, M. (2006). *La Motivación de la Sentencia Civil* (Primera ed.). (L. Córdova Vianello, Trad.) Colonia, México: coordinación de Documentación y Apoyo Técnico.

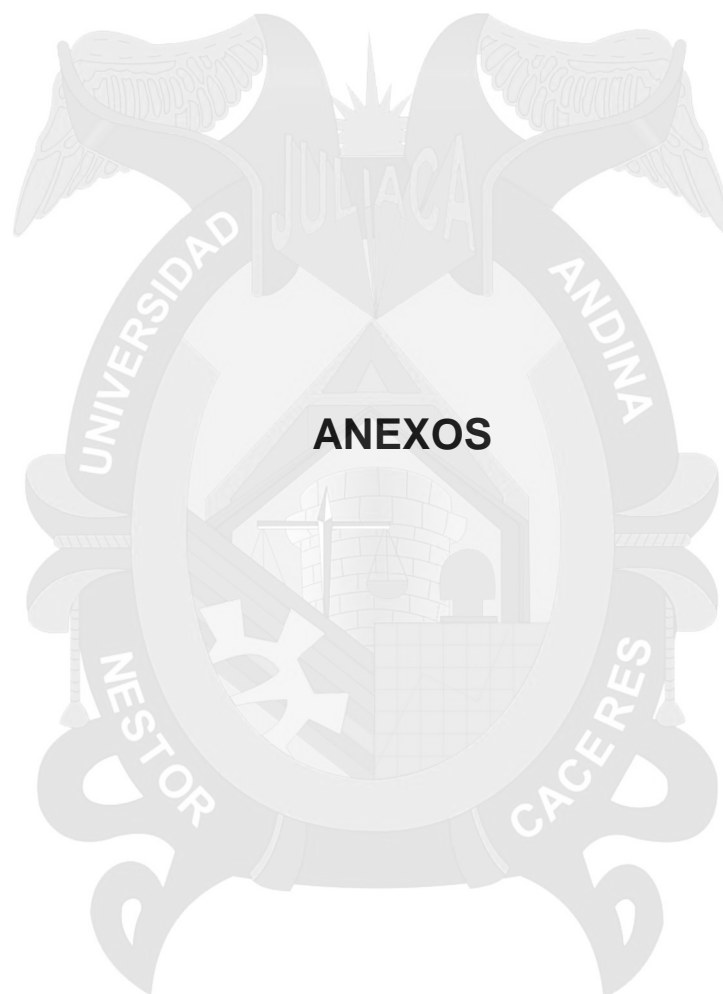
TICONA POSTIGO, V. (1998). *El Debido Proceso y la Demanda Civil* (Primera ed., Vol. II). Lima, Perú: RODHAS.

URBINO MARTÍNEZ, J. J. (2011). *La Nueva Estructura Probatoria del Proceso Penal* (segunda ed.). Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica.



VIAL CAMPOS, P. (2008). *Técnicas y Fundamentos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno* (Primera Reimpresión ed.). Santiago de Chile: Librotecnia.





MATRIZ DE CONSISTENCIA

MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA, HECHOS E INAPLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN, AFECTAN EL DEBIDO PROCESO EN SENTENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO, 2013 - 2014							
PROBLEMA		OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	POBLACIÓN Y MUESTRA
GENERAL	¿Será que la carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de valoración de la prueba son causas que afectan el debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno, 2013 - 2014?	Verificar que la carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de valoración de la prueba son causas que afectan el debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno, 2013 - 2014.	La carencia de motivación en la valoración de la prueba, los hechos e inaplicación de los métodos de valoración de la prueba son causas que afectan el debido proceso, en las sentencias condenatorias en materia penal de la zona norte de la Corte Superior de Justicia de Puno, 2013 - 2014	1. Carencia de motivación en la valoración de la prueba.	- La motivación de la resolución judicial.	MÉTODOS	<p>Se empleará el método científico como método general y específicos, se aplicará el método estadístico, el de matematización y la inferencial, en razón de que estos métodos nos permiten lograr el objetivo de la investigación propuesta.</p> <p>Por tratarse de una investigación cualitativa, La zona norte la Corte Superior de Justicia de Puno, La Sala de Apelaciones de la Provincia de San Román.</p> <p>Será materia de investigación todas las sentencias, es decir, de carácter censal, todas las sentencias condenatorias expedidas por la Sala.</p>
				2. Carencia de motivación de los hechos.	- La valoración de los hechos		
ESPECÍFICOS	a) ¿Será que la carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso?	a) Determinar que la carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso.	a) La carencia de motivación en la valoración de la prueba es una de las causas que afecta el derecho al debido proceso.	3. Inaplicación de los métodos de valoración de la prueba.	- Métodos de valoración de la prueba	TÉCNICAS	Observación
	b) ¿Será que la carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el debido proceso?	b) Establecer la carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el debido proceso.	b) La carencia de motivación de los hechos, es otra de las causas que afecta el debido proceso.	4. La afectación del derecho al debido proceso.	- Efectos		
	c) ¿Será que la inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso?	c) Demostrar la inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso.	c) La inaplicación de los métodos de valoración de la prueba, es causa que afecta el derecho al debido proceso.				
						INSTRUMENTOS	<p>TIPO DE INVESTIGACIÓN</p> <p>Cuantitativo</p> <p>De tipo: Causal explicativo</p>

Fuente: Elaborada por la autora de la investigación.



Anexo2: Instrumento de investigación

FICHA DE OBSERVACIÓN



UNIVERSIDAD ANDINA

"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" – JULIACA

ESCUELA DE POST-GRADO

DOCTORADO EN DERECHO

FICHA DE OBSERVACIÓN

Sentencias expedidas en la sala penal de apelaciones de la
Provincia de San Román 2013 y 2014

Juliaca, mayo de 2015



FICHA DE OBSERVACIÓN

ANEXO N° 02.

LUGAR: _____ OBSERVADOR: _____

FECHA: _____ N° DE FICHA: _____

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO: _____

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

ESCUELA DE POST GRADO

Datos obtenidos de las sentencias penales, expedidos en la Sala Penal de apelaciones de la Provincia de San Román 2013 y 2014.

INSTRUCCIONES: Registrar la conducta observada a cada ítem, marcando con una "X".

Delito (s) materia de investigación:

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

I. LA MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS

1. En la sentencia se enuncia los hechos y circunstancias objeto de la acusación (art. 394°.2).

a) Los enunciados fácticos de la parte acusadora.

Si (), No ()

b) Los enunciados están detallados tomando en cuenta la pluralidad de hechos punibles.

Si (), No ()

c) Los enunciados están detallados teniendo en cuenta la pluralidad de acusados.

Si (), No ()

2. En la sentencia contiene la enunciación de las hipótesis alternativas a la hipótesis acusatoria; es decir, la explicación o versión acerca de los hechos que formulan las otras partes. Puede tratarse tanto de una alegación defensiva como de una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, o simplemente de una versión distinta de la presentada por la acusación. La misma se desprende del art. 394°.2 al referirse el Código a la enunciación de la pretensión de la defensa del acusado, que como se sabe engloba tanto lo fáctico como lo jurídico.

a) Pretensión de la defensa en lo fáctico

Si (), No ()

b) Pretensión de la defensa en lo jurídico

Si (), No ()

3. La motivación del juicio histórico es clara (art. 394°.2); esto es, debe expresarse en un lenguaje comprensible para cualquier ciudadano. No sólo se trata de observar las reglas de lenguaje y estilo, sino también de mostrar una coherencia narrativa y de que se encuentren comprendidos todos elementos del *tema probandum*.

Si (), No ()

4. La motivación fáctica es lógica (art. 394°.3); esto es, libre de contradicciones o de vacíos o saltos lógicos (falta de alguna de las premisas del razonamiento probatorio). Además, la argumentación debe respetar las leyes del razonamiento correcto y encontrarse carente de falacias.

Si (), No ()

5. La motivación sobre los hechos es completa (art. 394°.3), no solo que en ésta exista un pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados, sino también a los que se declaran improbados. Esta regla es consecuencia del llamado principio de completud.

Si (), No ()

II. LA MOTIVACIÓN DE LAS PRUEBAS

6. Las fuentes de prueba valoradas
- a) La declaración del imputado ()
 - b) Testimonio ()
 - c) La pericia ()
 - d) El careo ()
 - e) Prueba documental ()
 - f) El reconocimiento ()
 - g) Inspección judicial ()
 - h) Reconstrucción ()
 - i) Declaración del agraviado
 - j) Otros ()

7. La motivación de la sentencia considera todas las pruebas practicadas (arts. 393°.2 y 394°.3), no solo las que sustentan la hipótesis elegida. Se debe apreciar también las pruebas presentadas para refutarlas y las pruebas que respaldaban las hipótesis rechazadas

Si (), No ()

8. El juez justifica la motivación fáctica en las pruebas legítimamente incorporadas en el juicio (art. 393°.1). Dicho de otro modo, la hipótesis o versión acerca de los hechos elegida por el juez debe sustentarse en pruebas practicadas u oralizadas en el debate.

Si (), No ()

9. La motivación sobre el juicio histórico o fáctico contiene los resultados del examen individual de las pruebas (arts. 158°.1 y 393°.2), explica las fases de:

- | | |
|---|----------------|
| a) Fiabilidad probatoria | Si (), No () |
| b) Interpretación | Si (), No () |
| c) Verosimilitud | Si (), No () |
| d) Comparación con los enunciados fácticos alegados | Si (), No () |

10. La sentencia contiene la motivación acerca del razonamiento probatorio (art. 394°.3), lo que significa explicar la inferencia probatoria, una de cuyas premisas esenciales está dada por la regla o máxima de experiencia (393°.2). Es decir, no basta con enunciar lo

que dijo tal o cual testigo o perito (condición necesaria), sino que es indispensable que se enuncie la regla de experiencia conforme a la cual se le otorga o no credibilidad (condición suficiente).

Si () No ()

11. Analiza el valor probatorio de la declaración del acusado

- a) Honestidad Si (), No ()
- b) Objetividad Si (), No ()
- c) Capacidad de memoria Si (), No ()
- d) Es corroborado con otras pruebas Si (), No ()

12. Analiza el valor probatorio del testimonial; como la competencia del testigo:

- a) Conocimiento personal de los hechos Si (), No ()
- b) Comprensión de los hechos que relata Si (), No ()

13. Analiza la prueba testimonial como: la credibilidad del testigo:

- a) Honestidad Si (), No ()
- b) Objetividad Si (), No ()
- c) Capacidad sensorial Si (), No ()
- d) Capacidad de la memoria Si (), No ()

14. Analiza el mecanismo para evaluar la declaración del testigo

- a) Examen directo del testigo Si (), No ()
- b) El bolígrafo Si (), No ()
- c) El contrainterrogatorio Si (), No ()
- d) Examen psicológico Si (), No ()

15. Analiza el valor probatorio de la pericia como la cualificación adecuada del perito

- a) Educación a adiestramiento Si (), No ()
- b) Historial del empleo Si (), No ()
- c) Actividades profesionales Si (), No ()
- d) Licencias Si (), No ()
- e) Membresías en asociaciones o grupos profesionales Si (), No ()
- f) Publicaciones y presentaciones Si (), No ()
- g) Honores y distinciones Si (), No ()
- h) Cualificaciones previas como perito Si (), No ()

16. Establece vinculación del perito con el caso

- a) Es perito de oficio Si (), No ()
- b) Es perito de parte Si (), No ()

17. Establece la confiabilidad de la ciencia y de la evaluación

- a) El perito o (s) estaban cualificados para ello Si (), No ()
- b) El equipo que utilizó para la prueba del experimento estaba en buenas condiciones para operar adecuadamente Si (), No ()
- c) Las teorías, principios, metodología y la técnica utilizada para el experimento o prueba eran buenas Si (), No ()

18. Analiza la corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran también en el mismo proceso

Si (), No ()

III. LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN

19. **La motivación sobre los hechos**, explica los criterios adoptados en la valoración de los hechos, esto es, las pautas que se ha seguido

para la valoración, que bien han podido ser criterios científicos, técnicos o de sentido común, así como aquéllos que se encuentran previstos específicamente en la ley (art. 158°) o han sido establecidos por la doctrina jurisprudencial. Así exige el art. 158°.1.

- | | |
|--|----------------|
| a) Método científico o técnico | Si (), No () |
| b) Método del sentido común | Si (), No () |
| c) Método de la lógica | Si (), No () |
| 20. Establecido por doctrina jurisprudencial | Si (), No () |

La motivación en la valoración de la prueba, explica los criterios adoptados en la valoración de las pruebas, esto es, las pautas que se ha seguido para la valoración, que bien han podido ser criterios científicos, técnicos o de sentido común, así como aquéllos que se encuentran previstos específicamente en la ley (art. 158°) o han sido establecidos por la doctrina jurisprudencial. Así exige el art. 158°.1.

- | | |
|---|----------------|
| a) Método científico o técnico | Si (), No () |
| b) Método del sentido común | Si (), No () |
| c) Método de la lógica | Si (), No () |
| d) Establecido por doctrina jurisprudencial | Si (), No () |



Anexo 3: Designación de asesor de tesis

DESIGNACIÓN DEL ASESOR DE TESIS

SOLICITUD PARA ASESOR DE TESIS

UNIVERSIDAD ANDINA

"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" – JULIACA

ESCUELA DE POST-GRADO

DOCTORADO EN DERECHO



**SOLICITUD PARA ASESOR
DE TESIS**

Juliaca, Mayo 2015



3.1. Solicitud para el asesor de tesis

SOLICITA: Como asesor de Tesis.

SEÑOR DOCTOR GERMAN APAZA PARICAHUA

OLGA MADELAINE CHURA PEREZ, identificado con DNI. N° 02425944, con el Código de Matrícula N° 26136030, con domicilio real en Manzana E1, Lote 11 de la Urbanización San Apolinar de la ciudad de Juliaca, ante usted con el debido respeto me presento y digo:

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para que me asesore en la tesis que se viene realizando y cuyo título es: **"MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA, HECHOS E INAPLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN, AFECTAN EL DEBIDO PROCESO EN SENTENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO, 2013 - 1014"**. Como requisito parcial para optar el Grado Académico de Doctor en Derecho en la Escuela de Postgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, Para su efecto adjunto un ejemplar del anteproyecto de tesis.

POR LO EXPUESTO:

Ruego a usted para que acceda a mi petición.

Juliaca, Mayo de 2015.

.....

Mgtr. Olga Madelaine Chura Pérez

3.2. Constancia de aceptación del asesor

CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL ASESOR



UNIVERSIDAD ANDINA

"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" – JULIACA

ESCUELA DE POST-GRADO

DOCTORADO EN DERECHO

CONSTANCIA DEL ASESOR

EL QUE SUSCRIBE, DOCTOR GERMAN APAZA PARICAHUA

HACE CONSTAR:

Luego de haber leído y analizado el Anteproyecto de Tesis, presentado por la Magíster OLGA MADELAINE CHURA PEREZ, identificado con DNI. N° 02425944, aspirante al Grado Académico de Doctor en Derecho en la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca. Por medio de la presente, acepto asesorar, durante la etapa del desarrollo del trabajo hasta su presentación y evaluación.

Se expide la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines de Tesis.

Juliaca, Mayo de 2015.

.....
GERMAN APAZA PARICAHUA

DOCENTE UNIVERSITARIO

FISCAL SUPERIOR PENAL

DOCTOR EN DERECHO

DNI. N° 02431815



Anexo 4 Recabar información

4.1. Solicitud para recabar información

4.2. Constancia de tener acceso a los legajos, expedientes

